

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA



TESIS

**EL ROL DEL POLICÍA COMO PRIMER RESPONDIENTE DENTRO DEL
PROCESO PENAL ACUSATORIO EN UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE
DERECHO**

PRESENTA

Mtro. BERNARDO RAMÓN OLIVO GUTIÉRREZ

**COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR
EN DERECHO CON ORIENTACIÓN EN DERECHO PROCESAL**

NOVIEMBRE, 2019

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA



TESIS

**EL ROL DEL POLICÍA COMO PRIMER RESPONDIENTE DENTRO DEL
PROCESO PENAL ACUSATORIO EN UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE
DERECHO**

PRESENTA

Mtro. BERNARDO RAMÓN OLIVO GUTIÉRREZ

**COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR
EN DERECHO CON ORIENTACIÓN EN DERECHO PROCESAL**

**DIRECTOR DE TESIS
Dr. JUAN ÁNGEL SALINAS GARZA**

**CO-DIRECTOR DE TESIS
Dr. JOSÉ ZARAGOZA HUERTA**

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

Noviembre 2019



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO



TESIS

**EL ROL DEL POLICÍA COMO PRIMER RESPONDIENTE DENTRO DEL
PROCESO PENAL ACUSATORIO EN UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE
DERECHO**

PRESENTA

Mtro. BERNARDO RAMÓN OLIVO GUTIÉRREZ

**COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR
EN DERECHO CON ORIENTACIÓN EN DERECHO PROCESAL**

DIRECTOR DE TESIS

Dr. JUAN ÁNGEL SALINAS GARZA

CO-DIRECTOR DE TESIS

Dr. JOSÉ ZARAGOZA HUERTA

ÍNDICE

1.1. INTRODUCCIÓN	9
PARTE I	
APORTES METODOLÓGICOS	11
1.2. ANTECEDENTES	12
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	16
1.5. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN	16
1.5.1. Elementos de la Comprobación De Hipótesis	17
1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	17
1.6.1. Objetivo General	17
1.6.2. Objetivos Específicos.....	17
1.7. JUSTIFICACIÓN	18
1.8. VARIABLES	19
1.8.1. Variable Independiente	19
1.8.2. Variable Dependiente	19
1.9. TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	19
1.9.1. Investigación Descriptiva.....	19
1.10. ELECCIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO	19
PARTE II.....	21
APORTES DOCTRINARIOS.....	21
CAPÍTULO I	22
REFORMA PROCESAL PENAL EN MÉXICO: ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN	22
1.1. ALCANCES GENERALES DEL DERECHO PROCESAL PENAL: SEGÚN LA DOGMÁTICA	22
1.2. PROPÓSITO DEL PROCESO PENAL	26
1.3. PRINCIPIOS QUE RIGEN AL PROCESO PENAL.....	28
1.4. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO QUE RIGEN EL PROCESO PENAL	29
1.5. ALCANCES GENERALES DEL PRINCIPIO ACUSATORIO	34
1.6. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES	38

1.7. PRINCIPIOS PROCESALES	39
1.8. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RECTORES DEL PROCESO PENAL EN MÉXICO	40
1.8.1. Fundamento Del Principio De Publicidad.....	49
1.8.2. Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto De San José De Costa Rica".	50
1.8.3. Excepciones A La Publicidad.....	53
1.8.4. Principio De Contradicción.....	59
1.8.5. Principios De Concentración Y Continuidad	65
1.8.6. El juez penal frente a la actuación en el proceso penal.	70
1.8.7. Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto De San José De Costa Rica".	77
CAPITULO II	81
EL ACTUAR DE LA POLICÍA EN UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO	81
2.1. LA LEGITIMIDAD EN UN ESTADO DE DERECHO.	82
2.2. CONCEPTO DE LEGITIMIDAD	82
2.3. LA LEGITIMAD DESDE UNA VERTIENTE DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO	83
2.3. ¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE LA LEGITIMIDAD?	86
2.4. FUNDAMENTOS DE LA LEGITIMIDAD	95
2.5. LA LEGITIMIDAD DENTRO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES.....	111
2.6. EL ROL DE LA POLICÍA EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.....	112
CAPÍTULO III	119
ALCANCES GENERALES: POLICÍA FRENTE A LOS DESAFÍOS DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO	119
3.1. REALIDAD POLICIAL	120
3.2. PREVENCIÓN DEL DELITO.....	121
3.2.1.La Prevención Del Delito Como Uno De Los Roles Principales De La Policía	123

3.3. EL ROL PRINCIPAL DE POLICÍA: GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO	129
3.4. REFORMA PROCESAL PENAL	132
CAPITULO IV	140
ALCANCES DE LA POLICÍA DENTRO DE LAS REFORMAS EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO	140
4.1. ALCANCES GENERALES	141
4.2. MARCO LEGAL DE LA POLICÍA EN EL SISTEMA MEXICANO	145
a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	146
b) Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública	146
c) Ley de la Policía Federal	147
d) Código Federal de Procedimientos Penales	149
e) Código Procesal Penal del Estado de Nuevo León.....	150
4.3. ETAPA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA ACUSATORIO.....	152
4.3.1. Cadena de Custodia	152
a) La noticia en el lugar de los hechos	152
b) Directivas.....	153
c) Tendencias a la protección del lugar de los hechos.....	153
4.3.2. Inspecciones en el lugar de los hechos	154
4.3.3. La recolección de las evidencias	156
4.3.4. Coronación del lugar de los hechos.....	157
4.3.5 La descripción escrita.	158
4.4. LAS FUNCIONES CONFERIDAS A LAS POLICÍAS EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN.....	160
4.4.1. Policía Federal, Estatal y Municipal (Seguridad Pública).	160
4.4.2. Policía Ministerial (Investigación Científica del Delito).	163

PARTE III	
ANÁLISIS DE DATOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	169
III. ANALISIS DE DATOS.....	170
CONCLUSIONES.....	178
BIBLIOGRAFÍA	181

DEDICATORIA

Dedicatoria a mi Sr. Padre el Doc. José Olivo Reyes que en paz descanse, al igual que a mi madre Yolanda Gutiérrez García, ya que con ellos se culminó este proyecto, gracias a sus aportaciones morales que siempre tuve con ellos para seguir adelante y tener de ejemplo, tanto a mi madre y a mi padre, el Doc. Olivo que siempre tuvo disciplina en su trabajo como en su hogar y paciencia para poder llegar al éxito, junto de la mano de mi madre.

A mis Hijos Bernardo y Alejandro, que son mi motor de mi vida para seguir adelante dándoles un ejemplo de paciencia, tenacidad para poder alcanzar tus objetivos, así como, su apoyo incondicional para culminar este posgrado.

A mi amada Esposa Nelly Fernanda Olvera, que con su ayuda infinita día a día soportándome los desvelos de los trabajos de posgrado y cuando eran los fines de semana me quedaba haciendo las labores posgrado, cuando debería habérselos dedicado a ella, tuve siempre ese apoyo para culminar este proyecto.

A mis hermanos Pepe, Luis, Javier por darme las muestras de apoyo de seguir adelante en este proyecto.

A mi bebé Patricio Olivo que aunque teniendo dos meses de nacido me ha hecho demasiado Feliz y la de seguir adelante en este camino tan arduo y tan difícil que es el de ser abogado pero con muchas satisfacciones, esperando que sea un ejemplo para que con lleve una vida con disciplina y paciencia sobre todo para salir adelante.

A todos mis maestros que tuve desde la maestría como en el doctorado, así como, los directores que pasaron cuando yo estudiaba tanto la maestría como el doctorado, dándome la oportunidad de pisar las aulas como catedrático de esta honorable Facultad de Derecho (FACDYC) esperando continuar con esta labor tan hermoso de ser docente.

Mil gracias a cada uno de ustedes, tanto familias, amigos, directores y maestros de esta Facultad, así como, amigos del personal administrativo, espero volverlos a ver pronto, su amigo el maestro Olivo.

1.1. INTRODUCCIÓN

El rol del policía como primer respondiente dentro del proceso penal acusatorio oral en un estado Constitucional de derecho, hoy en día tiene una función o papel que debe de cumplir con las reformas Constitucionales del 2008, ya que, sus funciones son de gran trascendencia e impacto legal desde la noticia criminal, cadena de custodia así como la de interponer denuncias, presentar a los probables imputados, cuando tengan conocimientos de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, e informar por cualquier medio al Ministerio Público, sobre cualquier detención de persona.

Por lo que dado a su funciones que tienen, de acuerdo las reformas Constitucionales, de leer los derechos que le otorga nuestra carta magna al detenido, cuando esté cometiendo un delito inmediatamente después, debe de ponerlo a disposición del Ministerio Público, amén ese es el sentido de la reforma constitucional que se llevó a cabo en el 2008, cuando el legislador ubicó a la protección de la dignidad humana como presupuesto de control.

En torno a la problemática y de tecnicidad del rol del policía como primer respondiente, así como a las viejas costumbres Mexicanas han hecho que la función mencionada se vea afectada, en sus protocolos, teniendo deficiencia; en su roles como las de incertidumbre en puesta en disposición; tortura al detenido; demora en disposición del Ministerio Público, no se le entero al detenido de sus derechos, no se precisan la hora de la detención y otras ilegalidades prácticas.

Por lo que algunas de las deficiencias mencionadas, han contribuido a que sean puestos en libertad los imputados. Consideramos que el problema actual por el que está pasando el policía como primer respondiente, es debido a la falta de capacitaciones, falta del conocimiento, tanto de nuestra Constitución, así como de las leyes sustantivas como las adjetivas y de los grandes cambios que representan las funciones de la policía en un modelo acusatorio.

Ahora bien, las instituciones como la policía, en un Estado democrático de derecho, se es necesario que se realicen una mejor adecuación a lo que persigue el marco constitucional; logrando así que sea capaz de hacer frente a los desafíos que se pretende, entre ellos, el respeto a los Derechos Humanos, así como, apegarse a los estándares internacionales de protección.

En la inteligencia de que en caso de que el proceder policiaco no se encuentre total y absolutamente ajustado a derecho, los indicios y los datos de prueba que lleven; lo que implica que el actuar de la policía debe estar apegada a derecho, porque de lo contrario, no sé valorar en juicio logrando que se crea ciertos grados de impunidad, a grados que la sociedad no puede soportar. No cabe duda que esta característica es complicada, puesto que es allí donde su legitimidad y autoridad están en disputa.

PARTE I

APORTES METODOLÓGICOS

1.2. ANTECEDENTES

La función del policía como primer respondiente en los sistemas procesales tradicionales y en lo que rige la materia penal, se ha ido marcando desde un Estado legal en donde el legislador da la ley y el juez solamente la aplica. Es decir llevaban a cabo lo que las leyes secundarias aplicaban en su código sustantivo, así como en el ordenamiento adjetivo como instrumento para llegar a una resolución.

Lo anterior hoy en día ha cambiado, pues estamos frente a un Estado Constitucional de Derecho, lo que significa, que va a predominar la Constitución como Ley Suprema y además, hace posible la relación entre todos los poderes del estado, así como, de las distintas autoridades.

En tal sentido, estar frente a un Estado de Derecho implica la realización de ciertos valores democráticos que hagan posible que todo este en armonía. La realización de esa armonía, es posible gracias a la convivencia pacífica, pero cuando ocurre algo que altere el orden público, llamado delito (tomando en cuenta que el profesor Zafarroni define al delito como un hecho que altera el orden público). Es ahí cuando las fuerzas del orden deben hacer frente, a través del *Ius Punendi*, pero si no se cumple con ciertos presupuestos, como una buena preparación difícilmente se puede lograr ciertos objetivos.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En torno a la problemática del rol del policía como primer respondiente dentro del proceso penal acusatorio oral mexicano a través del Juez en un Estado Constitucional de Derecho; al hablar del nuevo proceso penal acusatorio del cual fue implementado a partir del año 2008 en el que se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo la obligación de todos los Estados que conforman la República Mexicana, así como la Federación, de implementar a más tardar el 18 del mes de junio del año 2016 el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.

Lo anterior, trajo grandes avances en la ciencia del Derecho, entre ello, es la entrada en vigencia de los Derechos Humanos, como consecuencia de la firma y ratificación. La firma de tratados internacionales por parte de México, obliga al Estado a establecer mejores mecanismos de protección de las garantías de todos los ciudadanos y con ello, la protección de la dignidad humana, como presupuesto para hacer valer el derecho. Cuando me refiero a la protección de los derechos, necesariamente, debemos recurrir a contar con una policía que sea pertinente y que cumpla con las funciones de primer respondiente

Lo demostrado en *supra* , es decir la policía como primer correspondiente se vea afectada, en sus protocolos en los momentos de la detenciones que no se aplican adecuadamente o como la marca la Constitución que sea inmediatamente después del hecho cometido es decir la flagrancia, así como de preservar los indicios del hecho delictuoso, los embalajes, la cadena de custodia, muy importante para recabar los indicios

del hecho criminal ya que la etapa inicial de una noticia criminal, es decir la raíz es donde nace la investigación, que se recaben las actas de entrevistas a testigos, en el lugar de los hechos , así como si existen flagrancias que se apliquen los protocolos es decir los IPH (Informes de la Policía Homologada) que tienen la policía como investigador, de leer sus derechos humanos que tienen como imputados, los motivo de su detención, que se detengan sin orden de aprehensión, que sean puestos a la autoridad competente en un tiempo que no respete la flagrancia como la marca la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y otras como las del mal resguardo de la escena, contaminación de la escena del crimen, extracción de fluidos, la falta de recopilar los datos homologados, faltantes de firmas quienes intervinieron en las actas de entrevistas, etc. Todo esto ha producido que muchas personas sometidas frente al proceso penal, han sido puestas en libertad los imputados, tal como lo comprobaremos posteriormente de acuerdo a estadísticas del Estado de Nuevo León.

De ahí la importancia del rol del policía investigador, ya sea en el EN todo lo que tiene que ver con registros de los hechos, para que después no se presenten posibles anulaciones durante el desarrollo del proceso penal; el actuar de la policía en estos casos es de suma importancia para que el proceso se lleve de acuerdo a lo que establece la constitución.

Otros de los roles del policía investigador es la de llevar a cabo las entrevistas, como formular los interrogatorios a las víctimas o testigos, para aproximarse a la verdad de los hechos, y así bajo ese esquema de información sobre el delito cometido, llegar a la identidad responsable del imputado

De lo anterior, la necesidad que el rol del policía investigador en el proceso penal acusatorio se debe de ajustar a los principios de publicidad, oralidad, contradicción, concentración, continuidad, e inmediación, establecidos en el artículo 20 Constitucional y en los contenidos en el numeral cuatro del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ya que ellos participan y son responsables desde la noticia criminal, la investigación inicial formalizada, o no formalizada la carpeta de investigación o en sus casos cuando se encuentran las carpetas ya judicializadas, previas a las fases de la etapa intermedia es decir la de acusación y las de juicio oral. Como lo establece la Constitución en su artículo 21 la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a los policías; por lo que deben de estar bien realizados los roles del policía a investigador que hemos mencionado en los proemios anteriores, para que no dejen en libertad a los imputados por malas actuaciones y tecnicismos o detenciones ilegales. Ya que si no están bajo los lineamientos que la ley suprema marca la Constitución, así como la ley secundaria, y los tratados internacionales ratificados en el artículo 133, así como en el artículo primero de la constitución; son puestos en libertad.

Actualmente el rol del policía, como primer respondiente, se busca que no solo, se ajuste a lo que dice el ordenamiento jurídico (Ley), sino que su actuar este dentro de los parámetros de respeto de la dignidad humana. Esto quiere decir que, el policía como primer respondiente, debe asumir el paradigma de estar como un agente que ofrezcan la garantía de los Derechos Humanos, sino a través del control difuso y el control de convencionalidad.

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los parámetros de la actuación de la policía como primer respondiente para no afectar la prueba dentro del proceso penal acusatorio?

1.5. HIPOTÉISIS DE INVESTIGACIÓN

La inexperiencia, falta de capacitación y estudio en el rol del Policía como primer respondiente en el proceso penal acusatorio en México, ha sido causa de deficiencias sustantivas y adjetivas en los procesos penales, por no encuadrarse a los principios constitucionales que protegen los derechos humanos y tratados internacionales y legislación penal aplicables, siendo imprescindible ajustar la conducta al paradigma del proceso penal acusatorio.

1.5.1. Elementos de la Comprobación De Hipótesis

Para lograr este objetivo, se es necesario que se realicen una dispersión de las variables de investigación, haciendo uso de los diferentes métodos, como el cualitativo y cuantitativo.

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1. Objetivo General

Describir y analizar el rol en nuestro actual Estado Constitucional del Derecho que debería cumplir el policía como primer respondiente en el proceso penal acusatorio, así como figurar y establecer las fallas y sus motivos que han generado incertidumbre y especificar los Derechos, teorías y normas superiores que han sido vulneradas en la implementación en el nuevo proceso penal acusatorio, procurando figurar las bases de esta problemática.

1.6.2. Objetivos Específicos

- Describir los alcances generales de la policía
- Describir el rol de la policía en el proceso penal acusatorio
- Describir el rol que debería llevar el policía como primer respondiente en un estado Constitucional de derecho.
- Analizar la estructura del Estado Constitucional de derecho
- Analizar el proceso penal acusatorio en su relación con el Estado constitucional de derecho

1.7 JUSTIFICACIÓN

Se justifica esta investigación por la trascendencia jurídica que tiene el rol del policía como primer respondiente en el proceso penal acusatorio ya que tiene los mismos principios que marca nuestra constitución en su numeral 20 y 4 del ordenamiento adjetivo es decir el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, por la necesidad que existe en nuestro país de capacitar a los policías, y hacer posible que de manera gradual, se vaya asentando el proceso penal en toda la republica.

Además se justifica la presente, debido a la connotaciones que tiene el problema que se investiga, ya que es actual, y contrastable con la realidad social. Afirmo que es actual, por las reformas que se han realizado en México, datan desde el 2008 y se es necesario que las investigaciones ofrezcan soluciones a problemas que aquejan a la sociedad.

De lo anterior podemos anotar que la entrada del proceso acusatorio que supera las necesidades del sistema inquisitivo, obliga a todos los que están dentro de la justicia penal a actuar conforme a los estándares internacionales y que además, se logre una justicia sin impunidad. Por tal sentido, la presente investigación, tiene un sentido de responsabilidad social, por los aportes que se van a demostrar a lo largo durante el proceso de desarrollo de las variables.

Dentro de los beneficiarios de la investigación, se encuentra la ciencia del derecho, ya que, permite establecer las bases para futuras investigaciones. Por tanto, las conclusiones que se obtengan podrán ser refutadas por otras investigaciones.

1.8 VARIABLES

1.8.1. Variable Independiente

- Actuación de la policía como primer respondiente

1.8.2. Variable Dependiente

- Proceso penal acusatorio en México

1.9 TIPO DE INVESTIGACIÓN

1.9.1 Investigación Descriptiva

Se considera descriptiva, porque describe la realidad problemática, para de ahí, formular hipótesis que hagan posible, tener un panorama mucho más amplio de las variables de investigación. Por ello, a lo largo de los capítulos se hace una descripción de la labor de la policía frente a la labor de integración de las investigaciones apegadas al ordenamiento jurídico.

1.10. ELECCIÓN DEL MÉTODO CIENTÍFICO

Para llegar a obtener los resultados que se exponen a posteriori, se ha tenido que recurrir a los siguientes métodos de investigación.

- **MÉTODO DEDUCTIVO:** este método se utiliza para centrar la investigación de lo general a lo particular, haciendo posible

que se observe la realidad de la labor de la policía, no desde el actuar, sino de las consecuencias que genera desconocer sobre el proceso penal.

- **MÉTODO ANALÍTICO:** Para poder llegar a conclusiones reales sobre el actuar de la policía como primer respondiente, se hace necesario que se analicen algunas conductas y además los resultados que se han venido obteniendo según los cuadros que se presentan en la presente. Entonces este método permite que se analicen los fenómenos que rodean al problema de investigación.

- **MÉTODO SISTEMÁTICO:** a través de este método, se busca establecer una variante necesaria para poder arribar a formulaciones teóricas, que unifique a las demás, con respecto a la labor de la policía dentro del proceso penal mexicano.

- **MÉTODO HISTÓRICO:** Este método me ayuda a entender como el trascurso del tiempo, ha ido creando instituciones, que hasta el día de hoy se atienden como necesarias dentro del aparato del poder. A pesar que están en constante cambios, son necesarios para entender los fundamentos filosóficos que dieron origen a muchas instituciones dentro de la relación policía – derecho.

PARTE II

APORTES DOCTRINARIOS

CAPÍTULO I

REFORMA PROCESAL PENAL EN MÉXICO: ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN

1.1. ALCANCES GENERALES DEL DERECHO PROCESAL PENAL: SEGÚN LA DOGMÁTICA

Cuando nos referimos al Derecho procesal penal, debemos tomar en cuenta que es una extensión de la ciencia del Derecho mismo y como resultado no es ni puede ser un conjunto de trámites. Esta rama del Derecho se compone por la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre y todas las demás fuentes del Derecho, además, es a través del cual se aplica y hace efectivo el Derecho Penal. De allí que el Derecho Procesal penal sea identificado de forma indistinta como Derecho adjetivo o instrumental del Derecho Penal, ya que regula su desenvolvimiento, actuación y realización.

De hecho, se afirma que, sin el Derecho procesal penal, el Derecho penal sería letra muerta, ya que es a través del primero que el Derecho penal, y en sí el poder penal del Estado, se hace efectivo, siendo el Derecho procesal penal donde mayoritariamente radica el sentido garantizador que se desea alcanzar.

La reforma Constitucional en materia penal que se ha llevado a cabo en México en el año 2008, plasma con precisión el deseo del legislador por anexarnos en un proceso de transformación—renovación, que nos hace fundadamente prever, que estamos transitando de una retribución en cuanto a la pena, a la más extrema actitud de restricción de la participación jurídico—penal en nuestra historia, lo cual es pauta de

la institución de un proceso penal humano, liberal, provocando la demanda de soluciones previa o intra—procesales, que permitan disminuir la necesidad de un proceso penal y apegados estrictamente a los principios Constitucionales que deben conformar a un apropiado Estado de Derecho moderno.

Con la reforma Constitucional en materia penal, ocupamos distancia del modelo que surge desde el inicio de la Revolución Francesa, momento en que, con mayor o menor posición, puede situarse el inicio del Derecho Penal moderno, dentro del cual es posible hablar de la función contenciosa, misma que hemos aceptado desde entonces.

Con el objeto de que lo establecido en la ley penal sustantiva se aplique en forma sistemática y ordenada, coexiste el Derecho procesal penal. Es precisamente esta rama del Derecho la que muestra, en el caso concreto, el camino y formalismo a seguir y que a través de una serie de procedimientos. Aunque no con certeza, de forma muy restringida, Fernando Castellanos se apega a la idea de que cuando nos referimos a esta materia, estamos frente a la pauta para establecer las normas que versan sobre las reglas penales en delitos particulares.

Lo anterior puede aceptarse como cierto si consideramos que la función específica del Derecho procesal penal es realizar el Derecho penal material, pero como se señala claramente, esta es la función específica, aunque no la única y como consecuencia cualquier reflexión en cuanto a ésta como única función del Derecho procesal penal, consideramos que es una opinión limitada.

JÜRGEN BAUMANN, define al Derecho procesal penal como *“el conjunto de normas destinadas a regular el procedimiento para la determinación y realización de la pretensión penal estatal. De esta manera asegura que el Derecho procesal penal es un derecho auxiliar destinado siempre a realizar el Derecho penal material, siendo esta opinión muy apegada a lo que Roxín discurre al respecto: El Derecho procesal penal contiene los preceptos que regulan el esclarecimiento de los hechos punibles y la imposición del derecho del Estado a castigar.”* (JÜRGEN BAUMANN, 1979)

Por su parte GOLDSCHIMDT coincide en que proceso penal se determina de manera usual como un *“procedimiento que tiene por objeto la declaración del delito y la imposición de la pena,”* (GOLDSCHIMDT, 2010) aunque indica que esta definición es imperfecta, ya que se deben agregar las medidas de seguridad convenientes y el conocimiento de la acción civil proveniente del delito. En virtud de que la ejecución de sentencias se atribuye a la jurisdicción, considera que la definición de proceso penal debe completarse con la mención de esta actividad.

El Derecho Procesal Penal se constituye con la doctrina, la jurisprudencia y el conjunto de normas que regulan y orientan dichas actividades. Por ello, válidamente en su guía de estudios, RICARDO LEVENE critica que un conjunto de normas o disposiciones pueden ser un código, pero un código en sí no puede ser el Derecho Procesal Penal; el Derecho es ciencia, no legislación; los códigos expresan doctrinas o tendencias en determinada época de su historia. Por ello, afirma que no debe tomarse como declaración sinónima de Derecho Procesal Penal

con lo que es el procedimiento penal, ya que este último se establece como la ocupación que la autoridad competente y las partes realizan desde que se tiene conciencia de la comisión de un delito, hasta la aplicación de la ley penal al caso concreto (RICARDO LEVENE 1993).

En este mismo sentido parece coincidir JULIO MAIER, al afirmar que no debe confundirse lo que es Derecho procesal penal con un simple procedimiento penal, por ello, declara, que el procedimiento penal permanece siendo, básicamente, una forma de actuar para administrar justicia y cuyas funciones principales son predominantemente estatales.(JULIO MAIER,2004)

Mientras que el Derecho procesal penal no se agota en la disciplina de la actividad o función del Estado destinado a dar solución a conflictos sociales que pretenden la aplicación de la ley penal; engloba también la regulación de ciertas tareas que cumple el Estado cuando, por intermedio de sus órganos competentes, decide aplicar una pena alguna medida de seguridad penal.

Algunos consideran al Derecho procesal penal es el Derecho constitucional reformulado, asegurando que la ley procesal es reglamentaria de los principios, derechos y garantías reconocidos por la ley suprema y, por ende, no puede alterarlos.

Es tal la relación que, entendiéndose desde la propia Constitución se dicta que la verdad no debe investigarse a cualquier precio, sino; que la dignidad humana y los derechos fundamentales están protegidos de tal forma, que no deben ser alterados en busca de esa verdad. Aquí se

muestra claramente el estrecho y necesario vínculo entre Derecho procesal penal con el Derecho constitucional.

En palabras de Ferrajoli, *“el Derecho procesal penal es una garantía que hace posible el cumplimiento de algunos Derechos fundamentales observados por la Constitución, los cuales, sin esa garantía que significa el Derecho procesal penal, quedan en papel, son promesas, promesas no cumplidas.”*

Ahora bien, con lo anterior no se pretende mostrar al Derecho procesal penal como apartado de las demás ramas del Derecho, especialmente del Derecho penal, sino; que debe darse una correcta armonización entre la ley penal sustantiva y la adjetiva, lo que cristalice en la práctica soluciones reales que hagan viable y efectivo el sistema de justicia al que avanzamos.

1.2. PROPÓSITO DEL PROCESO PENAL

Aunque se puede discutir en torno al propósito del proceso penal, se coincide en que se debe dar a conocer el delito y la responsabilidad del inculcado con la finalidad de imponer las medidas de seguridad, penas, o, ya con la reforma Constitucional en materia penal que se ha llevado a cabo en México, intentar resolver el conflicto a través de los medios alternos que la propia ley establezca. En lo cual con esto se establecería el resultado hacia lo que se impone el proceso penal.

Debo considerar que el derecho penal, debe considerarse como el último recurso que cuenta el Estado para la protección de los bienes jurídicos, uno que es aquel en el que se protege a la parte afectada y el

segundo es aquel que protege los derechos del imputado con el propósito de que no sea castigado sin motivo y se le establezca bien el debido proceso.

El verdadero concepto racional de los ordenamientos de procedimiento punitivo no puede alcanzarse, si no se tiene en cuenta el fin de la tutela jurídica en ese doble aspecto. De aquí resulta una máxima dificultad para el que haya de dictar reglas de procedimiento penal, es decir, la de conciliar la tutela del derecho de la sociedad con la tutela del derecho del acusado. (CARRARA, 1956)

Cualquiera que sea la estructura del proceso penal, éste persigue dos finalidades diversas: el castigo de los culpables y la protección o tutela de los inocentes. (HORVITZ LENNON & LOPEZ MASLE, 2003) Al Derecho procesal penal le corresponde determinar y realizar la pretensión penal estatal; aunque en este doble aspecto de tutela jurídica que se menciona. (BAUMANN, 1973)

El jurista QUINTERO OLIVARES estima que la función esencial del derecho penal es establecer, a través de la protección de bienes jurídicos, el mínimo social-ético necesario para la convivencia, aunque agrega categórico, que una de sus funciones lo significa el combatir la criminalidad, aunque no es la única. Así mismo, indica que es necesario establecer un equilibrio entre la protección de la sociedad y la protección de los individuos. (QUINTERO OLIVARES, 1976)

Quedando claro que cualquiera que sea la función del Derecho penal, ésta solamente puede cristalizarse a través del Derecho procesal penal. En este sentido se manifiesta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Se estima que el propósito del proceso penal queda claramente establecido en la Ley fundamental anteriormente citada, la cual fue creada libremente en el orden positivo por el órgano de poder competente para ello, basados en determinadas pautas axiológicas, premisas, directrices éticas, valores, principios que ofrecen, vigencia, sentido, estructura y legitimidad a la norma jurídica que prevalece en un lugar y tiempo determinado.

1.3. PRINCIPIOS QUE RIGEN AL PROCESO PENAL

En tipo de sociedad que sea civilizada conllevan esos principios que le caracterizan en su fin de conducta; siendo éstos la base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discuriendo en cualquier materia. Por lo que se entiende que existen distintos principios como los morales, jurídicos, éticos, etcétera, que estos se establecen como aquello que por simple lógica es lo que puede o más bien lo que se puede diferenciar una sociedad ya sea por los principios que se derivan de ella. (BAUMANN, 1973)

Se considera que un principio en lo general muestra el camino a seguir en cierta dirección, establecen lo que es debido, aunque no exige o no obliga a decidir en forma determinada, o sea; los principios en sí no son innegables e independientemente de que se apegue a ellos o no, éstos se mantienen intactos aunque no prevalezcan en la decisión, éstos no ofrecen respuestas concretas en lo general, sino, que siempre se debe tener en cuenta el caso concreto.

Ahora bien, es importante precisar que los principios interactúan de la forma que pueden combinarse entre sí. Así, se cuenta con principios jurídicos, procesales, de política criminal, organizacionales, y todos ellos tienden a facilitar o garantizar, en su caso, la realización de determinado orden u objetivo.

1.4. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO QUE RIGEN EL PROCESO PENAL

Se establecen muchas hipótesis de lo que pueden ser los principios generales del derecho, en los cuales no se determina alguna exactitud del termino de manera general, por lo que no es tan específico ya que cada autor tiene la forma de interpretarlo mediante sus argumentos.

Ubicar los principios generales del derecho claramente expresados como tales en el derecho positivo, no genera inconveniente alguno, sin embargo, cuando hablamos de los principios generales del derecho que se obtienen por inducción o en los que encuentra sustento el origen de la norma jurídica, mismos que aunque son conocidos por la

generalidad, pero que no están positivizados, provoca incertidumbre e indeterminación.

Al respecto, HUMBERTO ÁVILA asegura que hay casos en los que se utiliza un determinado principio sin ser mencionado expresamente, en otros casos, aunque sea obligatorio promover un fin, el principio no se utiliza como fundamento, lo que nos obliga a la búsqueda del estado de cosas y de los comportamientos considerados necesarios para su realización, lo que, con el objeto de superar la mera exaltación de valores a favor de una delimitación progresiva y racionalmente sostenible de comportamientos necesarios para realización de los fines de la Constitución Federal. (ÁVILA, 2011)

En la actualidad, se entiende que la legitimación de todo de sistema jurídico y especialmente el derecho penal, de acuerdo con el entendimiento moderno de derechos humanos, nos indica, que los principios generales del derecho deben orientar toda norma, que es creada por el propio ser humano y se refleja en el orden positivo, hacia el máximo respeto y protección de la dignidad de la persona, por ello, el profesor Díaz Couselo afirma que los principios generales del derecho constituyen la capa más profunda de la dimensión normativa del Derecho, aunque asegura que la normatividad no es la realidad última del Derecho, ya que éste está formado por tres aspectos: hecho, valor y norma. (DÍAZ COUSELO, 1971)

Se entiende que los principios generales del Derecho, sean considerados como fuente o como guía de aplicación de la ley, ofrecen sentido a todo un sistema jurídico, así como a un hecho en particular, aunque con el propósito de profundizar en cuanto a su conocimiento, es menester acudir al pensamiento de diversos tratadistas.

De acuerdo con ENRIQUE ALCALDE, los principios generales del Derecho tienen *per se*, un determinado valor normativo, en cuanto a que conllevan la idea de un criterio de actuación jurídicamente lícita, y por ende, afirma con propiedad que ellos son Derecho, lo cual, es compartido por Humberto Ávila al indicar que los principios no solo explicitan valores, sino que, indirectamente establecen especies precisas de comportamientos, entendiendo que los valores y comportamientos a que se refiere, son los jurídicos. (ALCALDE RODRÍGUEZ, 2003)

Respecto a lo anterior, y no obstante que no se ha ofrecido una idea clara y precisa de dicho concepto, misma que sea aprobada de forma unánime por la doctrina, resulta notable destacar que los principios generales del Derecho son reconocidos como parte del Derecho positivo mexicano; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos claramente establece:

“...En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del Derecho”.

En cuanto los principios generales del Derecho a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

habrá que apegarse a la reflexión a que alude Álvarez Ledezma: ¿A qué principios y de qué tipo se refiere el legislador? A ninguno en especial, se trata de un reenvío al principio lógico-jurídico o axiológico, o a ambos, que mejor satisfaga la "laguna" de modo coherente y justo. La labor de búsqueda y determinación del principio que constituya la norma integradora corresponde al juez en cuestión.

Prosiguiendo con el autor ÁLVAREZ LEDEZMA, se señala que él también se refiere a criterios para referirse a principios, sin embargo, después acertadamente reorienta sus reflexiones asegurando que por principios generales del Derecho, debe entenderse toda directriz que hace que el derecho se más armonioso con la idea de justicia. (ÁLVAREZ LEDEZMA, 2008)

DÍAZ COSUELO afirma que los principios generales del derecho son el soporte de las normas jurídicas, que los desarrollan y especifican subsecuentemente, hasta llegar a la norma individual, es decir, a ellos como los principios supremos a todo derecho, los cuales pueden o no haber tenido consagración positiva, pero que en el segundo supuesto son de igual manera aplicables, mientras estos no sean opuestos con el ordenamiento, dado que éste debe ser un todo homogéneo. (DÍAZ COUSELO, 1971) Con ello, advierte que la norma superior lógicamente contagia con los principios con que fue creada a las leyes secundarias, por lo que se sigue un proceso de inducción.

El Poder Judicial de la Federación amplía lo anterior, al afianzar que a los principios generales del derecho como aquel fundamento general sobre la estructura de sus valores en la actual aplicación del

derecho. Su ocupación es únicamente en la integración de aquellos vacíos legales o lagunas; logra la tarea de interpretar la ley y como se debe aplicar en el derecho, de allí parte la función de los tribunales que deben estar ungidos y, en varios casos, se encuentran en la obligación de tomar decisiones que son indispensables debiendo tener en cuenta, aparte de lo que expresa la ley en sus limitaciones por su propia estructura general y abstracción, las proposiciones de los elementos primordiales y generales del derecho, esos son aquella expresión única, antigua, de los anhelos de la justicia que busca la comunidad.

En suma, los principios generales del Derecho no siempre son fehacientes, en ocasiones hay que descubrirlos, obtenerlos progresivamente por inducción consecuencia del estudio de la propia norma. Los principios generales del derecho, desde cualquier perspectiva que se les observe, son emanados de la sociedad misma y en no pocas ocasiones son contemplados directamente por la propia Constitución Mexicana, lo que en tal consecuencia, deben aplicarse en la mayor medida posible, además, para el caso que nos ocupa, deben inspirar a todas las partes que participan en un proceso y no solamente al legislador y al juzgador.

1.5. ALCANCES GENERALES DEL PRINCIPIO ACUSATORIO

El principio acusatorio esta en total relación con una actividad principal del estado, me refiero a la potestad sancionadora, la cual se ejerce a través del poder judicial así como por parte del poder ejecutivo.

Cualquiera que sea la estructura del proceso penal, éste persigue dos finalidades diversas: el castigo de los culpables y la protección o tutela de los inocentes. (HORVITZ LENNON & LÓPEZ MASLE, 2003, pág. 98) Al Derecho procesal penal le corresponde determinar y realizar la pretensión penal estatal; aunque en este doble aspecto de tutela jurídica que se menciona. (BAUMANN J. , 1973, pág. 30). El jurista QUINTERO OLIVARES (1976) estima que:

“La función esencial del derecho penal es establecer, a través de la protección de bienes jurídicos, el mínimo social-ético necesario para la convivencia, aunque agrega categórico, que una de sus funciones lo significa el combatir la criminalidad, aunque no es la única. Así mismo, indica que es necesario establecer un equilibrio entre la protección de la sociedad y la protección de los individuos”. (QUINTERO OLIVARES, Represión Penal y Estado de Derecho, 1976, pág. 56)

Quedando claro que cualquiera que sea la función del Derecho penal, ésta solamente puede cristalizarse a través del Derecho procesal penal. En este sentido se manifiesta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Se estima que el propósito del proceso penal queda claramente establecido en la Ley fundamental anteriormente citada, la cual fue creada

libremente en el orden positivo por el órgano de poder competente para ello, basados en determinadas pautas axiológicas, premisas, directrices éticas, valores, principios que ofrecen, vigencia, sentido, estructura y legitimidad a la norma jurídica que prevalece en un lugar y tiempo determinado.

La reforma constitucional que, en materia penal, se ha llevado a cabo en el año 2008 en México, obliga a un cambio radical del sistema procesal penal, mismo que presenta como objetivo principal el abandono de un sistema mixto con marcada tendencia inquisitiva, para dar paso a uno acusatorio y oral. Esta reforma modifica sustancialmente los fines rígidos y tradicionales del proceso penal, flexibilizándose de tal manera, que abre paso desde la propia Constitución, generando alternativas tendientes a ofrecer soluciones anticipadas y observando a la reparación integral como auténtica solución de conflictos.

De acuerdo a lo especificado en el primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Siendo éstos cinco principios los rectores del proceso penal, ya que así explícitamente se establece en dicho precepto Constitucional.

Es el caso, que el artículo 20 Constitucional se integra por tres apartados: el apartado A. De los principios generales; B. De los derechos de toda persona imputada y, C. De los derechos de la víctima o del ofendido. Es importante señalar que ciertos principios que afectan directamente al proceso penal son identificados como tales por la propia Constitución, por lo que éstos son los primeros en abordarse. Aunque existen otros de los que también, se

ocupa, los cuales que no están enunciados de forma explícita, sino, que son obtenidos implícitamente. De hecho, en ocasiones son enunciados de forma indirecta por la propia Constitución, aunque en un sentido eminentemente garantista y protector, se les debe otorgar total valor.

Cabe agregar, que estos principios los recibe el Derecho procesal penal fundamentalmente del Derecho Constitucional y nada tienen que ver con el Derecho penal material. (HASSEMER & MUÑOZ CONDE, 1989, pág. 15) “Independiente de la relación que existe por la jerarquía de normativa en cuanto a la supremacía Constitucional que impone el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de dichos principios se genera un vínculo muy estrecho y directo entre la Carta Magna y el Derecho procesal penal. Así mismo, observaremos que cada principio tiene conexión con otro, correlacionándose entre sí y fortaleciéndose, mostrando con ello, para el caso que nos ocupa, que estos principios se encuentran enlazados precisamente por relaciones de fundamentación y derivación, o sea; no actúan de forma independiente”.

Al abordar concretamente a los principios del proceso penal, CHOWELL ARENAS (2008) considera que:

“éstos no solo se refieren al proceso penal en sí, sino a toda la actividad que desarrolla desde que se tiene noticia de la comisión de un delito hasta el dictado de la sentencia en la que se determina la consecuencia jurídica que le corresponde a ese delito”. (CHOWELL ARENAS, Los Principios del Proceso Penal, 2008, pág. 24)

Sin embargo, después de la reforma constitucional en México, los derechos que le corresponden al procesado, también le corresponden a la víctima.

Frente a los intereses que persigue el principio presunción de inocencia el cual funciona únicamente a favor de todo procesado durante el curso del proceso penal, también se debe tomar en cuenta el contrapeso que puede ser los derechos que le favorecen a toda víctima u ofendido de un hecho delictivo

No debemos pasar inadvertido que los instrumentos que tiene que ver con la presunción de inocencia y la protección de la víctima (Constitución, *Código Nacional de Procedimientos Penales*) protegen de una manera amplia el derecho a la presunción de inocencia de todo procesado a través de una serie de principios y mecanismos; sin embargo, siguiendo al profesor BOECK PULECIO (2010), los principios deben tomarse en cuenta al instante de realizar una aplicación de las teorías probatorias dinámicas, teorías que van de acuerdo a las nuevas exigencias del Estado Constitucional de derecho; siempre y cuando no trasgredan derechos constitucionales (Boeck Pulecio, 2010) la exigencia del respaldo argumentativo del análisis judicial es un logro del garantismo propio de un Estado constitucional y democrático de derecho, logro que ha sido mostrado por ciertos países de manera insuficiente.

Dicho garantismo opera también a favor de la víctima, de tal manera que el representante de la víctima se nombra como: asesor legal, este coadyuvara al fiscal o corregirá cualquier anomalía que considere pertinente y se complementa con los principios de proximidad y facilidad probatoria

1.6. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES

De acuerdo con el profesor CANOSA USERA, la evidencia de los principios constitucionales provoca la inmediata dirección de todo el Derecho en la orientación fijada por los mismos, pero, ya no, de la manera simplemente informadora, característica de la concepción subsidiaria de los viejos principios generales. Las directivas del Código Fundamental son normas y, en la medida que no sea materialmente imposible, son directamente vinculantes. (CANOSA USERA, 1998)

En este orden de ideas, los principios constitucionales se traducen en valores o principios que alcanzan la más alta jerarquía de nuestro orden jurídico, cuyo eje es el individuo que coloca bajo la vigencia del orden jurídico nacional, valores que, luego entonces, aparecen como superiores en categoría a la misma potestad penal del Estado y, en nuestra materia, específicamente, a la misma prerrogativa de realización (persecución penal) del Derecho penal material y a su eficacia. (MAIER, 2004)

Del mismo modo, al integrar ciertos principios en la norma fundamental, no indica que estos deban ser exigidos para su cumplimiento como cualquier regla. Es trascendente dejar consolidado, para el caso concreto, que tanto las reglas como los principios tienen un mismo origen: la Constitución como norma fundamental. Las reglas son razones perentorias porque constituyen una razón de primer orden para que sus destinatarios realicen la acción exigida.

En otro tenor, los principios también son razones para la acción aunque independiente del contenido por que el hecho de que sean

razones para la acción es precisamente la misma norma fundamental; aunque los principios no son razones perentorias porque, al adecuar de forma abierta sus condiciones de aplicación y no acordar, subsecuentemente, en qué casos prevalecen frente a otros, exigen su atención con otros principios que sean razones para actuar en otro sentido.

Por lo que, las razones estratégicas pueden y deben ser valoradas—y en su caso superadas por razones de principio, mientras que lo contrario no puede ocurrir.

1.7. PRINCIPIOS PROCESALES

Una vez que se ha tocado lo que en general se debe entender por principios, principios generales del Derecho y principios constitucionales, es notable aclarar sobre los principios procesales, mismos que al mismo tiempo, son observados con cierta igualdad en lo general. Es así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que los principios procesales pueden ser conceptuados como las bases necesarias que deben fundamentar el desarrollo lógico y justo de un proceso, con el mero fin de que éste sea considerado como tal. (RUIZ MANERO, 2000)

Parafraseando al Doctor SERGIO GARCÍA RAMÍREZ, donde asegura que los principios procesales son reglas que dominan, fincan, explican el proceso. Reglas surgidas de la ciencia y la experiencia, atentas a las decisiones político-filosóficas que son raíz y razón de cierto sistema procesal, aunque no necesariamente de todos los sistemas procesales. (GARCIA RAMIREZ, 2008)

Con base en lo anterior se puede aseverar, de forma general, que los principios procesales son las notas, características básicas que acoge, presenta, distingue y orienta a cierto sistema procesal, los cuales se deben aplicar en la mayor medida favorable, con el objeto de encontrar precisamente de aproximarse lo más posible a un proceso justo, y los mismos, sirven de sustento para legitimar la decisión judicial, sea ésta interlocutoria o final.

1.8. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RECTORES DEL PROCESO PENAL EN MÉXICO

A raíz de la reforma constitucional que, en materia penal, se ha llevado a cabo en el año 2008 en México, vincula a un cambio de paradigma radical del sistema procesal penal, de igual forma que denota como tarea principal el abandono de un sistema mixto con una etiquetada tendencia inquisitiva, para dar abrimiento camino a uno acusatorio y oral. Esta reforma modifica a sustancia los fines rígidos, positivos y tradicionales del proceso penal, ablandándose de tal manera, que llega desde la propia Constitución, generando nuevas opciones tendientes a ofrecer soluciones anticipadas y señalando a la reparación integral como auténtica solución de conflictos.

Respecto a lo señalado en el primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proceso penal será de carácter acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Siendo éstos los cinco principios los rectores del proceso penal, ya que expresamente se establecen en dicho precepto Constitucional.

Es el caso, que el artículo 20 Constitucional se subdivide por tres apartados: el apartado A. De los principios generales; B. De los derechos de toda persona imputada y, C. De los derechos de la víctima o del ofendido. Es importante denotar que ciertos principios que lesionan directamente al proceso penal son identificados como tales por la propia Constitución, por lo que éstos son los primeros en afrontar. Aunque existen otros de los que también se ocupa, los cuales que no están enunciados de forma explícita, sino, que son obtenidos indirectamente. Efectivamente, en ocasiones son enunciados de forma implícita por la propia Constitución, aunque con una interpretación eminentemente garantista y protectora, se les debe conceder total valor.

Adicionando, que estos principios los recibe el Derecho procesal penal fundamentalmente del Derecho Constitucional y no trastocan o derivan del Derecho penal material. (HASSEMER & MUÑOZ CONDE, 1989) Independiente de la relación que se encuentra por la jerarquía de las normas en cuanto a la supremacía Constitucional que ordena el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de dichos principios se crea un nexo muy estrecho y directo entre la Carta Magna y el Derecho procesal penal. De la misma manera, observaremos que cada principio tiene conexión con otro, corresponden entre sí y consolidándose, denotando con ello, para el caso que nos ocupa, que estos principios se encuentran vinculados precisamente por relaciones de fundamentación y derivación, o sea; no actúan separados uno de otro.

Al plantear estipuladamente a los principios del proceso penal, CHOWELL ARENAS opina que no solo se apuntan al proceso penal en sí, sino a todas esas actividades que son desarrolladas desde que percata de las noticias de la comisión de un delito hasta que se le determine las sentencias de las consecuencias del bien jurídico violentado. (CHOWELL ARENAS, 2008)

Es por ello, que en las próximas líneas, expondré lo concerniente al bien jurídico protegido dentro del proceso penal. Como afirmamos en las líneas que anteceden, justificamos la razón de ser del Derecho Penal fundamentado legítimamente en la tutela de bienes jurídicos: interviniendo a través del ius puniendi, sólo será legitimada cuando imperiosamente sea utilizada para proteger dichos intereses. Teniendo como resultado que, el legislador solo podrá adecuar conductas al tipo, a aquellas que infrinjan daños o arriesguen un bien jurídico penal. Este concepto de delito es justamente al que la doctrina moderna acude (concepto material) plasmando así la garantía *“nulle crimen sine injuria”* (Doval Pais, 1996)

Por tanto, a través *“nulle crimen sine injuria”*, también se convierte en una limitación para el legislador y para el poder persecutor del Estado y es que no se pueden perseguir penalmente aquellas acciones que no se subsumen en la lesión de bienes jurídicos, así como también el legislador no puede legislar en el caso que no se protege un interés social. Lo que se conoce doctrinalmente como función garantista, la cual es una expresión de control y está justificada penal y democráticamente por el Estado.

En ese orden de ideas afirmamos que los elementos subjetivos y objetivos se valoran de acuerdo con el precepto penal que entrañan, ya que así serán conducidos al bien jurídico que protegen. Entre las cuales sobresale la que lo coloca como límite al poder punitivo del Estado y fuente de legitimación. En efecto, según PUIG (1994), es de la idea que al iuspunendi se le imponen restricciones que van desde la misma doctrina, como en la práctica, me refiero en estricto a la posición que tiene la protección de los bienes jurídicos. Por lo que, a idea del mismo autor, entiende que el derecho penal, solo busque el castigo cuando se pone en peligro o se lesione el bien jurídico, dejando de lado toda cuestión ética y además aspectos que tengan que ver con la fe. (Mir Piug, 1994).

En los Art.426° y 428° establecen en lo medular en la aplicación de la ley penal, se toma necesariamente, ésta le corresponde según el sistema acusatorio al Ministerio Público. El mismo código establece que en los delitos que se persiguen por querrela, es decir, aquellos que atentan contra la honra de una persona, en estos casos necesariamente le corresponden a la víctima, lo que implica estar frente al ejercicio de la acción penal privada.

Es importante señalar, que la función metodológica que cumple el bien jurídico, desde un punto de vista dogmático, decimos metodológico, porque desde este punto podemos decir que se ofrece un mejor entender del objeto de la tutela legal, es aquí donde se ofertan las claves para una mejor interpretación , siendo la base para entender toda la formación del derecho penal parte especial (delitos) de todos los

códigos que rigen el sistema punitivo, en consecuencia, como lo afirma Puig (2003), todas estas vertientes, desentrañan el rol desde un enfoque filosófico, en tanto, como ya reiteradamente, lo hemos dejado sentado, la interpretación que se le ofrezca a la norma, debe basarse desde el propio bien jurídico.

Busto Ramírez (1997), afirma, en cuanto al bien jurídico protegido que este determina la funcionalidad de la pena, dimensionando los aspectos valorativos, es decir, lo subjetivo y lo objetivo de la ley penal. En este sentido el profesor español, ha sido categórico al afirmar que: “esa es la función en un estado que se hace llamar democrático, la importancia que se le da a la función de interpretación de la ley penal, de ahí, que el Estado, debe ofrecer todo un abanico de posibilidades en el derecho penal especial, de selección de lo que le interesa proteger al Estado. (Busto Ramírez, 1997)

Las razones filosóficas del bien jurídico hacen suponer que esta institución se apoya sobre la idea de valor intrínseco de la norma expresada en la ley penal. Establecido en otras el bien jurídico tiene relación directa con el valor de la vida humana protegida por el derecho, de la cual se desprenden todos los derechos entre ellos el derecho a la salud y todas aquellas figuras que le deriven al atenderse a la salud como concepto y como derecho.

Además, aquellos papeles que la doctrina asigna por tradición, me refiero a los bienes jurídicos protegidos, parece importante agregar la función crítica no debemos sólo reconocer lo que protege a la norma, debemos tomar en cuenta la conceptualización sistemática de lo que se entiende por bien jurídico, en todos los alcances de la ley. En tal sentido, el profesor Busto Ramírez al referirse a este tema, afirma: que un abogado no solo debe identificar lo que el Estado protege a través del derecho penal, sino que es necesario, establecer las dimensiones del bien jurídico protegido, en este caso, refiriéndonos a nuestra investigación, identificar las relaciones entre lo que se afecta y lo que se protege.(Busto Ramírez, 1997).

Estimo que el bien jurídico tiene una doble función material, ello con independencia de su conceptualización, ya que por una parte señala el derecho o bien que el derecho penal considera relevante y es necesaria su protección, y por la otra, limita la intervención estatal en las relaciones personales de los particulares de conflicto.

La postura que no es muy controversial de esta entidad, posterior al análisis planteado sobre cuán importante puede ser, cabe la lógica para cuestionar ¿qué es un bien jurídico? (Hormázabal Malarée, 2006). La refutación por la incógnita no se relaciona, es más, todo lo contrario, pues vienen a ser muy complejas y sólo basta con la teoría sobre el delito mismo. En base al bien jurídico que se plantea, únicamente no se explica sobre su importancia en realidad, sino por su característica ética y el valor que envuelve a dicha institución.

La incapacidad es la causa del tema en su amplitud, sin embargo, es importante ya que en ello se determina como llegar a una terminación sobre el objeto de la presente investigación, donde diseñamos teorías en base a la proporción y el contenido de un bien jurídico en específico, cuya finalidad es que en dichas condiciones poder responder al cuestionamiento que se trazado. Pues la tesis designadas por autores como: Bustos Ramírez y Hormazábal Malarée (2006), al igual que la categorización planteada por Hassemer - le corresponde: “teorías que trascienden sobre un bien jurídico”, la cual se diferencia por la búsqueda del principio de la presente institución, yendo más allá de lo descrito por la norma, asimismo, el derecho y sus intenciones por parte del legislador (Hormázabal Malarée, 2006)

Elegimos estas posturas – y no otras -, muy aparte del concepto y lo relacionado a las postulaciones en el momento de investigar sobre la legitimidad de aquellos intereses macro-sociales, se logra idear una teoría sumamente dinámica la cual revela una concepción sobre el bien jurídico con relación a la realidad social, averiguando que los supuestos en el objeto y en su contenido el cual está protegido en la norma jurídico en base a la diligencia de un sistema que socialmente se encuentra determinado, en consecuencia, dicho conflicto donde tienen que existir intereses de por medio al igual que las necesidades que son opuestas, estas se deben desarrollar en su mismo seno. (Bustos Ramírez y Horanzábal Malarée, 1999).

Tal como mostramos antes, la ciencia penal moderna ha sido unánime en el consenso que, dentro de la justicia procesal penal, debe

estar orientada en todo momento en proteger los estándares mínimos de protección; lo que implica o justifica la idea de tipificar ciertas conductas, entre ellos la responsabilidad médica siempre y cuando se estén por lesionar o poner en riesgo lo tutelado por el Estado. En tal sentido la existencia de los bienes jurídicos viene a ser una manifestación expresa de garantía frente a cualquier ciudadano por parte del Estado.

En ese mismo sentido se ha pronunciado el especialista en derecho penal, el profesor Hormazábal Malarée (2006), cuando afirma que los bienes jurídicos se relacionan directamente a la protección jurídica del Estado frente a cualquier individuo. Con más precisión se cita textualmente lo establecido por el profesor español: una política criminal por parte del estado que no tome en cuenta la protección de los bienes jurídicos o no aclare el alcance, nos dejaría indefensas a la sociedad, debido a que no cumple una función moderadora del sistema penal; esto significa que cualquier estado estaría en una situación de ventaja frente a sus ciudadanos, lo que se significaría la criminalización de cualquier conducto sin importar el límite del bien jurídico.

Por tanto, contar con derecho penal irracional, caeríamos en una aberración, en donde el estado se convierte en un estado de policías, persecutor de todas las conductas, imponiendo penas sin tener en cuenta los alcances de los bienes jurídicos. Es un sometimiento común de la población democrática contar con un derecho penal moderado que sigue solo el perjuicio de los bienes jurídicos en forma de control social, llamado a garantizar el nivel fundamental de la convivencia social.

De todas las opiniones vertidas a favor del bien jurídico, es importante mencionar que históricamente, sirve para hacer de la política criminal, un poco más humana, a lo que el profesor BECCARIA, entendía como la humanización de las penas. Es más, le ha servido de legitimador en cuanto a los intereses que persigue el estado, me refiero a la protección de la salud como bien jurídico, en donde el estado cumple una función garante y a la vez sancionador. El profesor DIEZ RIPOLLES, sobre este punto, ha entendido que la función del dominio jurídico, ha servido para que a lo largo de la historia se justifiquen la pena, entendiendo a la pena como una legitimación de actuar por parte del estado en la protección de bienes.

Hemos tenido a la vista, y de manera regular, muchos casos en los cuales la sociedad, o más bien, el poder político buscando ganar aceptación, ha castigado comportamientos que no son trascendentes, o más bien, pueden ser solucionadas a través de normas no penales, como ejemplo podemos citar el de considerar a la culpa grave como delito de prisión preventiva oficiosa, y agravar sus penas, específicamente el causar la muerte de una o más personas por accidentes automovilísticos en los que el activo del delito conduce en estado de embriaguez, esto a causa de múltiples accidentes con ciclistas que circulan por las carreteras del estado.

En estos casos se privilegió en juzgar al conductor con penas más rigurosas, incluso que aquellas dispuestas para los delitos dolosos, que encontrar otro tipo de normas no penales, tales como el prohibir que los ciclistas transiten por las carreteras.

1.8.1. Fundamento Del Principio De Publicidad.

La publicidad es un principio al que directamente se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20, párrafo primero, y en los apartados A. y B., el cual a la letra indica:

Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:...

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de una manera pública, contradictoria y oral;

B. De los derechos de toda persona imputada:

...

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

INTERNACIONAL

Según lo estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en el artículo 10:

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. (Unidas, 1948)

1.8.2. Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto De San José De Costa Rica".

Artículo 8. *Garantías Judiciales*

... 5. Los procesos penales tienen que ser públicos, al menos en los que sea forzoso para proteger los intereses de la justicia.
(Mexico, 1981)

Al dispuesto en la guía de consultas que fue publicado por el gobierno federal (2008) a través del congreso de la unión, se tiene constituido todas las audiencias preliminares y la audiencia de juicio tendrá que ser públicas, obtendrán autorización para asistir a ellas las personas que lo prefieran. A esto se le llama en la ley “principio de publicidad”. (Federal, 2008)

En tal sentido se pronunciará VIVAS USSHER (1999) al redactar que la publicidad de los debates es reglamentada como la oportunidad de que cualquier sujeto pueda contemplar su desarrollo total. Y luego conocer los fundamentos de la sentencia, afirma que esta característica es proveniente del principio de la publicidad de las acciones del gobierno, propio del sistema republicano y acepta el control popular sobre la administración de justicia, igualmente de ser altamente provechoso para conseguir un fallo ajustado a derecho y prevenir probables abusos de autoridad. (VIVAS USSHER, 1999)

FERRAJOLI (1995), toma en cuenta que:

“Para mayor seguridad de que se consuman las de más garantías, se debe considerar, lo que él denomina garantías instrumentales o secundarias, apuntando concretamente en este caso que atrae, a la publicidad y a la oralidad de juicios, o sea, considera que únicamente si el ejercicio probatorio se desenvuelve en público considera, por consiguiente, de modo verbal y concentrada, es viable, en efecto, haber seguridad de que han sido satisfechas las garantías primarias. Por ello, hay una estimación que la publicidad y la oralidad de manera que son rasgos estructurales y constitutivos del método acusatorio y, la publicidad es la que nos da la seguridad el control, tanto central como externo,

de las actividades judiciales. Considerando a la publicidad el requerimiento más principal y atrayente del proceso acusatorio. (FERRAJOLI, 1995)

IBAÑEZ (2007) afirma que:

“El afianzamiento que tiene la garantía de la publicidad en el los procedimientos, es un capítulo que tiene la peripecia histórica más general en lo que es la formación de una esfera pública como humus de la democracia representativa. que se refiere a la jurisdicción, el manifiesto de la publicidad tiene un principal y nuclear sentido de garantía para el imputado, que debe llevar su método normativo y su proyección práctica, buscando proveer a las actuaciones judiciales un nivel de transparencia que haga viable el control de las mismas por quienes son miembro o están directamente interesados en la origen (publicidad interna); y también por quienes, sencillamente como habitante , tienen un genérico y objetivo provechoso en que el progreso de la gestión de aplicación del derecho penal no sea ilegal y discurra por cauces legales (publicidad externa)”. (IBAÑEZ, 2007)

Es de tal modo, que el dispuesto de que el juicio sea público, aunado a la oralidad, arroja como consecuencia que, al quedar abierto y accesible a todos, se cumpla a cabalidad con lo descrito por la ley y como efecto que se respeten con extensión los derechos del enjuiciado. De aquí el hecho de que la publicidad incide a la vez, para que otros supuestos fundamentales del proceso penal se hagan efectivos, transparentándola, encaminándola a la comunidad y legitimándola.

Así mismo TORRES (2006) afirma:

“que la publicidad se ha transformado en una de las garantías judiciales primordiales uniformemente hecho por los distintos documentos internacionales adheridos por la sociedad mundial en materia de derechos humanos, asimismo como igualmente férreamente por los Tribunales, Comités y Comisiones por ellos creados”. (TORRES, 2006)

1.8.3. Excepciones A La Publicidad

Cabe recalcar que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) establece claramente en el artículo 20 apartado B punto V las excepciones al principio de publicidad, al indicar que:

“La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga

en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo." "Con lo que queda evidente que este principio de grande precio, se ve limitado en beneficio de las excepciones taxativamente indicadas en el artículo Constitucional en comento. (MEXICANOS, 1917)

Las excepciones en comento al principio de publicidad, pareciera que lo dejan imposibilitado, por lo que se deja en estado de extensa subjetividad el poder del Estado para reducir el principio mencionado. A este referente, como afirma SANTIEZ CARRILES (2009) que:

"En relación a que la gran blandura en cuanto a su utilización, puede redundar en excesos que transgredan este principio a nuevamente a ceder al legislador secundario que implante en su ley las excepciones, y que el tribunal use su autoridad discrecional, lo cual deja abierta el riesgo de que no se aplique justamente". (SANTIEZ CARRILES, 2009)

A si también se debe de comprender que tienen que existir limites, en los derechos fundamentales, para todo esto es con la finalidad, para un caso en concreto de que la generosidad de la difusión, acrecentada y descontrolada no provoque deformación en las actuaciones y resoluciones judiciales. En su ocasión, FLORIAN (1933) afirmó que:

“La publicidad pública no se admite más que al momento de los debates. En ellos la publicidad es completa, puede presenciarlos cualquiera en todo el mundo. Añadiendo que ésta puede enfrentar excepciones por motivos de orden público, de policía procesal y de moralidad. Inclusive, en el sistema de la publicidad pública, existen algunas personas a las que se les puede impedir el ingreso al tribunal, así como de igual forma puede limitarse la numerosidad de los presentes y, todos los que se encuentran en las vistas han de examinar un comportamiento decoroso, sobre pena de retiro y de detención. (FLORIAN, 1933)

Afirma IBAÑEZ (2006) que:

“Tampoco puede haber un debate judicial serio si la publicidad se hipertrofia y sobredimensiona, como sucede cuando en la sala de audiencias irrumpe el medio televisivo. Este suele producir comprobadas distorsiones en el comportamiento de los actores

procesales (incluidos los jueces) y también en la imagen que proyecta del juicio, muy selectivamente mediada por el criterio del operador. Por eso, cuando la publicidad, como es el caso de la televisiva, comporta inevitables consecuencias hiperpenalizadoras, por medio de la espectacularización, la verdadera garantía estará en sustraer a ella al imputado”. (IBÁÑEZ A. , 2006)

A pesar de las limitaciones tendientes a regular este principio, se comparte lo afirmado por FERRAJOLI (1995) Y MAIER (2004) que el razonamiento en cuanto a que la publicidad en la procuración y administración de justicia tiene un nexo indisoluble con los Estados liberales, constitucionales, democráticos y republicanos. (FERRAJOLI, Derecho y Razon: Teoria del Garantismo Penal , 1995) (MAIER J. B., 2004). Lo que constituye al principio de publicidad en un deber, una obligación democrática del Estado para con su población.

Por lo que podemos agregar la aseveración que asume el profesor VIVAS USSHER (1999), al indicar que para que la publicidad del debate sea aprehensible por jueces, jurados, partes en juicio y ciudadanos, habrán de verificarse los caracteres de oralidad, inmediación y continuidad. (VIVAS USSHER, 1999).

En tal sentido, considero que se lesiona el derecho al acceso a la justicia cuando, El autor centra su estudio en cuatro ejes temáticos, para dar alcances doctrinales respecto al acceso a la justicia. Los cuatro ejes que se refiere es: a. Consideraciones previas b. Justicia y doble estándar valorativo del Derecho c. El acceso a la justicia y las dificultades extrínsecas de su realización d. El acceso a la justicia y las dificultades intrínsecas de su realización.

Con respecto al primer punto (a) se observa que se asume desde la perspectiva jurídica, es decir, como un tipo de derecho humano fundamental recogido por las Constituciones políticas de los Estados y las convenciones o tratados internacionales. Por tanto, el acceso a la justicia es un derecho que concretaría la posibilidad real de emplear medios jurídicos de muy diverso tipo -alternativo, jurisdiccional y no jurisdiccional- que hagan efectiva la legalidad y, por ende, la seguridad jurídica.

En el segundo apartado (b) se analizara la justicia partiendo de la teoría o tesis del Doble Estándar Valorativo del Derecho. Esta tesis sostiene que el Derecho, en cuanto sistema normativo, produce con su aplicación en la vida social una serie de valores que su misma naturaleza comporta.

Tales valores, típicamente jurídicos, serían el orden, la seguridad y la igualdad. Los mencionados anteriormente pertenecen al primer estándar valorativo, por otro lado el segundo estándar comprende los llamados valores superiores, que serían, vida y dignidad humana, libertad, autonomía, bien común, educación. El autor concluye diciendo que: “Se trata de un Derecho o Sistema Estáticamente Justo, cuando la legalidad hace posible, cumple o realiza los Valores Superiores”.

Por último se las dificultades extrínsecas e intrínsecas para la realización de la justicia. Empezaremos con las dificultades extrínsecas para luego dar paso a las dificultades intrínsecas. Se ha establecido que la justicia se produce cuando la legalidad coincide, realiza y/o concreta los paradigmas o valores superiores del ordenamiento jurídico. Sin embargo, este modelo es sólo teóricamente posible puesto que en la realidad el Derecho no se presenta ni solo, ni aislado, sino en un contexto de influencias sociales, culturales, históricas y políticas que forzosamente impactan, para bien o para mal, su desempeño. Lo cierto, es que todas las circunstancias a que pudieran dar lugar estos cuatro factores afectarán el acceso a la justicia.

Toca ahora el turno a los problemas de acceso a la justicia provocados ya no por factores externos sino por aquellos que hayan su origen en el sistema u ordenamiento jurídico mismo. El autor, plantea las problemáticas internas con las que nos

encontramos a la hora de referirnos a la justicia en un sistema jurídico.

a) Un Derecho –Haciendo alusión al sistema- no puede ser justo, es decir, no puede verificarse en tanto que el acceso a la justicia se ve impedido porque el ordenamiento jurídico en cuestión es técnicamente –contradicciones, lagunas, etc.- defectuoso.

b) Un Derecho –Haciendo alusión al sistema- no puede ser justo, es decir, no puede verificarse, toda vez que el acceso a la justicia se ve impedido porque los valores superiores o los principios de justicia del ordenamiento jurídico son vistos como incorrectos, éticamente irrelevantes o injustos por no reflejar la moralidad, las costumbres o creencias de la mayoría de la población, o por ser en sí mismos inválidos.

Por tanto, para llegar al acceso a la justicia como un derecho humano, se deben unir ciertos criterios que la hacen posible, sin embargo, existen múltiples factores que no dejan que se realice.

1.8.4. Principio De Contradicción

La contradicción, constitucionalmente (artículo 20, párrafo primero, apartados A. y B.) estipula que los procesos penales se tendrán que regir por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

Absolutamente todos estos principios tendrán que llevarse a cabo en juicio, en donde se celebrará ante un juez que desconozca del caso. Por consiguiente, en la etapa del juicio oral, se presentarán las pruebas de forma pública, contradictoria y oral.

Para comprender mejor esta postura, cabe señalar que el principio de contradicción básicamente busca que la contraparte caiga en el error mediante preguntas o argumentos estructurados de modo que le sea difícil responder sin entrar en una paradoja. El objetivo de esto es convencer al juez que la teoría del caso de la contraparte es débil, como también una oportunidad para el acusado de refutar los argumentos del adversario.

La carga de la prueba busca convencer al juez que la teoría del caso del contendiente es ilógica o poco convincente, las dos partes (el fiscal y el acusado) tendrán la misma facultad procesal para defenderse como para acusar.

Conforme al párrafo V del artículo 20 constitucional estipula que ninguna de las dos partes (acusado y acusador) puede hacer uso de la contradictoria sin que esté la otra presente, así como el juez elegido para el caso, salvo excepciones que instituye la constitución.

JULIO MAIER (2004) estipula que:

“La libre expresión es la base del derecho a defenderse, por lo que tanto el acusado y el acusador tienen la facultad para refutar e intentar

que la contraparte se equivoque, además, que esto también incluye la posibilidad de agregar cualquier cosa que sea de interés para el caso, para así evitar la persecución policial o una condena, o bien aminorar la consecuencia jurídica.” (MAIER J. B., 2004)

Así también lo pacta la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en la cual determina que toda persona tiene derecho a ser oída y tratada con justicia por un tribunal, como a defenderse de cualquier acusación.

Otro pacto como el anterior es el “Pacto de San José De Costa Rica” en el cual se rige el principio jurídico de “se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario” también que toda persona tiene derecho a ciertas garantías que puede gozar de ellas mediante un juicio:

- Que se le notifique al acusado con detalles de la demanda o denuncia previa a la detención o a cualquier acto jurídico.
- Darle al acusado tiempo y los medios para que lleve a cabo su demanda (si por falta de solvencia económica no puede pagar un abogado, el estado le concederá uno)
- Derecho a ser asistido por un abogado o defensor, también a la confidencialidad.
- Derecho a interrogar a testigos, peritos y otras personas de importancia para el

- caso que puedan arrojar datos importantes sobre el hecho jurídico.

En conclusión, el objetivo de estos tratados es darle derechos al acusado para que se lleve a cabo un juicio equitativo y evitar un juicio inquisitivo en donde los derechos del acusado sean muy limitados.

También sugiere el derecho a “ser oído” la cual solo puede llevarse a cabo mediante el debate, la discusión y la contradicción.

La contradicción se considera como un principio fundamental en el derecho mexicano, en donde el sujeto tiene oportunidad de expresarse, ofrecer pruebas para respaldar su teoría del caso, conocer y contestar todas las respuestas del contrario, además de sugerirle al juez, de manera oral la solución que crea conveniente. Todo esto con el objetivo de que el juicio sea imparcial y justo.

ORTELLS RAMOS Y ARMENGOT VILPLANA (2013) indican que:

“El principio de contradicción es esencial para la defensa, en donde se le hacen valer todos sus derechos, como el derecho a conocer el caso y el derecho a asesoría jurídica, para así poder formar una defensa con los materiales del caso y así buscar una solución justa para las 2 partes mediante la libre expresión, las pruebas y la etapa de contradicción”.

(ORTELLS RAMOS, Manuel y ARMENGOT
VILAPLANA, Alicia, 2013)

Es importante señalar que la conceptualización de la contradicción no es equivalente al derecho fundamental, la contradicción se refiere al derecho de ser escuchado, a las pruebas y a refutar los argumentos de la contraparte en una controversia.

La importancia del principio de contradicción surge del derecho de toda persona a saber el nombre de su acusador, de verse frente a frente (careo) a una defensa adecuada y a una teoría del caso, así como a preguntar a testigos y peritos, de estos elementos surge la contradicción. Antes de la reforma del 2008, estos elementos eran imposibles de ponerlos en práctica, ya que todo el proceso se realizaba de manera escrita, impidiéndole al acusado defenderse adecuadamente.

Esto nos hace llegar a la conclusión de que en todo proceso, los principios jurídicos están indirectamente homologados, ya que a falta de algún elemento como el de contradicción, surgirían lagunas las cuales harían que el procedimiento sea injusto e inadecuado para las partes en controversia.

Del principio de contradicción surgen algunas necesidades formales, como la imputación necesaria, el conocimiento de la imputación, audiencia, probar y controlar la prueba, etc. (MAIER J. B., 2004)

Por inercia, la acusación provoca una contestación, ambos pueden aportar pruebas para el caso, así como estructurar la acusación o la defensa para sugerirle al tribunal una solución que resulte conveniente, siendo el juicio el momento en que el acusado y el acusador se encuentran.

FLORIAN (1933) menciona que:

“No debemos olvidar que el juicio se lleva a cabo mediante un juez asignado, el acusado junto con su defensor y la contraparte, en este caso el ministerio público, el contradictorio se lleva a cabo entre estas últimas dos partes con la finalidad de que el juez tome una decisión en base a las pruebas demostradas en juicio, motivo por el cual el juez debe desconocer el caso, para que se mantenga imparcial al momento del contradictorio, y en todo momento la discusión debe ser directa y personal”.
(FLORIAN, 1933)

Carnelutti indica que:

“la discusión es cometida por las partes, las cuales tienen 2 verdades, que el juez tendrá que analizar las pruebas y la discusión con la finalidad de encontrar la verdad real y absoluta, es por eso que entre más contradicciones haya en la discusión, más

fácil le será al juez tomar una decisión
(CARNELUTTI, 2003)

Es por ello que el contradictorio se convierte en una herramienta eficaz además de ser un derecho esencial de todo imputado, ya que sirve de base para que el juez emita una sentencia mediante los argumentos a favor y en contra expuestos durante la contradicción.

El contradictorio contiene la posibilidad de contradecir, la toma de conocimiento del proceso y así exponer las pruebas y argumentos, la posibilidad de formular alegatos peticiones y ofrecer pruebas e intervenir en las mismas.

1.8.5. Principios De Concentración Y Continuidad

La contradicción y continuidad son principios a los que directamente se refiere la Constitución en su artículo 20, párrafo primero, y en los apartados A. y B., el cual a la letra indica:

Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley

establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo.

B. De los derechos de toda persona imputada:

VII.- Será juzgado antes de cuatro meses se si tratarse de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.

Podemos observar que el primer párrafo del artículo 20 Constitucional explícitamente se refiere a los principios de concentración y continuidad, aunque no lo hace así en los apartados A y B que se señalan. Sin embargo, cuando hablamos de concentración, indicamos que nos referimos a la incorporación de todas las pruebas para su debido desahogo en la audiencia de juicio.

Notemos el apartado A. inciso III que se transcribe en el párrafo anterior señala: ... *sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio...*, refiriéndose a una sola audiencia de juicio y que las pruebas a las que se les otorgará validez jurídica, serán aquellas que se desahoguen en dicha única audiencia; lo que implica concentración y consecuentemente continuidad.

Como se ha mencionado con insistencia, los principios en el proceso penal se interrelacionan formando una especie de encadenamiento, siendo el caso, que los principios de concentración y continuidad no son la excepción a esta aseveración.

Carnelutti (1971) considera que: “la manifestación esencial del principio de concentración es, precisamente, la continuidad de la instrucción. No se puede alcanzar una continuidad absoluta; también la instrucción debe tener pausas, según las leyes, sin embargo, éstas deberían ser breves y determinadas.” (CARNELUTTI F. , 1971)

Esencialmente el principio de concentración, afirma la forma sucesiva y seguida en que se deben realizar las audiencias, es decir, la continuidad. Debe advertirse que puede no alcanzarse una continuidad completa puesto que deben concentrarse todas las partes al momento de una audiencia, y porque deben respetarse las pautas marcadas por la ley.

Como se estipula en la Guía de Consulta (2008) emitida por el Gobierno Federal a través del Congreso de la Unión se establece que sólo se considerarán como pruebas las que sean presentadas en la audiencia de juicio. A este principio se le llama de "concentración" porque en la audiencia deberá concentrarse el desahogo de las pruebas. (Consulta, 2008)

Las partes siempre deben estar presentes, concentrando las pruebas que únicamente pueden ser presentadas en el lapso que se dé el juicio, para garantizar el menor número de audiencias posibles.

El correcto desarrollo del acto procesal dependerá en gran medida de la aplicación de los principios de concentración y de continuidad. Buscando la mínima cantidad de audiencias, en donde los alegatos deben fundamentarse con las pruebas desahogadas.

Si se logra una adecuada continuidad en el desarrollo de las audiencias y una total concentración de las partes, así como en el desahogo de pruebas, se facilitará un proceso rápido y efectivo.

En este sentido opina Vivas Ussher (1999) que:

“Al asegurar que la continuidad requiere la mayor aproximación temporal posible entre los momentos en que se produce la prueba, se argumenta sobre su resultado y se dicta la sentencia, agregando que la continuidad funciona de mejor manera con la oralidad, ya que si las pruebas se registran sólo en la memoria de los jueces y partes, deben tomarse sin solución de continuidad entre ellas para prevenir olvidos, por esta misma razón, los alegatos deben producirse inmediatamente después de recibidas

aquellas y, con mayor razón todavía, no puede distanciarse temporalmente a la sentencia de ambas actividades”. (VIVAS USSHER, 1999)

La correcta continuidad, se logrará con el desarrollo de las audiencias y la concentración en el desahogo de las pruebas a través de la oralidad.

Aquí también, encontramos que independientemente del vínculo estrecho que existe entre los principios de concentración y continuidad, de forma obligatoria se relacionan con la inmediación, la igualdad, la oralidad, entre otros. De hecho, hay quienes sostienen que la oralidad implica necesariamente esa concentración y esa continuidad, tal es el ejemplo de HIDALGO MURILLO (2009) el cual menciona que:

“Para que pueda operar correctamente la actividad de los sujetos procesales en el análisis del material probatorio. Sin ignorar que se trata de concentración y continuidad de los actos del debate, entre ellos, los actos que se incorporan a prueba, cuando es posible que ambos principios se hayan exigido previamente, en el acopio de la prueba anticipada”. (HIDALGO MURILLO, 2009)

Los principios de concentración y continuidad están forzosamente unidos el uno del otro, pero para lograr la eficacia de los mismos se debe contar con un instrumento que ligue al resto de los principios como la inmediación y la igualdad, en este caso es la oralidad la que permitirá actualizar y hacer efectivos todos los principios.

1.8.6. El juez penal frente a la actuación en el proceso penal.

Al respecto se pronuncia el profesor BALLUERKA, afirmando que; no hay coexistencia de la humanidad sin esta figura del juez. A alguien se le debió conferir siempre y en cualquier comunidad la facultad suprema de mitigar conflictos y administrar la justicia (BALLUERKA, NEKANE , & VERGARA, 2002).

Al momento de administrar justicia, en todas las sociedades surgen diversas respuestas que se contraponen entre sí, las cuáles son limitadas en categorías epistemológicas. Por lo que, la comprensión humana referente a este tema ofrece concepciones formales tales como; concepción romana, la ideada por Aristóteles, la creada por la escolástica tomista, la originaria de diferentes ideologías políticas y filosóficas, etcétera. No obstante, dichas concepciones no son convincentes totalmente. Ya que la justicia es más que un valor utópico, posee un sentimiento, entre otros elementos que no son parte del pensamiento lógico como por ejemplo la fe y el amor.

Pero lo que es muy claro, que en todas las civilizaciones y culturas siempre se tiene la necesidad de contar con una figura de autoridad, que cumpla con ciertas características, a la cual la sociedad le otorga el voto de confianza y fe, para administrar justicia ante un conflicto de intereses propios de conglomerado que representa, y desde tiempos remotos, hasta la actualidad, la función ha sido la misma, y evidentemente, se ha ido perfeccionando, delimitando y profesionalizando, toda decisión y tipos de conflictos en los que participa la figura del juez, por una parte otorgando poder y por otra fincando responsabilidades inherentes a esta figura jurídica.

En primer lugar en términos generales, tal concepto hace alusión a la persona que se atribuya la potestad de emitir un juicio basado, resolver dudas o puntos, por otra parte jurídicamente hablando el juez es impuesto por los propios juristas como órgano con poder para juzgar y sentenciar; un juicio de intereses que debe ser resuelto.

Infortunadamente aún existen jueces que hacen una mala aplicación de las leyes en juicios civiles y penales, olvidándose de su profesionalidad y moral; ocasionando graves afectaciones muchas veces irreparables a los individuos que están siendo procesados.

Para BURGOA (1999), el juez tiene un papel fundamental ya que es parte del sistema del Poder Judicial, conferido de la Autoridad Oficial notificada en la cual su papel consiste en hacer

que se cumplan los asuntos jurisdiccionales e ineludible al cumplimiento de las responsabilidades propias de la misma, bajo la obligatoriedad que establecen la Constitución y las Leyes” (BURGOA ORIHUELA, 1999)

El papel del juez es como se indica en su nombramiento, el juzgar independientemente de que grado de administración de justicia se tratara, usualmente se les atañe este término a los inscritos en los juzgamientos de asuntos civiles o penales, en la que su actuar es relacionada a la jurisdicción. Otros términos que se le pueden aludir a esta figura legislativa es el de magistrados, ministros y jueces, esto es en cuanto a los tribunales colegiados.

Como anteriormente se menciona, estos términos se dan a figuras que forman parte de un tribunal, pero también a las que simplemente realizan esta acción (BURGOA ORIHUELA, 1999).

En lo que respecta a esas funciones se requiere tomo en todo ámbito legislativo, limitantes de competencias entre otras. Estas están presentes en una amplia variedad de legislaciones, y en la cual se pueden encontrar en sus bases criterios desiguales en contra a la promoción que realizan.

Existen ciertos problemas que los jueces han de enfrentarse durante su función, y es que se atraviesan con ciertos criterios como el alcance de su función, de su jurisdicción y hasta de su independencia, independiente del territorio en el que sea efectuado

cada caso o el fuero en el que se ve aplicado, así como el grado y alcance de su jurisdicción antes mencionado. (PALLARES, 1985)

PÉREZ ROYO (2000), el papel del juez es muy sumamente trascendental dentro del proceso judicial. Este debe ser caracterizado por no ser arbitrario y pegado a la ética, pero aun así no se puede contrariar que los jueces tienen un gran papel en sus manos (PÉREZ ROYO, 2000).

”La cosa juzgada hace lo blanco negro y lo cuadrado redondo”, nos sitúa al poder que ejercen estas figuras de autoridad (PÉREZ VALERA, 1993)

Las leyes, por más específicas que puedan ser deben de ser realizadas de acuerdo a la vida diaria de la comunidad, como una colectividad y en el individualismo, no hay manera de acercarse a la legislación perfecta, si no existen personas que proclamen estas, las hagan valer y respetar y a su vez el cumplimiento al que deben de guiarse.

Es muy importante, el establecer una diferencia entre la función de juzgar y el repartimiento de justicia, por más relacionada que se crean que son. Un claro ejemplo de esto, serian la Constituciones y los Códigos. Como anteriormente se mencionó, los términos de jueces y magistrados provienen desde tiempos lejanos, en el cual estos eran los que gobernaban una comunidad establecida, y que a su vez duro durante siglos (CAMPÍLLO SAINZ, 1990).

CAMPILLO SAINZ (1990), declara que aunque los criterios de ética están dirigidos a la abogacía, los jueces tienen un papel determinante en esto ya que es de gran importancia en el concepto del derecho. Ellos determinan el derecho, deben de tomar toda clase de intereses, así como los cambios en los que se ve envuelta la misma sociedad, pero con la clara determinación que se debe sustentar des un sentido ético y con la justicia que se requiera sin importar alguna otra novedad (CAMPÍLLO SAINZ, 1990).

Se debe de entender que las modificaciones que se realizan al derecho, ha sido por parte de la Suprema Corte de Justicia, en nuestro territorio se ha visto una gran desenvolvimiento en cuanto a la aplicación de la ley y sus interpretaciones (BASAVE FERNÁNDEZ, 2007).

En relación a los cambios que se van suscitando en la sociedad de manera diaria, y a lo que se adquiere de conocimiento derivado de esto se hacen ciertas modificaciones en cuanto al tema de las tesis jurisprudenciales. La jurisprudencia se sostiene a si misma cuando se realiza un colectivo de votos, la cual es establecida por la propia ley.

El juez es parte de la aplicación de la justicia, pero se necesita de un abogado que litigue de manera honesta, con imparcialidad y honestidad, esto para que se resuelva cualquier caso determinado bajo un apego estricto a la norma con un sentido ético.

El juez tiene el papel de velar por nuestra libertad y procuración de justicia (AGUDELO RAMÍREZ, 2004).

A partir de ese instante el problema surge entre el Estado y el gobernado transgresor de las leyes establecidas, el delincuente. La persona afectada pasa a segundo plano quedando olvidada del sistema de justicia que lleva a cabo el Estado. No olvidando las raíces llegamos a la conclusión de que lo mismo sucede con el conflicto. Hay que hacer la mención que “el conflicto antes que del Estado es de la víctima y el victimario”. En este sentido, KAISER expresa que el papel de la víctima no se ha convertido en problema de la literatura hasta tiempos relativamente recientes, habiéndose investigado de una manera sistemática sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial (Kaiserg, 1994).

Se produce, paralelamente, un protagonismo incipiente de los movimientos en favor de las víctimas que se concreta, bajo la Influencia del movimiento de Justicia Restaurativa, en el condicionamiento de la libertad condicional, a la satisfacción de la responsabilidad civil derivada del delito y en “los supuestos de condenados por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de una organización” el requisito de “buen comportamiento y el pronóstico individualizado de reinserción social” podría solicitando expresamente el indulto a las víctimas y “ así como en relación al período de seguridad, cumplimiento efectivo de penas de prisión de determinada duración y en la libertad condicional, en los que se condiciona la aplicación del régimen general de en dichas

instituciones a que el Juez de Vigilancia Penitenciaria” (Beristan Ipaña, 2003). Así mismo, el objetivo de la reforma es poder brindar seguridad jurídica a los gobernados. Sin embargo; el legislador parece no comprender que el principio de seguridad jurídica no puede ser practicado sin enfocarlo en el respeto a los principios que inspiran este campo, que son los de “reeducación y reinserción social a través del sistema progresivo de individualización científica”.

Como señala GARCÍA RIVAS, “el fundamento de la reforma es adecuar criterios preventivos generales negativos en el sentido no ya de intimidación sino de mero show durante una fase en la que deben primar exclusivamente criterios penitenciarios, con ello, el castigo se convierte en espectáculo y, por tanto, los condenados en meros actores de una pantomima” (García Rivas, 1996, pág. 32).

Sin embargo; ALCALÉ SANCHEZ esta concepción de “seguridad jurídica como seguridad del ciudadano es una necesidad falsa”, ya que “la seguridad es secundaria desde el punto de vista de las necesidades humanas” y, “desde el punto de vista del sistema jurídico, la necesidad de seguridad se presenta en forma de derecho” y la seguridad como concepto es dependiente al reconocimiento que haga el sistema del resto de ellos. Por lo tanto, decir que hay un derecho fundamental de la seguridad no es sino una construcción falsa y perversa (Alcalé Sanchez, 2012).

PÉREZ VALERA (1993), es muy importante la resolución de las condenas ya que una sola condena que no sea resuelta con justicia puede traer graves consecuencias que afectan a los particulares que va desde una condena injusta a un mal desahogo de pruebas.

1.8.7. Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto De San José De Costa Rica".

Artículo 8. Garantías Judiciales

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

La inmediación consiste se desarrolla a plenitud y como consecuencia de mejor manera, en un proceso penal como el que mandata la Carta Magna: acusatorio y oral.

De forma categórica, VIVAS USSHER asegura que la inmediación es el contacto personal y directo de los jueces, los jurados, las partes y los defensores con el imputado y los órganos de prueba, es decir, con los portadores de los elementos de prueba que van a dar la base a la sentencia que valida en todo o en parte, o invalida la acusación. (VIVAS USSHER, 1999)

La relación directa y cercana que existirá entre las partes durante el proceso forman el principio de inmediación, es decir, no hay intermediarios entre los interesados.

Al mantener un contacto directo entre todas las partes que se relacionaran en el mismo proceso, se busca que haya un conocimiento real y no otorgado por intermediarios, en cada tiempo procesal.

HIDALGO MURILLO explica que la inmediación puede ser enfocada desde dos ángulos: subjetiva o formal y objetiva o material; debiéndose entender por inmediación subjetiva o formal que el debate se realice con la presencia ininterrumpida de las personas llamadas a dictar sentencia y de las demás partes intervinientes. Por eso se castiga con nulidad la audiencia en que se viole la inmediación.

Por otro lado, la inmediación objetiva o material es aquella según la cual el Tribunal debe obtener el conocimiento y formar su convicción, utilizando el medio probatorio más cercano al hecho a probar, entre todos los medios concurrentes. (HIDALGO MURILLO J. D., 2009)

Para entender la inmediación es necesario tener una óptica subjetiva y una objetiva, en la primera debe conocerse que es el contacto estrecho e ininterrumpido entre el juez y las partes que intervienen en el proceso, ya sea los sujetos dentro del proceso o terceros. En cuanto a la objetiva debemos referirnos al proceso de

comunicación entre el juez con los hechos y las cosas que interesan al proceso.

Circunscritas al debate, lo que resguarda al imputado de pruebas no sujetas a contradictorio (SÁNCHEZ ZEPEDA & ESPINO G. , 2010). En la etapa de desahogo de pruebas, hallamos una estrecha relación entre la inmediación y la contradicción, así como con la oralidad. Debido a que través de la oralidad se desahogan las pruebas, además se presenta el debate entre las partes, siempre en presencia del juez como requisito *sinne qua non*, con el fin de que último esté en condiciones de dictar una resolución fundada en las precisiones directamente observadas y recibidas por el juzgador.

Por ello, se afirma que el principio de inmediación establece la relación directa que debe existir en el debate entre el juez o Tribunal, las partes del proceso y los medios de prueba. Consiguientemente, este postulado involucra la recepción de la prueba y el alegato de las partes en carácter originaria y en su estado natural, sin interposición de cosa o persona alguna, entre el juez y la prueba o las partes. (TORRES S. G., 2006)

El principio de inmediación ha sido disminuido en el sistema mixto y, de manera especial en el sistema inquisitivo, ya que la escritura, característica propia de estos sistemas de enjuiciamiento penal, consiente en delegar esta función tan especial y trascendental en personal distinto, mismos que son del mismo juzgado o tribunal, no es propiamente el juez quien

necesariamente lo preside, así mismo como consecuencia, la sentencia resulta como producto de un estudio del expediente, pero sin haber estado de forma personal y directa el desahogo de las pruebas, el debate, y, en adición, sin haber observado en momento alguno el desarrollo de la audiencias.

Resulta clara la correspondencia que la inmediación guarda con otros principios, como se puede mencionar en la oralidad, porque ésta tiene un sentido original basado en medio de comunicación originario entre los seres humanos, el más natural y el más completo debido a que se expresa de forma verbal los acontecimientos . (VIVAS USSHER, 1999) Aunque de igual valer significa la relación de la inmediación con los principios de contradicción, concentración, continuidad y publicidad, los mismos ya han sido abordados con anterioridad en el presente trabajo.

CAPITULO II

EL ACTUAR DE LA POLICÍA EN UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO

2.1. LA LEGITIMIDAD EN UN ESTADO DE DERECHO.

Para lograr comentar sobre un Estado Constitucional se necesita iniciar desde una proposición indispensable. En la modernidad no todo Estado es Constitucional, aplicándose por intermedio de un sistematización jurídico fundamental, para que sea la norma sobre todas las otras normas, impuesta por el Estado, pero que dicho ordenamiento debe estar respaldado por valores humanistas donde se fundamente la libertad como derecho fundamental, asimismo, de un sin número de procedimientos que logran hacer posible toda existencia misma y como consecuencia de ello, el disfrute ante alguna invasión, intrusión o acciones engañosas en su contra, teniendo en cuenta que el poder público o algún otro individuo de forma física o jurídica.

Por tanto, un proceso penal, concebido según la doctrina de la legitimidad, su actuar debe ser basado en defensa de los derechos humanos, y todos sus componentes, lo que significa, quienes integran el proceso penal, como el caso de la de las personas encargadas de la seguridad siendo más específicos la policía, sus actos deben estar enfocados a esclarecer los mismos dentro del proceso penal.

2.2. CONCEPTO DE LEGITIMIDAD

Sobre la legitimidad hasta la fecha sigue siendo una expresión que siguen buscando definir, por intermedio de concepciones y operantes. Por un lado, se sigue teniendo en cuenta la exuberante condición sobre el parentesco en la carga, sobre los valores no muy adecuados para la práctica e investigación o en general conocida como empírica. Desde otra

perspectiva, se considera a la legitimidad como un mecanismo fundamental para un mejor desempeño en entidades políticas y jurídicas.

El vocablo legitimidad se extrae primordialmente de la esfera jurídica y legal, como aquella situación concerniente aquellas medidas que son distintas a un sistema legal de normas que se instauran en un caso. Así como, la legitimidad por intermedio de un acto el cual se ejerce en un proceso que se encuentra presente, cuando los ya mencionados, se siguen las normas preestablecidas. (GARCÍA BELAUNDE, 1975)

Así también, se establece que nos encontramos frente a la a los actos legítimos en cuanto al consentimiento de las leyes, en este caso en específico, a los daños que puede generar, es decir, si un proceso, en éste caso el penal se ajusta a los parámetros establecidos por la legitimidad.

2.3. LA LEGITIMAD DESDE UNA VERTIENTE DE LA FILOSOFÍA DEL DERECHO

Desde la Filosofía jurídica, el vocablo legitimidad alude a los principios de justificación del Derecho (el Derecho como “punto de vista sobre la justicia”) (HIDALGO MURILLO J. D., 2009). La legitimidad o justicia de las normas jurídicas enuncia concordancia o lo contrario la discordancia de esas normas con un explícito sistema de valores (CERVANTES MARTÍNEZ, 2004).

Para quienes valoran y protegen las normas jurídicas, desde un punto de vista de la justicia o injusticia, no es necesario que ello se

pueda determinar por intermedio de mecanismos legales o que ostente un auto justificación, lo que se crea como válido, es el planteamiento de su legitimidad, su justicia. Como puede apreciarse, en aquellos hechos de la legitimidad política, siendo así, que la problemática retorna a ser un método sistemático de valores donde las normas deben buscar ser apreciadas como legítimas o justas.

Necesitamos evaluar de forma breve sobre algunas corrientes consideradas importantes, dentro de la esfera del pensamiento el cual han procurado valorar la unión de un sistema donde las normas puedan considerarse equitativas.

Hace tiempo fundado en valores, se asemejó con el conocido Derecho Natural. Cabe resaltar, que no es el momento de analizar dicha corriente del derecho, es únicamente necesario indicar desde la perspectiva del iusnaturalismo platónico-aristotélico o el estoico, siguiendo al racionalismo, interconectando un término que se encuentra más elegante, asimismo, el iusnaturalismo escolástico, se protegió de forma general sobre la coexistencia de aquellos principios que emanaban de la misma naturaleza, que proviene de Dios o de la misma razón, siendo universalmente válida e inalterable. Dichos lineamientos tenían que ser forjados por el derecho positivo, de tal manera que, dejaría legítimo cuando existiera una oposición por parte de ellos. La equidad de la norma, se asemeja conforme a una ley que es naturalmente superior y que es a su vez trascendental.

Después de una crisis donde el positivismo jurídico, sumergió a la teoría de justicia del derecho (donde narra sobre la tensión legal –

legítima), por el siglo en la segunda mitad, se volvió a tomar en cuenta, para cuestionar los nuevos acontecimientos y sus perspectivas. Superada dicha teoría sobre la justicia como debía corresponder.

En el estudio de los derechos humanos sobre la percepción de la justicia, quienes hacen un arduo estudio sobre este tema, nos dicen que este soluciona, bajo un mismo axioma de valores, el juicio sobre la legitimidad del ordenamiento legal y los criterios de justicia distributiva y conmutativa. En mi opinión comparto la idea de los que defienden a los derechos humanos, como derechos morales, los cuales tienen como fundamento y prioridad la persona como un ente autónomo, con dignidad e inviolabilidad propia.

En las opiniones más universales los derechos humanos se reducen a los valores de la libertad, igualdad y seguridad. Unos de los derechos morales básicos es la libertad, el cual garantiza que a todas las personas puedan hacer lo que no está prohibido o no realizar lo que es obligatorio. El respeto al albedrío personal exige un derecho al trato legal y la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin importar su color de piel, creencias o estatus social. Debemos mencionar el derecho a la seguridad jurídica, la cual se entiende como el aseguramiento a la arbitrariedad y esta se deriva de la autonomía individual.

Unos de los problemas es que radica en el enfoque del iusnaturalismo, la razón y su experiencia nos instruyen que no puede existir un valor universal e inalterable, donde la verdad evidente no es la justicia, sino que conviven diferentes pensamientos acerca de ella. Ante

ese problema no podemos desistir en el objetivo que es aspirar a un derecho justo.

Como señale en el párrafo sobre la legitimidad jurídica, actualmente concurre una aceptación general sobre, el carácter en su enfoque democrático como aquel término sobre la voluntad general, donde busca la concretización de la libertad, solidaridad, igualdad y ese respaldo jurídico en un escenario donde los derechos humanos representen ese enfoque de justicia, un derecho legítimo. Asimismo, la legalidad puede lograr a legitimarse. Comprendiéndose, desde la perspectiva integral de aquel fenómeno jurídico donde el enfoque de la validez, de su legitimidad y eficacia, evite todo tipo de tentación que busque minimizarla.

2.4. ¿HACIA DÓNDE SE DIRIGE LA LEGITIMIDAD?

Como solía decir HELLER: “el Estado sobrevive en base a su justificación. Ya que, en cada generación, debe plantar un nuevo problema que pueda justificar al Estado como tal, por intermedio de la necesidad psicológica. (PÉREZ LUÑO, 2005) . En la actual democracia, en su modelo liberal representativo, este requiere poder replantearse su enfoque de justificación, como se mencionó, tiene que relegitimarse. Este enfoque de relegitimación, desde mi perspectiva, esa transparencia y responsabilidad son necesarios para la gestión pública en la actualidad.

La forma transparente, como aquel requerimiento de difusión relacionado al desempeño de los poderes públicos, todo ello proviene,

de un principio democrático donde se sustenta la legitimidad, de cómo debe ser el accionar del poder y como debería pertenecer reconocer aquel derecho sobre la información la cual tienen acceso los ciudadanos de forma pública.

Es por ello, que la transparencia es un elemento eficaz para poder rescatar la mala administración, pudiendo permitir que el ciudadano logre tener conocimiento de manera más eficiente y de esa forma poder fiscalizar la prestación de servicios y como se emplean y en qué, los recursos públicos, de esa manera se estimula a que los poderes deben accionar de manera más eficiente.

Un gobierno con una administración transparente, deja que la información que la sociedad requiere este al servicio del ciudadano. Teniendo en cuenta, que una gestión al ser transparente, su poder y administraciones públicas, se verán fortalecidas con otros valores, como la imparcialidad. Hoy en día, no nos sorprende que la transparencia y el acceso a dicha información pública, la cual, se circunscriba como uno de los indicadores esenciales para una calidad dentro de un sistema democrático y los elementos principales de su legitimación.

Conceptualizar la responsabilidad debe entenderse algo inherente a la transparencia. En tal sentido, esta relación entre ambos es de absoluta interdependencia, puesto que sería imposible que exista la responsabilidad sin transparencia ni transparencia sin responsabilidad.

De ahí que es necesario reflexionar sobre la corrupción que hay dentro de la administración pública. Como se sabe hay muchas definiciones en lo que respecta a la Administración Pública, sin embargo,

me gustaría dejarlos con el concepto que alude el profesor Guzmán Valdivia, quien la define como el “CONJUNTO DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ESTATALES QUE ADMINISTRAN Y GESTIONAN ENTES PÚBLICOS DE MANERA EFICAZ”. Aquí hay una palabra clave en esta definición “eficaz”, y esto es algo de lo cual se ha perdido mucho, ya que ahora se dice para efectos de calificar una administración si esta fue buena o mala, y se olvida que la administración debe ser eficaz, a lo que quiero llegar, es que, no debería de existir la posibilidad de calificar a la administración pública como buena o mala debido a que está obligada a ser eficaz y por ende buena.

Por tanto, se obliga al Estado, como el único garante de la administración pública a establecer políticas públicas, que se encaminen a hacerla más transparente más confiable. En los últimos años se ha dicho que donde existe transparencia en la Administración pública, estamos frente a un país con una democracia más sólida.

Una de las principales razones por las cuales no podemos gozar muchas veces de una administración eficaz, es por la gran problemática a la que se ve enfrentada diariamente, me refiero a la corrupción. El distinguido profesor Morris, entre otros, entiende que la corrupción como una incongruencia entre dos dimensiones de un mismo Estado, es decir, consiste en un representante del Estado (funcionario público) que actúa contra las reglas del Estado.

Entendemos que como individuos adquirimos deberes posicionales de voluntad propia, de tal manera, se puede distinguir que al hablar de deberes morales y su no valoración, se estaría cayendo en

un acto de corrupción, sin embargo, no sería delito, por otro lado al violar el cumplimiento de una obligación relacionada con una norma jurídica se caería en corrupción que trae consigo una infracción y por ende sería delito.

Dicho lo anterior, queda claro que la corrupción afecta la relación entre Estado y sociedad, por ende la administración pública se torna incipiente y en muchas ocasiones desacreditada. Cosa que no beneficia en nada a la ciudadanía, sino que al contrario nos perjudica el hecho de saber que muchas instituciones públicas, se han vuelto en una fuente no fiable.

Cabe aclarar que mi intención, no es criticar al Estado, sino más bien, ser consciente de la realidad, para desde ahí empezar a constituir instituciones solidas en todo el país y las universidades, los profesores, alumnos y todos estamos llamados a crear puentes de colaboración.

No es posible que el año pasado, se dio a conocer, según la OCDE que México ocupa el primer lugar en corrupción a nivel mundial. Frente a ello, se generan algunas interrogantes ¿Estaremos frente a una administración pública Eficaz? ¿Cómo lo percibimos la administración pública? ¿Seguimos creyendo? Claro está que el actual gobierno hace lo posible por restablecer la vigencia del Estado de Derecho, sin embargo considero que aun es muy temprano para establecer una opinión fehaciente, sobre la proyección pública.

Hasta este punto he querido hacer una referencia como la corrupción ha afectado al Estado en materia de administración pública. Así también, me gustaría dejar sentado y a la vez desmentir algunas

creencias que nosotros mismos hemos formado, las cuales tienen relación directa con la corrupción. Me refiero en estricto, cuando pensamos que la corrupción empieza en los más altos niveles.

Dejemos de lado por un momento a la administración pública, si bien, cuando escuchamos hablar de corrupción, enseguida llega a nuestra cabeza la imagen de un juez, un gobernador, un presidente. A lo que quiero llegar es que se ha formado ese estereotipo de que, si eres político eres corrupto, o si eres policía eres corrupto.

Esto pone a la vista que una administración, ya ha sido desacreditada como una administración eficaz, y esto en efecto es alarmante, sin embargo, hay algo aquí que estamos dejando pasar por alto, lo cual es, que los actos corrupción no empieza en siempre inician en los niveles más altos de jerarquía, la corrupción es algo que viene de abajo, y no me refiero a clase baja, ni nada por el estilo, me refiero que en términos jerárquicos, se da lugar a la corrupción desde cosas tan simples.

Por ejemplo: el caso hipotético que un oficial de tránsito pare a una persona por exceso de velocidad en zona escolar, pero llegan a un acuerdo, el oficial no le multará y el individuo le dará una suma de dinero (poniendo esto en términos elegantes) y fin del escenario, cada quien se va por su lado, más tarde ambos se enteran que su Estado está siendo catalogado como el más corrupto a nivel nacional y de inmediato a quien culpan, al Gobernador y a todos los políticos.

Lo que quiero dejar en claro con esto, para que una sociedad pueda ser administrada de manera eficaz y eficiente, necesita coadyuvar con sus líderes, en este caso los servidores públicos, quienes se encargarán de velar por sus intereses, regidos por los principios de legalidad, eficacia y servicio.

Para Arlety Zamora Hernández, dice: Podemos afirmar que la corrupción es un fenómeno complejo y multifacético por lo que resulta necesaria su comprensión en su amplia gama de manifestaciones de acuerdo a su naturaleza y del escenario en que se produce, muchos autores refieren que existen tres tipos fundamentales de corrupción, la económica, política y administrativa. En consecuencia, la corrupción se presenta en todos los ámbitos de la Administración pública de forma generalizada y ha generado que el Estado despliegue una política que impacte en la creación de instrumentos normativos para poder hacer frente a este flagelo, creando tipos penales de los actos realizados por funcionarios públicos o por agentes de la administración que típicamente han sido calificados como delitos contra la administración pública. (Hernández, 2014)

Convencido que la corrupción es un fenómeno que en la actualidad lacera a la sociedad mexicana, y por qué no decirlo, la Iberoamericana; pareciera que entonces todo lo que acontece en el ámbito de la administración pública resulta desolador. Sin embargo, vemos de manera alentadora cambios trascendentales en ésta temática. En este sentido, destacamos los esfuerzos de la Unión Europea, y en concreto en España, tanto el Derecho Administrativo, la institución de la

Administración Pública, han tomado un nuevo rumbo al reconocer como eje central al ciudadano. Lo mencionado puede constatar en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, donde se ha reconocido como un derecho fundamental de la persona el derecho a la buena Administración Pública.

Así, el ciudadano, puede exigir a la autoridad administrativa que actúe con calidad, con rigor, eficacia y eficiencia; y a su vez, se reconoce como principio de actuación administrativa, ya que la Administración Pública está obligada a dirigirse en su actuar cotidiano con un servicio objetivo al interés general.

Actualmente, el reconocimiento de este nuevo derecho fundamental está siendo incorporado en las Constituciones de la mayoría de los países en el mundo (situación que entendemos debe ser extrapolada a la realidad mexicana), esto es, concebir a la Administración Pública como un derecho, toda vez que el destinatario primario del Estado y de la Administración Pública es precisamente la persona, su protección y promoción de la dignidad humana y de todos sus derechos fundamentales.

La fortaleza del instrumentar nuevos paradigmas de justicia en una realidad determinada, como es la Unión Europea, particularmente España, radica en primer momento en la inclusión de marcos jurídicos garantistas respetuosos de los derechos del ciudadano.

Por ello, este nuevo derecho fundamental a la buena administración se fundamenta en el artículo 41 de la Carta Europea de

los Derechos Fundamentales, cumpliendo el compromiso de la última ratio de la administración pública.

A partir de ahora, los ciudadanos europeos tienen por derecho fundamental recibir y exigir de las instituciones europeas un servicio público que les resuelva los asuntos públicos de manera imparcial, procurando ser equitativa, justa en cuanto al fondo y resueltas en un tiempo razonable.

Llegados a esta parte, hago mías las lecciones de los profesores CÁRDENAS Y MIJANGOS, la corrupción es controlable, es decir, “es una cuestión de racionalidad, voluntad y lucidez”. Esto representa todo un reto estatal y social; una cuestión sociocultural; para ello, es necesario actuar en diversos ámbitos para el combate a la corrupción, pero sin lugar a dudas la educación resulta esencial en este aspecto, para que los ciudadanos bien preparados puedan exigir activamente a sus gobiernos e instituciones un buen funcionamiento y que den cuenta de sus actos.

Atingente a esta realidad, el profesor, MORGAN RÍOS, comprende que: “La corrupción es un mal que amenaza los derechos humanos, amenaza las instituciones democráticas y las libertades fundamentales; frena el desarrollo económico y social; agudiza la pobreza; favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas; afecta la credibilidad y legitimidad de los gobiernos e impide que los recursos públicos coadyuven al desarrollo y al bienestar de la sociedad”. (MORGAN RÍOS, 2011)

Hay que tener esto bien claro, lo que se acaba de decir ya no es más un simple pensamiento, en México a medida que incrementaba la corrupción el modelo de gobierno abierto va cobrando forma y vida, de tal manera que en el año 2015 México fue la sede para la Cumbre Mundial de la Alianza para el Gobierno Abierto, resaltando que para dicha edición México propuso como eje temático la aplicación de los principios de gobierno abierto para lograr el cumplimiento de la agenda 2030.

Se dejó en claro que para Alejandra Naser combatir la corrupción es urgente y necesario aplicar medidas de transparencia, y es correcto, esto da lugar a un concepto denominado “ética de administración pública”. Es sumamente importante la ética pública al momento de reforzar o regresar las condiciones de credibilidad que fueron dañadas por medio de la corrupción en la administración pública, la ética es un elemento sustancial para lograr la transparencia administrativa. (Naser, 2017)

De tal manera que si se dejara la ética fuera de la ecuación, sería totalmente imposible el poder cumplir por parte de los funcionarios públicos de manera autónoma con sus obligaciones, ya que estos al no disponer de la ética de administración pública, darían pie a la corrupción o dejarían un margen para que esta se fuera dando en tanto, cuando no hay ética.

Por último, me gustaría que nos quedáramos con el pensamiento de que la administración pública, no es cosa que corresponde solamente

a los gobernantes, sino como se mencionó reiteradamente, la administración pública es la relación del ciudadano y el gobierno.

2.5. FUNDAMENTOS DE LA LEGITIMIDAD

Las situaciones que conllevan a ese consenso, pueden ser heterogéneas y que de acuerdo a los hechos circunstanciales pueden variar en cada sociedad. La política obediente en determinada cultura se hallará cimentada sobre circunstancias particulares, que no deben ser adoptadas de manera coincidente con otros pueblos. En algunos lugares, prevalecerá la religión como un fundamento que legitima su poder, en cambio, en otras partes del mundo, desde la perspectiva individual o colectiva, económica, todo ello es de acuerdo a lo que establece el mercado, por ejemplo: la construcción de motivadores para lograr tener el agrado del poder político.

En la esfera cultural, donde brota ese criterio llamado validez del poder que es inactivo en toda sociedad, asimismo, el contexto sobre la cual se desempeña la deliberación sobre el objeto del documento actual. Donde, se expondrá aquellas ideas sobre los fundamentos que respaldan la legitimidad dentro una cultura a otra, como cimiento sobre la legitimidad del poder político de un Estado en la esfera cultural interna.

Lo anterior, se ha transformado en los derechos subjetivos, los cuales considero necesario mencionar. Al respecto debo precisar que los derechos subjetivos, como cualquier manifestación del derecho han ido evolucionando, conforme, el devenir de la sociedad. Para entender estas

concepciones, es necesario referirnos a las acepciones que se tienen sobre la palabra derecho; al respecto afirmare que el derecho es un conjunto de normas jurídicas “según la posición positivista” que rigen una determinada sociedad, en un determinado espacio y que tienen a la constitución por encima de todas las leyes – aunque después de la reforma constitucional del año 2008, cita el: artículo primero constitucional establece no solo a la constitución por encima de todas la leyes , sino también a los tratados que versan sobre derechos humanos.

Sin lugar a dudas, este alcance del derecho se manifiesta a través de la juridicidad de las normas, así le entiende el profesor Escobar Rosas de la Universidad Pontificia de Chile, al considerar que las normas jurídicas obedecen a un aspecto de la juridicidad (Escobar, 2016).

La definición desarrollada en el párrafo anterior, como lo eh mencionado pertenece a la rama del derecho positivo, pues bien el derecho, no solamente debemos entenderlo como un conjunto de normas jurídicas si no que este a la vez, se debe entender como aquellas facultades inherentes a todo ser humano, que desde la concepción del naturalismo, se entiende del derecho forma parte de los alcances de la justicia y el bien común, lo que a decir del profesor Moto Salazar (2002), entiende, que *“el derecho natural es el conjunto de máximas fundamentadas, justicia y sentido común”* (Salazar, 2002).

Por tanto, cuando nos referimos a los derechos subjetivos (Público o Privados), se entiende que son aquellas, prerrogativas, que nacen del derecho natural, así como de las leyes, con carácter

obligatorio. De ahí la importancia de estudiar el derecho subjetivo frente a las exigencias de las personas humanas frente al estado. Por tanto, el primer punto a tratar es el estado.

La protección de los derechos subjetivos públicos se basa en los principios de justicia que rigen a todo estado. Lo que implica una protección por parte del estado para hacer posible las necesidades subjetivas de los individuos (González Casanova, 1980.) Según este autor, lo que se busca con la protección de los derechos subjetivos, es hacer posible vivir en una sociedad en donde se busque proteger los derechos reconocidos por la propia constitución, así como en tratados que tienen que ver en la protección de derecho subjetivos públicos (González, 1999.).

En tal sentido, cuando estamos en la protección de los derechos subjetivos, se protege una de las cualidades de nosotros los humanos como lo es la igualdad. No solo se trata de dar a cada quien lo que le corresponde, sino que también, se busca que los seres humanos, se nos garantice los derechos fundamentales de cada uno en cada aspecto de nuestras vidas.

De ahí la necesidad de conocer un poco más sobre la justicia y sus alcances en cuanto a la igualdad. Garantizar los derechos subjetivos públicos, también es una manifestación de la justicia en todos sus niveles. Por ello, a manera de idea central de justicia, se debe enfocar desde un plano de la imparcialidad.

El derecho subjetivo debe ser entendido como aquellos atributos que otorga la ley a las personas, traducidos en facultades e inherentes

para obrar en intereses particulares y colectivos. Sin embargo es menester establecer que cobran importancia este tipo de derechos cuando existe una restricción por parte de un tercero, que puede ser el estado o un particular, denegar las facultades conferidas a todos. Por ello en atención a lo anterior, traigo a colación lo establecido por el profesor Luigi Ferrajoli, cuando establece que los derechos subjetivos forman parte de aquellas limitaciones que tiene el estado frente a cualquier ejercicio legítimo de su actuar (Ferrajoli, 2006).

Algo que se hace importante mencionar es que los derechos subjetivos siempre requieren que no sean una simple ilusión o una mera expectativa de exigencia, si no por el contrario encuentren un fundamento para poderlos reclamar frente a los demás. Por ejemplo, no podemos exigir algo, por la mera voluntad, si no está prescrito por una ley, por tanto es necesario tener presente que para reclamar algo necesariamente tiene que estar muy bien definido el objeto por el cual vamos a imponer una decisión frente a los demás.

Siguiendo al profesor García Amigo el afirma que, para estar frente a un derecho subjetivo es necesario que este cumpla con tres condiciones *sine qua non*, es decir que este tenga un objeto, una garantía y una tutela; en cuanto a la primera (Objeto) necesariamente se está refiriendo a una cuestión ideal o a una conducta descrita por la ley; en cuanto a la segunda (Garantía) se requiere que este deber jurídico obligue a todos, incluso al estado a la satisfacción de los intereses ajenos; en cuanto a la tercera (Tutela), el profesor afirma que el derecho subjetivo es una situación jurídica que nace a modo de reacción del

ordenamiento jurídico ante la lesión o el peligro de un interés. (García, 1979).

Un estudio realizado en la UNAM por Noriega Alcalá (2018), afirma que los derechos subjetivos públicos, surgen en Europa, precisamente, en Alemania, en donde se consideraba desde una óptica doctrinal, que estos derechos, se consideran como la potestad que tiene todo ser humano, la cual está reconocida por el ordenamiento jurídico, relacionado hacia un bien o un interés público. (Alcalá, 2018). En tal sentido lo que se busca regular a través de estos derechos es aquella facultad inherentes que le pertenecen al hombre, en su cualidad de ser humano y en respeto a su dignidad humana.

Esta voluntad o facultad del ser humano, al momento de ser parte receptora del estado, este la convierte en derecho subjetivo público, dando origen a la capacidad de exigir el reconocimiento y el actuar del estado, siendo este último en su calidad de potestad jurídica en tal sentido las exigencias individuales de toda persona, convertidas en derechos, hacen posible que el estado, como garante actúe frente alguna lesión opuesta en jurídico de alguna libertad o derecho en un determinado caso.

Para Hernández Valle los derechos subjetivos públicos, tienen una doble connotación, por un lado desde un ámbito formal, estos derechos, establecen pretensiones jurídicas, que derivan directamente de las cualidades de las personas sujetas de derecho. Y por otro lado, desde un enfoque material, estos derechos constituyen o pertenecen a

los individuos, en su condición por ser parte de un estado. De lo que se entiende que una de las fuentes que da nacimiento a los derechos subjetivos es el estado, y así como los instrumentos jurídicos que dan forma y validez a los derechos objetivos. (Hernández Valle, 1990).

De lo establecido en párrafos anteriores, considero que se puede dilucidar un concepto acorde a lo desarrollado en el presente ensayo; en ese orden de ideas, se establece que los derechos subjetivos, se convierten en la capacidad de poner en movimiento las normas jurídicas, en cualquier campo del derecho, las cuales pueden ser civiles, penales, laborales, mercantiles, etc. Como consecuencia de ese ejercicio de las normas el estado actúa como un garante, en su relación entre individuos y estado. Por tanto no podríamos hablar de intereses particulares, sino más bien de intereses públicos, en su relación dinámica estado-individuo.

Es importante mencionar, apegados al profesor Hernández (1990), que los derechos subjetivos públicos, reaccionan bajo la idea de la teoría de Autolimitación del Estado, es decir, que el estado no solo reconoce las facultades de las personas, sino que, se autoimpone el deber jurídico de actuar con el fin de garantizar los derechos individuales a través de instrumentos jurídicos, como la constitución y las demás leyes que dan armonía al ordenamiento jurídico nacional. En México después del año 2008, considero que el estado ha pasado a ser más garante que antes, debido que ahora impone al actuar de toda autoridad, como límite los derechos humanos y las garantías constitucionales que se protegen a nivel supranacional.

Contrario a lo establecido en el párrafo anterior, me queda una reflexión a la autolimitación que tiene el estado, por la satisfacción de los intereses públicos de sus ciudadanos. Esta preocupación se debe a que es el mismo estado quien se auto limita por su propia voluntad, sin presión de algún ente externo, por lo tanto, en cualquier momento puede eliminar por voluntad propia esas autolimitaciones. Es lo que en algunos países tipo Venezuela, en donde se a desprotegido los intereses sociales, por los intereses políticos que percibe el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Los derechos subjetivos públicos, se extienden en la normatividad del derecho positivo, es decir aquellos derechos que se les reconoce a los hombres, dentro de la clasificación de los derechos humanos, como derechos civiles y políticos, reconocidos ampliamente por la constitución y otros cuerpos legales. De ahí que los cuerpos policiales, deben asumir el compromiso de hacer posible la eficacia de los derechos subjetivos.

También es necesario mencionar que en los últimos años se ha evidenciado una enorme situación que hace posible que el sistema de justicia penal y el actuar de la policía está en crisis. Y es que, el modelo de justicia retributiva, siempre ha existido desde la aparición del ser humano; ante un delito cometido hay que retribuir. Ahora bien, para VILLAVICENCIO TERREROS: a nivel de aplicación de justicia esta palabra se entiende desde una óptica; ha de "pagar", es decir "recibir sanción" por el mal hecho. Para este sistema, la pena es la retribución por el delito cometido; producirle un mal a un individuo que compense el mal que ha causado libremente, equilibrándose así la culpabilidad del

autor por el ilícito cometido.(VILLAVICENCIO TERREROS, Derecho Penal, Parte General, 2006).

Ante el proceso como un punto controversial entre el Estado, como ente que monopoliza la fuerza legítima, legal y victimario, individuo a quién se le identifica con el hecho criminal, se suscita por intermedio del proceso un estadio donde se encuentran el Estado, el victimario y la víctima. En este tipo de modelo reciente sobre justicia penal, donde el juez toma una postura de decisión, propio del tipo de proceso que se concibe como herramienta para lograr la materialización del ius puniendi estatal, surgiendo de una acción conciliatoria con el fin de poder armonizar un proceso en el que el culpable y la víctima originan, en razón de la igualdad, sobre sus derechos con el objetivo último de alcanzar que se reconozca el hecho y se exija una reparación por los perjuicios ocasionados frente al ilícito penal.

Estaríamos hablando de los denominados fines de la pena, entendido como prevención general y especial, ¿realmente la pena cumple una función disuasoria para con la sociedad en general y para con el delincuente de cara a actos futuro? Esta crítica constituye la piedra angular del movimiento en contra de la Justicia Retributiva, este modelo está orientado hacia el pasado. Tiende a precluir y marginar la atención sobre el futuro. El modelo de justicia actual está anclado en direccionarse hacia el pasado y se focaliza insuficientemente en el futuro.

El enorme estigma y condicionamiento que produce este enfoque penalizador que domina la legalidad no sólo afecta al propio sistema judicial tradicional, sino que también etiqueta a los criminales. La criminalidad se convierte en una parte inflexible de la identidad social. El procedimiento para establecer la pena y el castigo es elaborar leyes, definiciones legales y normas, acusar a las personas y promover la salvaguarda de la legalidad. Los acusados de un crimen son frecuentemente advertidos de que serán juzgados con toda precisión y rigor, haciéndoles implacablemente responsables del daño causado. Sus mentes localizan la atención en las formas de obtener una mitigación de su castigo y no en su responsabilidad moral por el daño causado a otra persona. Al hilo de lo anterior, se argumenta que un sistema menos obsesionado con aplicar castigo y dolor a los que causan un daño podría enfrentarse a éstos mejor, haciéndoles asumir su responsabilidad y encaminarlos a subsanar el daño ocasionado

Se critica que el sistema retributivo se basa en una concepción individualista del castigo que tiende a expresarse a través de ese modelo, basado en que el victimario debe evaluar su propia conducta y como responsable único y último de la misma debe de pagar por ello. En este sentido, esta concepción individualista del castigo choca plenamente con la percepción que muchos victimarios tienen, no viéndose como individuos completamente libres para decidir sobre sus propias vidas. Muchos ven su comportamiento como una forma de actuación determinada por muchos factores que se conjugan, factores socioeconómicos, poca capacidad de control o resistencia,

circunstancias, etc.(ZEHR, 1990). Muchos de ellos no creen que ellos tengan la libertad que la ley insiste en decir que tienen.

Se trata de pagar ante la sociedad por el daño causado con otro daño igual al causado, se asume que cada crimen genera una deuda para con la sociedad que puede ser medida con precisión y que la cantidad de daño que la sociedad devuelve se calcula y administra con equilibrada precisión. Antecedentes de estas concepciones son visibles en la Escuela positiva italiana, encabezada por FERRI, GAROFALO y LOMBROSO, quienes se planteaban la posibilidad de que la reparación a la víctima fuera articulada como una modalidad de sanción pecuniaria, considerándola como una sanción de carácter público. Incluso se proponía que desplazara en algunos casos a otras penas, como las privativas de libertad. En España, Dorado Montero criticaba a GAROFALO por no distinguir de forma clara la pena del resarcimiento del daño. (GORDILLO SANTANA L. , 2007)

La intervención penal está respondiendo como un sistema sumamente practico para así poder realizar el desempeño de los tratados acordados en la misma, mediante al grado de asistencia, colaboración y responsabilización que en él mismo genera.

Se revela como un mecanismo educativo y de control social informal preventivo muy importante, hasta el extremo de que permite educar interactivamente durante el proceso de la misma. De hecho, uno de los argumentos comúnmente utilizados por los defensores de la Justicia Restaurativas que tiene un efecto de prevención de la revictimizacion. Al contrario, el sistema judicial revela en el campo del

derecho de familia o penal un alto índice de reincidencia, o ejecuciones de sentencias con modificaciones de medidas, etc. Aspectos que producen el colapso de los juzgados.

A diferencia de las teorías absolutas que consideran a la pena no puede cumplir ninguna utilidad social, agotándose en sí misma, las teorías relativas de la pena asignan un fin preventivo a la pena, ya sea disuadiendo a los ciudadanos para que no cometan delitos (prevención general) o evitando la reincidencia del condenado (prevención especial). Ahora, esta prevención se puede entender en un sentido negativo cuando su objetivo es intimidar o neutraliza y en sentido positivo cuando la pena está encaminada al reforzamiento de la confianza en la norma.

Por su parte la teoría de la prevención general negativa, quien fue postulada modernamente por Johann Paul Anselm Ritter Von FEUERBACH (1775-1833) con la teoría famosa “coacción psicológica”, mediante la cual el derecho penal representaría la solución a la criminalidad evitando a través de la conminación penal (principio de legalidad) que la colectividad delinca. Lo sustancial para FEUERBACH era la intimidación mediante la tipificación penal, en tanto que la realización de la pena solo tendría sentido para afirmar la complejidad de la amenaza legal.

No obstante, contra esta teoría se han formulado una serie de críticas. En principio se le objeta por ser una teoría tecnocrática que llevada hasta sus últimos extremos implicaría una instrumentalización del delincuente con fines intimidatorios, atentado de esta manera contra

la dignidad de la persona humana. Por tal razón señala HASSEMER: “la teoría de la prevención general, sin referencia al fin de la justa retribución o al principio de proporcionalidad, es insoportable”. También se le objeta la falta de constatación empírica de su efecto intimidatorio, al no poder sostenerse en aquellos casos en los cuales el sujeto no conoce la norma penal prohibitiva ni la posibilidad de la ejecución de la pena, y sin embargo no la vulnera (Hassemer, 1984). Y aun conociendo la norma, esta teoría parte de una realidad demasiado idealista del hombre, concibiéndolo como un homo oeconomicus, que en cada acción realizada analiza racionalmente los costos y beneficios de su actuar, despreciando así la sobradamente irracionalidad fáctica de las personas, patente sobre todo en el ámbito de la criminalidad patrimonial de escasa gravedad.

No hay que perder de vista la teoría, para Silva, Jesús María la prevención general positiva, conocida también con el nombre de “estabilizadora” o “*integradora*” (Silva, La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las ciudades postindustriales, 2001). Según esta concepción, la pena no se caracteriza por cumplir una función negativa de intimidación a la generalidad, sino de un efecto positivo de reforzamiento en la confianza en el sistema social en general y el sistema penal en particular.

A pesar que el mismo JAKOBS le atribuye una función preventiva a la pena, a través del ejercicio de fidelidad hacia la norma, se ha dicho que en puridad no sólo cumple una función preventiva sino también retributiva. LESCH, discípulo de JAKOBS, ha rechazado la

denominación misma de “prevención general positiva”, proponiendo en su lugar el nombre de “teoría funcional de la retribución”, que a su juicio expresaría mejor el carácter de esta teoría que oscila entre una fundamentación absoluta y otra relativa de la pena: «sería absoluta ya que se castiga “quia peccatum est” y no “ne peccetur”, pero sería al mismo tiempo relativa porque... no es fin en sí misma, sino que tiene una función, la del manteniendo de las condiciones fundamentales de la coexistencia social» (Jakobs, 1997).

Así también la prevención especial (negativa y positiva), en su variante positiva, la pena tiene como finalidad la resocialización del condenado, siendo relevante la pena ya no en el momento de la conminación penal (prevención general) sino en su ejecución. De lo que se trata es de evitar la reincidencia del delincuente mediante su tratamiento. En tal sentido, las modernas teorías de la resocialización consideran que la reinserción del delincuente le otorga legitimidad y fundamento a la imposición de una pena.

Los ataques al ideal resocializador de la pena han venido desde ángulos diversos. Así por ejemplo, para extinto BUSTOS RAMÍREZ “la idea de la resocialización parte de la llamada ideología de la diferenciación, de que hay hombres buenos y malos, hombres normales y anormales o peligrosos. De que hay un orden absoluto verdadero y otros órdenes falsos, de que hay hombres sanos y otros necesitados de tratamientos, que son enfermos” (Bustos, 2004).

Nosotros sólo diremos que si bien es cierto la resocialización del delincuente difícilmente se puede alcanzar por medio de la pena privativa de libertad, al menos es un ideal (no fin de la pena o del derecho penal) que de forma muy limitada importa menos peores condiciones de vida para los internos. En todo caso, lo que sí desde ya rechazamos enfáticamente es que bajo el manto de la resocialización se pretenda utilizar mayor pena como sinónimo de mayor trato resocializador (García, 1984)

Es necesario tener en cuenta, las Teorías de la unión o unificadoras, tratando de superar el modelo “puro” de las teorías preventivas y retributivas aparecen las teorías mixtas o eclécticas. Hay de las que parten de una base retributiva pero arribando a finalidades preventivas y las de base preventiva que tienen como límite la retribución de la culpabilidad. Por otro lado, al interior de las teorías eclécticas cabe hacer mención especial a aquellas teorías que pretenden distinguir los diferentes fines atribuidos a la pena en base al momento de su operatividad (Silva, 1992)

La criminología crítica, sobre la base del “nuevo paradigma” considera que la conducta desviada ya no tiene un sustrato “real” u “ontológico”, sino “definitorial”. Se trata de una atribución a través de ciertos mecanismos y procedimientos sociales de “definición” y “selección”. El delincuente no es aquél que infringe la ley, sino sólo el que es etiquetado como tal por las instancias criminalizantes y adquiere dicho status.

Desde este enfoque el sistema penal resulta ser un instrumento que responde a una determinada ideología de poder, generador de desigualdad, con altísimos costos sociales, inútil e incapaz de resolver los problemas generados por la criminalidad. De ahí que el sector más radical de la criminología crítica (abolicionismo) haya propuesto su completa abolición (HULSMAN, MATHIENSEN, CHRISTIE). Otro sector de esta corriente, sin embargo, ha sido menos radical y reconociendo las críticas vertidas desde el abolicionismo ha propuesto una reducción del poder punitivo al mínimo postulando un derecho penal mínimo (BARATTA y FERRAJOLI).

No sería necesario indagar más sobre el significado del derecho penal y la pena para los abolicionistas, pues para ellos deben desaparecer. Por el contrario, nos interesa saber cuál es la justificación que los minimalistas atribuyen a la pena y al poder punitivo. A esta reflexiones nos vamos avocaremos en las siguientes líneas.

Por nuestra parte consideramos que, aunque estos autores no lo señalan expresamente, la pena (y el poder punitivo) es agnóstica y negativa en cuanto a las funciones y/o finalidades atribuidas por la doctrina mayoritaria. Sin embargo, útil (positiva) en el estado actual de nuestras sociedades, factor reconocido implícitamente por estos autores cuando optan por no renunciar al poder punitivo, sino por reducirlo hasta donde sea posible, atribuyéndole de esta manera una utilidad positiva. En otras palabras, desde una concepción agnóstica y negativa, la finalidad de la pena y del poder punitivo, no es renunciable, contrario sensu, todavía sirve para algo, y no precisamente en forma negativa,

sino como algo limitadamente útil: hacer tolerable la vida en sociedad. Sostener lo contrario llevaría a plantear inmediatamente la abolición del sistema penal (abolicionismo radical) sin esperar una sociedad diferente a la actual, cosa no propuesta por estos autores.

Por tanto, lo primero que debemos reconocer es que el poder punitivo no cumple en el plano real las funciones de prevenir los delitos o de resocializar al delincuente; antes bien los efectos son totalmente contrarios. En tal sentido, es recomendable una teoría agnóstica y negativa de la pena, liberadora de los mitos de las teorías preventivas.

En segundo lugar, tampoco podemos aceptar una pena con funciones sólo inocuizantes que concibe al ser humano como un enemigo social, pues perdería total legitimidad en un modelo de estado que pretenda ser democrático y de derecho.

En tercer lugar, debemos aceptar que el derecho penal sólo se justifica en la medida en que se encuentre limitado por los derechos humanos, y como mecanismo legítimo de defensa de estos mismos derechos, a falta de respuestas capaces de resolver los problemas sociales. En otras palabras, el poder punitivo es irrenunciable en la medida en que carecemos, por el momento, de otro instrumento menos lesivo de protección de los derechos humanos.

Finalmente, saber reconocer que en cuanto el derecho a la seguridad es un derecho humano, pero no en el sentido ideológico de las teorías preventivas de la pena que sólo beneficia a unos pocos afortunados, sino en el sentido de una teoría crítica de la sociedad, esto es, enfocando el derecho a la seguridad de nuestros derechos humanos y esta tutela no viene dada por la política criminal sino por una vasta política social y una absoluta desmitificación de la utilidad de la pena.

2.6. LA LEGITIMIDAD DENTRO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES

La policía estará entonces conforme a lo anterior estrechamente vinculada a la justicia penal, algunos de sus funciones por ejemplo será la prevención del delito. Lo expresado anteriormente es importante, asimismo, la policía como institución es una sola, la cual se encuentra dividida por tres esferas de gobierno y distintas esferas de competencia, la cual posee precisamente una preeminencia, para lograr determinar, en concreto los casos, ajustándose o no a los lineamientos normativos que se encuentran vigentes, sin embargo, cuando su accionar es netamente legítimo.

En consecuencia, es importante desde la perspectiva cualitativa, como aquella cultura policial que la identifica, su distribución organizacional, su realidad como institución, asimismo, el grado y la calidad que pueda existir en la relación con su comunidad, etc.

2.7. EL ROL DE LA POLICÍA EN EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

En la legitimad otorgada hacia los cuerpos de la policía se relaciona en totalmente con los derechos humanos, dado que son reconocidos en la constitución y en la demás leyes dentro de la justicia penal. Esto quiere decir, que si la policía actúa sin respetar los derechos humanos, incurriría en nulidad, afectando directamente el desarrollo del proceso penal, y de las investigaciones realizadas para el esclarecimiento de los hechos en un delito.

Después de la reforma constitucional en México y según los aportes de la nueva justicia penal, la actuación de la policía es estrictamente en apego al respeto de los derechos humanos, la constitución, y los principios de legalidad y dignidad humana. Por lo tanto se examinara los artículos del CNPP, en cuanto a la actuación de la policía.

Artículo 74.- En relación a la colaboración entre el Ministerio Público y la policía:

Los actos de colaboración entre el Ministerio Público o la Policía con autoridades federales o de alguna Entidad federativa, se sujetarán a lo previsto en la Constitución, en el presente Código, así como a las disposiciones contenidas en otras normas y convenios de colaboración que se hayan emitido o suscrito de conformidad con ésta.

En cuanto a la declaración del imputado, este tendrá derecho a declarar en cualquier etapa del procedimiento, lo podrá hacer ante el Ministerio Público o ante el Órgano jurisdiccional, con respeto a los derechos que lo amparan y en presencia de su Defensor. Cuando el imputado manifieste a la Policía su deseo de declarar sobre los hechos en indagación, ésta deberá comunicar la situación al Ministerio Público para que se haga de acuerdo a las formalidades previstas en el CNPP.

Artículo 132.- Obligaciones de la policía.

El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas; II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación; III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga; IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores. Especialmente estará obligada a realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos de los gobernados a quienes tiene la obligación de proteger; V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el

aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos; CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 17-06-2016 39 de 143 VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de cualquier persona, e inscribir inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto establezcan las disposiciones aplicables; VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del Ministerio Público; VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación aplicable; IX. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos, en los términos de la fracción anterior; X. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación; XI. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación. En caso de negativa, informará al Ministerio Público para que determine lo conducente; XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto, deberá: a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones aplicables; b) Informar

a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen; c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria, y d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica; XIII. Dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean instruidos; XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de informes periciales, y XV. Las demás que le confieran este Código y otras disposiciones aplicables.

El artículo anterior nos indica que la policía deberá actuar bajo el mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, entre otros. Tendrán las obligaciones de recibir las denuncias sobre los hechos que pudieran ser constitutivos de delito, la recepción de denuncias anónimas para inmediatamente hacerlo del conocimiento del MP.

Realizaran las detenciones en los casos autorizados por la Constitución, impedirán la consumación de los delitos, se encargaran del aseguramiento de los bienes relacionados con la investigación de los delitos, informaran sin dilación al ministerio público sobre la detención de cualquier persona, practicarán las inspecciones y mas actos de investigación además de reportar los resultados al MP.

Se encargaran de la resguardo y recolecta de los objetos en relación con la investigación de los delitos, entrevistarán a las personas

que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación, entre otras obligaciones, todo esto para el efecto de apoyar en todos los aspectos que resulten necesarios en beneficio al esclarecimiento de los hechos, siempre apegados a los principios anteriormente mencionados.

Respecto a la ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión el artículo 145 dice lo siguiente:

La orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de la Policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma.

Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de imputación. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para tales efectos.

La Policía deberá informar al Ministerio Público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma. Cuando por cualquier razón la Policía no pudiera ejecutar la orden de comparecencia, deberá informarlo al Juez de control y al Ministerio Público, en la fecha y hora señaladas para celebración de la audiencia inicial.

En cuanto al registro de los actos de investigación el artículo 217 plantea lo siguiente:

Registro de los actos de investigación El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieran derecho a exigirlo.

El capítulo II, título tercero hace referencia a las etapas de la investigación. Este artículo 221 obliga a los efectivos a iniciar la investigación de los hechos que se le han notificado:

La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querrela o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia.

Tratándose de informaciones anónimas, la Policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que consideren conducentes para este efecto. De confirmarse la información, se iniciará la investigación correspondiente.

El Título V actos de investigación, Capítulo II actos de investigación en su artículo 268 trata sobre la inspección de personas:

En la investigación de los delitos, la Policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia, o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. La revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones. Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo requerirá autorización judicial. Antes de cualquier inspección, la Policía deberá informar a la persona del motivo de dicha revisión, respetando en todo momento su dignidad.

Por lo tanto, todo lo que se ha venido desarrollando en los artículos anteriores como la parte más importante de la acción policial, está direccionada al trabajo dentro del proceso penal de forma inquebrantable con respeto y dignidad humana. Por consiguiente, todo accionar policial debe estar sujeto a la legitimidad y legalidad, en el marco de los derechos fundamentales de toda persona, asimismo, todo lo contrario, sería ilegal, no legítimo y por lo tanto vulneraría los derechos humanos.

CAPÍTULO III

ALCANCES GENERALES: POLICÍA FRENTE A LOS DESAFÍOS DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO

3.1. REALIDAD POLICIAL

La labor policial en realidad es complicada, pues los estudios han ayudado que se logre presentar un panorama de menos consistencia y de una realidad muy escasa en la esfera policial. Pues, esto nos conlleva a la reflexionar, cuando especialmente la situación de fondo en base a las limitaciones que poseen y las oportunidades para un mejor desarrollo de la policía en base a un modelo más democrático y eficiente, ante ello es indispensable un buen modelo policial.

La terminología de policía, designado por una entidad u organización de un determinado grupo social se evoca a la intervención de un mejor control de manera formal. Asimismo, es de suma importancia lograr poner en conocimiento que institución y función son connotaciones diferentes. Por lo tanto, policía y otra connotación es distinta a la acción policial; desde ese aspecto la funcionabilidad pareciera que antecede a dicho órgano. Frente a todo ello la interrogante sería: ¿Cuál es la función y la tarea de un policía?, lo más cercado como respuesta a la interrogante podría ser: que policial son aquellos que realizan variadas funciones, lo que vendría a ser en la práctica real una pluralidad de diligencias.

En base a los integrantes que posiblemente podrían dar vestigios de una mejor explicación sobre la materia, se puede tomar en cuenta ambas visiones que proyectan una realidad dividida y de la cual se requiere que exista relación en base a la identidad y la función en su esencia como tal, sin embargo, ante ello nos formulamos las siguientes interrogantes: ¿Qué es una institución policial? y ¿Cuál es la esencia de su función? ¿Y qué se hace para que cumpla su función?

3.2. PREVENCIÓN DEL DELITO

En términos generales para referirnos sobre la prevención del delito, es aquel accionar que se enfoca en disminuir al máximo la amenaza, teniendo en cuenta el riesgo que se pueda generar y que por medio de las oportunidades que presente el delito cuando se materialice a través de la individualización y la supresión de las causas, de los principios de oportunidad y las situaciones sociales que logren permitir que dicha delincuencia se extienda y se fortalezca.

Asimismo, los especialistas sobre el tema han señalado que el accionar de para poder prevenir el delito, deben ser muy específicas y deben estar dirigidas a los delitos que son de suma importancia por intermedio de la aplicación de un sistema permanente que se basa en situaciones claras sobre situaciones de colaboración en conjunto en los distintos organismos (FERRAJOLI, 1995).

Es de suma importancia indicar que no puede existir una forma única de estrategia para lograr prevenir el delito, ya que existen diversos enfoques susceptibles a debate desde se tomaron medidas estratégicas sobre seguridad tomaron fuerza desde los años 60. Sin embargo, al tener que investigar las propuestas principales sobre prevención del delito, tanto en las organizaciones internacionales y las académicas, al igual que algunas entidades gubernamentales, quienes son los fundadores sobre este tema, pudiendo de esa manera lograr identificar los elementos y mecanismos análogos que logren dar como resultado, asimismo, poder comprender los principios los principios básicos y necesarios de la prevención del delito.

A pesar de todo ello se debe identificar las distintas áreas sobre la vigilancia de la prevención de un delito, pues de forma común, todos ellos llevan a cabo desde su jurisdicción local y procuran poder identificar y de esa manera eliminar los factores de sean susceptibles de riesgo, los elementos sobre el principio de oportunidad y las condiciones que acrediten que el delito coexista desde la parte individual o comunitario.

Por lo tanto, una adecuada estrategia será más eficiente para lograr obtener mejores resultados al combinar los elementos. Lo que antecede este sujeto a la capacidad económica, social de una determinada localidad, implementando variables importantes para que de esa manera poder tomar en cuenta un buen diseño de políticas.

3.2.1. La Prevención Del Delito Como Uno De Los Roles Principales De La Policía

Como se viene explicando sobre la adecuada función y labores elementales de la Policía moderna, pues, son vigentes desde mediados del siglo XIX y giran en base al torno a la inspección del delito durante las dos primeras décadas del siglo XX. Asimismo, en esta época ya se venía protegiendo en los Estados Unidos un modelo policial profesional e independiente con una mínima intervención de la estructura local, y de esa manera poder evitar habilidades corruptas.

El modelo tradicional o estándar de la policía vigente en México aún, eran defendidos por los reformistas policiales de aquella época, la cual deben apoyar la legitimidad de la Ley Penal y el ideal de la profesionalización de dicha función. De esa manera, se ha venido plasmando en las principales normas que han creado y organizado a las diferentes instituciones de la policía en nuestra sociedad.

En la normativa sobre la prevención del delito, se ha constituido como una labor de Gobierno de forma administrativa por parte del Estado, asimismo, la investigación sobre los delitos es una tarea policial la cual se desempeña por debajo de la dirección de las autoridades judiciales que son competentes. En consecuencia, mantener la orden pública también es función de la policial central, teniendo en cuenta, que esta es una tarea de

prevención del delito y conspiración de desorden sobre hechos de violencia sobre la paz social.

Regularmente, el cuerpo Policiaco toma el control en las actividades preventivas a la disuasión, comprenden ésta como la actividad de convencer a desistir a una persona o grupo de personas, de realizar una acción. Empero, esta figura, no promete una difusión preventiva o represiva policial, por el hecho de que el principal motivo por el que funcione, es porque no hay delitos que prevenir. Y no por la inmediata reacción de la policía ante esas situaciones. La prevención, se funda en las tareas o actividades que realiza la policía con la finalidad de evitar o impedir la posible acción de un delito; además de obstaculizar la formación de actos o hechos que, dadas las circunstancias, pudiesen resultar delictivas.

Esto, se origina cuando se implique un riesgo o peligro indudable, una serie de labores disuasorias inmediatas o directas en las que implique un riesgo o peligro indudable, que se dirigen estrictamente a la prevención. Además, puede implicar labores para contrarrestar la posible realización de un delito, a través de la precaución indirecta.

Del mismo modo, las labores de la Policía, también abarcan la neutralización inmediata un acto delictivo que se está desarrollando, tratando de evitar, de esa forma, daños colaterales a futuro. Asegurando a los delincuentes, mediante tal prevención.

Las diferentes modalidades de patrullaje, las cuales abarcan desde andar en automóvil hasta andar a caballo, en la zona que se le confirió para su protección, son los principales caracteres que constituye al cuerpo policial preventivo. En cierto aspecto, estas acciones son desarrolladas en base al criterio del policía, sin necesidad de recurrir a los lineamientos preestablecidos; gozando del libre albedrio de la aplicación de los mismos actos que él considere correcto, sin que se le cuestione el porqué de sus decisiones. Desde otro punto, los Policías en base a la experiencia laboral y cívica, desarrollan una minuciosa habilidad para planificar estrategias y tácticas para lidiar con la problemática delictiva, dándole un enfoque más asertivo a la prevención.

En el campo laboral, el objetivo principal de la prevención son los delitos de vándalos, es decir, un pequeño grupo de eventos delictivos que cuentan con ciertas similitudes por su razón de ser. Regularmente, estos eventos se desarrollan en espacios públicos, además de ser fáciles de identificar; demuestran violencia de manera brutal; además, de ser muy aparatoso ante el público y la víctima, y tienen una regularidad en los lugares en que suceden.

Entre los actos que más destacan están los asaltos, los robos y las actividades de rapiña; las lesiones; el vandalismo; los homicidios dolosos cometidos en la vía pública; la piratería; los ataques sexuales y los secuestros.

La prevención policiaca en este tipo de eventos, no se basa en las condiciones sociales que llevaron a que se causara este problema, sino que, se busca remediar estos conflictos con la mera presencia o acción inmediata de la policía, o de las estrategias policiacas.

Las posibilidades de que la prevención Policiaca, produzca efectos y cambios en la sociedad en la cual se determina un delito por las diferentes condiciones (económicas, políticas, sociales, culturales, etc.), en la que regularmente interviene, es muy escasa y en ocasiones imposible. La necesidad de direccionar las tareas policiales, con la finalidad de actuar en contra de aquellas condiciones, pareciera inocente ante la evidencia del marco histórico-social, debido a que las expresiones del delito se derivan de esas condiciones, que la policía común no puede abordar.

La actuación preventiva de la policía, como toda modalidad específica, es parcial y selectiva. Es parcial porque no abarca todas las problemáticas. Y selectiva porque, en base a la experiencia, se construyó un delincuente base, sobre el cual se puede trabajar, además, de estandarizar los delitos que se pueden atender, es decir, recae solo sobre aspectos específicos, como territorio, tipo de delito, o ciertas personas.

Sin embargo, las actividades policiacas no resultan del todo aptas para conocer el campo orgánico criminal, así como la metodología de trabajo de organizaciones políticas-criminales. Las consecuencias de un cuerpo Policial, no competente, buscan

prevenir o interrumpir las actividades que busca desarrollar un grupo delictivo, que se compone de tres a más personas, la cual su meta es realizar uno o más delitos graves. Buscando obtener, de estos, un beneficio directo o indirecto; así como lograr hacer que una autoridad local o internacional, que realice o se abstenga de realizar actos para intimidar a una población; o atentar contra los poderes públicos.

Desde esta perspectiva y tomando en cuenta las actividades delictivas, el actuar de la policía debe ir encaminado en el mismo sendero de evolución, es decir, a través de la producción de inteligencia se puede brindar un seguimiento más puntual y efectivo a los diferentes grupos delictivos y emprender líneas avanzadas de investigación para lograr su desarticulación.

Entre las principales actividades de alto impacto que desarrollan los diferentes grupos criminales, se encuentra el tráfico y la comercialización de drogas ilegales, también destaca el tráfico de armas, robo y desarme de automóviles, venta ilegal de autopartes, pero en los últimos años ha ido incrementando un rubro, el tráfico de personas, el secuestro y el tráfico de órganos.

Siguiendo esta línea de ideas, es oportuno distinguir los tipos de modalidad de la criminalidad, es decir; criminalidad organizada y criminalidad política, no se puede hablar de una y dejar fuera a la otra porque las dos van de la mano, para ser más específicos, no se puede dar la criminalidad organizada operativa, si no está como su nombre lo dice, organizada en las altas

esferas políticas, ya que en la operatividad, la finalidad de la delincuencia organizada abarca las acciones delictivas cometidas por un grupo delictivo organizado con el propósito excluyente de obtener directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

Siempre bajo el manto y protección de políticos y grandes empresarios, por otro lado, la criminalidad política, que comprende las acciones cometidas por un grupo delictivo organizado con el propósito predominante de practicar el terrorismo o atentar contra el orden constitucional o los poderes públicos también deben ser atendidas de manera específica y especializada, pero realizando un análisis, siempre se enfoca la investigación en la cabeza operativa de la criminalidad, y nunca en la cabeza de mando, es decir, nunca se apunta a las esferas políticas que pudiesen encontrarse detrás de un grupo criminal organizado.

Retomando el actuar de la policía, supone acciones de inteligencia enfocados a neutralizar y desarticular el actuar organizado mediante operaciones policiales estratégicas de inteligencia, muchas veces en conjunto con corporaciones policiales extranjeras, federales o estatales.

3.3. EL ROL PRINCIPAL DE POLICÍA: GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO

Como ya se mencionaba en líneas anteriores, el rol de la policía siempre se ha identificado como un represor del delito, más allá de ser un rol preventivo, pero si la policía tiene la tarea de mantener el orden público también debiese conllevar en su rol una esquematización preventiva a corto, mediano y largo plazo, en labores orientadas a prevenir el delito mientras se hacen acciones de contención del mismo en las calles con el objetivo de tener una armonía social y bajos índices delincuenciales.

Siguiendo esta línea de ideas hoy en día la situación y visión de las diferentes corporaciones policiales es diferente, del mantenimiento del orden público la institución policial está básicamente orientada a prevenir, neutralizar y conjurar cualquier tipo de hecho, falta o comportamiento que obstruya, limite o cercene la paz social y la libertad personal o que vulnere la situación de seguridad de las personas, todo esto con la profesionalización de la policía en diferentes rubros, para garantizar en todo momento el debido proceso y el respeto a los derechos y dignidad humana.

En todo momento con la labor a nivel federal de profesionalizar a la policía, este conjunto de labores es desarrollado con mayor capacidad y responsabilidad, devolviendo sensibilidad y confianza de la ciudadanía en el actual policiaco, conllevan acciones coercitivas para tener resultados positivos y de mayor impacto social. La profesionalización a la luz de los nuevos paradigmas y necesidades que

surgen en el rubro de la seguridad es todo un logro para el monitoreo en el actuar de la misma y disminuir la colusión con el crimen organizado en base a los diferentes controles de vanguardia que se aplican al interior de las corporaciones.

Al respecto se ha pronunciado el profesor GOLDSTEINHERMAN afirmando que; algunos fenómenos de masa, tanto los

Del delito en todas sus modalidades, para garantizar la paz social bajo el mandato constitucional de la protección de los derechos humanos, todo esto conlleva una canalización de las numerosas labores de la policía como el poder de aprehender debidamente después de la ejecución de un delito.

Finalmente, la programados como los de naturaleza espontánea, exigen un monitoreo de la policía. Lo más importante es controlar multitudes en estadios incipientes de desorden. El fantasma de la violencia de las turbas frecuentemente exigen medidas que envuelven coerción, inclusive el uso de la fuerza física (GOLDSTEIN, 1998).

Algunas de estas labores policiales suponen intervenciones puntuales ante las diferentes disputas y controversias que pudiesen surgir, también se requiere de cierto nivel de profesionalización para dar control y seguimiento a las diferentes situaciones de bajo impacto que surgen en vecindarios o grupos pequeños.

No obstante, otras tantas tareas desempeñadas por la Policía son ajenas al núcleo duro de las actividades policiales, es decir, al crimen organizado, pero hay que dar un giro y voltear a ver por qué de tanta

gente involucrada en las filas de las diferentes organizaciones criminales, ese es el punto fuerte de la prevención del delito, y así como ocupa gran parte del trabajo las acciones de inteligencia para combatir a las grandes organizaciones, también se ponen en marcha programas de trabajo continuo en conjunto con la comunidad para acciones de prevención en zonas previamente detectadas como conflictivas, y en las que no lo son también (DUCE & GONZÁLEZ, 3).

Del mismo modo, a través de la profesionalización se busca tener una policía más sensible a las problemáticas de los nuevos tiempos, con capacidad de acción, contención y prevención; además, que la profesionalización de los cuerpos policiales es indispensable para atender todas estas situaciones que se presentan cotidianamente y atender a las diferentes personas que requieran atención, como ya se mencionaba en líneas anteriores, hoy en día la policía necesita lidiar con enfermos mentales, personas que tal vez no hablan español, etc., y es ahí donde el actuar profesional de la policía, el debido proceso y no discriminación entran al servicio de la sociedad.

Con todo esto se busca tener un impacto social en todos los niveles, y del mismo modo brindar atención a todos y cada uno de los sectores de la población, tanto en las grandes esferas como en las comunidades de más escasos recursos, a través de la profesionalización de la policía, se podrá tener una red de inteligencia policial más eficaz y capacitada para atender necesidades de alto impacto e incluso de seguridad nacional, pero sin dejar de lado las necesidades y conflictos cotidianos que surgen en la sociedad, así como el control de los

elementos y lo más importante la capacitación continua que la profesionalización implica, garantizando en todo momento el orden público, el respeto a los derechos humanos, y el actuar correcto para el debido proceso.

3.4. REFORMA PROCESAL PENAL

Con motivo de la ineficiencia que se vivía en la República Mexicana en la impartición de justicia, antes de la entrada de vigor del sistema penal acusatorio, debido a que la aplicación de justicia para los mexicanos en el sistema denominado inquisitivo, se tornó obsoleto e ineficaz, fue necesario quitar de raíz el sistema penal mexicano y verse en la necesidad de cambiarlo totalmente para sustituirlo por el nuevo sistema penal acusatorio, reformas que fueron surgiendo de manera gradual y que se vieron aterrizadas en el año 2008, para empezar con un nuevo sistema de justicia, en aras de una mejor impartición de justicia en beneficio de la totalidad de las personas que se encuentra en territorio nacional, para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y lo más importante garantizarlas por el estado a nivel nacional e internacional en los que el estado sea parte de los tratados internacionales, haciéndose vinculante y por lo tanto ampliando los derechos humanos de manera gradual.

Con motivo de las reformas en los estados de la república mexicana, se pudo implementar el sistema penal de corte acusatorio a nivel estatal y nacional, para la impartición de justicia de manera eficiente, y evitar tanta trasgresión a los derechos humanos.

Finalmente el 18 de junio de 2008 se publicó la reforma constitucional penal a efecto de incorporar el sistema acusatorio y oral para la delincuencia común, sustentado en la garantía de presunción de inocencia, en virtud de lo cual se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha provocado una obligación al cambio de mentalidad y sobre todo, de actuación de los intervinientes en el sistema de justicia mexicano. Mediante la reforma constitucional, el procedimiento penal transita del procedimiento semi-inquisitorio al acusatorio y oral, cuyos principios (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación) recoge el artículo 20 constitucional.

Estar dentro del proceso de justicia penal implica una obligación al cambio de mentalidad y sobre todo, de actuación de los intervinientes en el sistema de justicia mexicano. La envergadura de la reforma constitucional en materia penal representa no sólo un hito en los sistemas de procuración e impartición de justicia, sino un verdadero cambio de paradigma que todos los actores que conforman un Estado democrático de Derecho que debemos asumir con responsabilidad y compromiso.

Dentro de los operadores del sistema penal acusatorio, existe un grupo que tiene especial e importante relevancia, los cuerpos policiales y en general los elementos involucrados en detenciones, es decir, tránsito, soldados, marinos, policías municipales, estatales,

ministeriales, etc. Esto, sin dejar de lado a los jueces, defensores y ministerios públicos, creemos que es parte fundamental del cambio que se pretende llevar a cabo.

El modelo de policía, afirma, ACERO HUGO, en América Latina, en especial en los países donde se vienen aplicando reformas, tendrá tendencia al fracaso, mientras no sea intensivo en mano de obra mal calificada. Y en el que el Policía es concebido como un servidor público intercambiable, que hoy puede hacer patrullaje, mañana intervenir en situaciones de crisis (ACERO, 2005).

Y es que lo que se busca en el nuevo proceso penal, es que en todo momento se cuide los derechos de toda persona, entre ellos, el principio de presunción de inocencia.

Se puede analizar los fundamentos legales de la presunción de inocencia, con lo vinculado a las pruebas que en cuanto al proceso penal se refiere, son presentadas por el Ministerio público para manifestar la culpabilidad del acusado. Pues bien, si bien es cierto que los implicados dentro del proceso penal, excluyendo la etapa de investigación, la cual es conducida en la totalidad por el Ministerio Público, los implicados contarán con igualdad procesal para mantener la acusación o bien la defensa.

Entonces si la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, entonces pareciera que tenemos un conflicto procesal ya que no existe igualdad entre las partes del proceso, sino únicamente igualdad procesal para sostener o no la acusación, pero en este caso, como le el encargado es el Agente del Ministerio Público el allegarse de

todos los datos probatorios (durante la parte de investigación) y medios de prueba (durante la fase intermedia) y convertirlos en prueba (durante la etapa de juicio) a efecto de demostrar la culpabilidad del acusado en el hecho delictivo, es así como se dará por aceptado para los efectos de esta investigación, sin necesidad de abundar en el tema por no constituir el eje central de esta investigación.

Una causa de análisis es el hecho desde que posición pueda ser considerable que un denunciante, o el defensor, asigne un medio de prueba donde se puedan exponer los resultados desfavorables para su propósito, lo que representan temas de análisis a profundidad por individual, ya que se pretende demostrar la culpabilidad del inculcado, este deberá encontrarse en absolución, pues quien tiene una carga importante en el proceso penal es el denunciante, pues el imputado cuenta con el derecho de presumir su inocencia hasta que se demuestre lo contrario, pues él también tiene la capacidad de presentar pruebas a diferencia del denunciante, quien debe ofrecer tanto pruebas en contra, como a favor del procesado, el imputado tiene derecho a no inculparse, lo que justifica que está exento de aportar las pruebas que lo inculcan.

En la declaración *Universal de los DD.HH* en el Art. 11.1 manifiesta, que cualquier sujeto que está señalada como actor de un delito, es digna de poder presumir su inocencia, en cuanto no se pruebe lo contrario, conforme a la ley en los juicios públicos, asegurando las garantías básicas para la defensa.

El *Convenio Europeo de DD.HH* al establecer en el Art. 6.2 que cualquier sujeto señalada por cometer una transgresión se presumirá su inocencia hasta que sea declarado lo contrario legalmente.

El Pacto Internacional de *Derechos Civiles y Políticos* en el Art. 14.2, al igual que la vigente *Constitución Española* proclama en su artículo 24.2 que todos tienen derecho a presumirse inocente y que los acusadores, con sus debidas pruebas a proponer, que el tribunal de cualquier instancia, cree una convicción que fortalezca la presunción de inocencia.

Artículo 20, apartado B, fracción I de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* establece que uno de los derechos de toda persona señalada como culpable es que se presuma su inocencia en cuanto no se declare lo contrario, es decir su responsabilidad por medio de sentencia emitida por el juez de la causa.

Artículo 13 del *Código Nacional de Procedimientos Penales* determina el Principio de presunción de inocencia, el cual textualmente establece que:

“Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.”

Por su parte, la *Suprema Corte de Justicia de la Nación* ha establecido: para la Corte el derecho a la presunción de inocencia tiene varios axiomas, debido a sus múltiples manifestaciones, que armoniza el sistema de justicia penal. Siendo un estándar fundamental en la prueba

o también una manifestación en el juicio, al momento que el juez tome una decisión, lo anterior debido a que cuando no se rompe la presunción de inocencia los jueces están en la obligación de dejar en libertad a quien esté sometido a proceso. (Nacion, 2014).

Los órganos Colegiados consideran la presunción de inocencia, con múltiples relaciones de garantías para regular las bases del proceso penal.

Existen ciertos elementos que deben de tener los medios de prueba, para hacerlos válidos y así no echar por la borda el concepto de una presunción de inocencia, la cual toda persona cuenta con ella. A esta prueba también se le puede conocer como "regla probatoria".

Recalca la *Primera Sala* que el concepto de presunción de inocencia, tiene diversos puntos que están relacionadas las garantías con algunos aspectos en los procedimientos penales. A una de estas vertientes, se le puede conocer como "regla de trato procesal" del imputado, esto es mientras que la prorroga este en curso se deberá tratar al individuo mientras se encuentre dentro de un procedimiento penal. Como se ha mencionado con anterioridad, la presunción de inocencia la tiene cualquier individuo, puesto que debe ser tratado como inocente esto mientras no haya una culpabilidad probada ya por una sentencia. Esto hace que los jueces impidan la ejecución de algunas medidas que tengan que ver con el imputado y el culpable, es decir, que no se lleva a cabo una resolución si tienen elementos que ver con la anticipación de la pena.

De lo antes hablado, podemos concluir que el *principio de presunción* de inocencia es, por regla general, aplicable en el procedimiento penal y constituye uno de los primordiales derechos del imputado de acuerdo a nuestra Ley Suprema, dentro del cual la persona sometida a proceso penal será inocente hasta que no se compruebe su responsabilidad en el hecho delictivo y sea declarado culpable mediante la sentencia definitiva, recordaremos que la carga de la prueba será para él agente del Ministerio Público, en consecuencia, el representante social deberá velar por no violentar los derechos que el ordenamiento supremo del país le otorga al presunto responsable del hecho delictivo y del cual su alcance trascienda toda la esfera que comprende el debido proceso y es que la protección de este derecho, garantiza de forma eficaz otros derechos como lo es la dignidad humana. Al vulnerarse la dignidad humana automáticamente se lesionarían otros derechos de los cuales bajo ningún supuesto en un Estado constitucional de derecho se debe aceptar (Anguiano, 2012).

Para concluir con la teoría concebida fue necesario tomar en cuenta el proceso penal, ya que lectura del precepto constitucional adquiere como propósito establecer la presunción de inocencia como parte del *Derecho Constitucional* de los acusados dentro del proceso penal actual; es necesario señalar las acciones procesales a la ejecución de una norma o ley penal, donde dan características sobre los delitos graves y así poderlos sancionar en base al Código.

Por otro lado, la presunción de inocencia implica que no se podrá sancionar al inculcado en tanto no existan los elementos suficientes para

acreditar su participación en el hecho delictivo que se le imputa y en caso de duda por parte del juzgador se aplicará el principio *indubio pro reo*; dictándose la sentencia respectiva dejando en libertad por no acreditarse su responsabilidad y lejos de ser parte de un principio del Derecho, representa una garantía procesal irrompible, que le brinda seguridad jurídica, siendo esta la que le permite ser considerada inocente durante todo el proceso.

CAPITULO IV

ALCANCES DE LA POLICÍA DENTRO DE LAS REFORMAS EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO

4.1. ALCANCES GENERALES

Previo a la *Reforma Constitucional del año 2008*, dentro de las funciones principales de la policía, en lo que se refiere a la investigación del delito, esta contribuía como auxiliar del Ministerio Público, llevando a cabo solo las diligencias que eran solicitadas por el mismo, sin tener responsabilidad directa u obligatoria para llevar a cabo su realización. Durante el proceso de realización de cualquiera de estas funciones, existieron errores, negligencias y omisiones, que afectarán y pondrán en riesgo algunas de las investigaciones efectuadas, dando paso a una negligencia del proceso y teniendo como consecuencias el truncamiento del avance de la misma, o bien dejándola inconclusa, por el hecho de no contar con los conocimientos y capacitación necesaria.

En el año 2008, se llevó a cabo una reforma muy importante en materia de Seguridad Pública y Justicia Penal, siendo esta tipificada en el artículo 21º, el cual menciona lo siguiente *“La investigación de los delitos, corresponde al Ministerio Público y a las Policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”*, en conclusión, es una responsabilidad conjunta con el Ministerio Público.

Debido a esto las policías se encontraron en un enfoque completamente nuevo para ellos, ya que es de suma importancia que cuenten con los conocimientos adecuados, es decir, conocer la metodología que se debe de realizar desde el momento de la noticia de un presunto hecho, hasta que se entreguen los indicios recolectados en el lugar de los hechos para traslado al laboratorio.

Es decir, que para desempeñar estas nuevas acciones se debe contar con una Policía Científica, la cual a través de la aplicación de las ciencias y técnicas correspondientes pueda satisfactoriamente cumplir con el objeto del proceso penal establecido en el *Artículo 20, inciso A, fracción I: “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”*.

Conociendo entonces lo anterior, me dedique a llevar a cabo un análisis e investigación de las funciones que realiza nuestra policía, mediante el estudio de leyes (Constitución, Reglamentos y Códigos de la materia), a lo que según mi perspectiva, la correcta aplicación del Protocolo de Cadena de Custodia, así como al mismo tiempo realizando una comparativa entre funciones establecidas a la Policía Federal, Estatal y Municipal (Seguridad Pública) y la Policía Ministerial (Investigación científica del delito).

Todo esto con el fin de que esta investigación apoye el cambio de visión acerca de los conocimientos con los que debe contar la Policía para el adecuado desarrollo de su nuevo Rol dentro del Sistema Penal Acusatorio.

Debido a esto, según lo menciona, HERRERA ARTURO:

“la Policía como organización, es una institución clave en la prevención del delito, el mantenimiento del orden público, investigación y combate del crimen. El éxito de cualquier reforma en el ámbito jurídico dependerá de gran forma en

que se cuente con organizaciones policiales modernas, altamente capacitadas y respetuosas de la legalidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. A pesar de su importancia para el mantenimiento de la estabilidad social, la Policía ha sido un actor poco estudiado y analizado”.
(HERRERA, 2006)

Durante décadas algo características en los policías, orientado en la función como accesorio del sistema penal, separados de las funciones cercanas a los ciudadanos, prevenir, la intervenir en los problemas sociales. Su orientación se ha acrecentado por la inseguridad y al amparo de un discurso oficial de urgencia. La sensatez de los ciudadanos y los políticos es lamentable ya que acuden a la exigencia de un control y tolerancia sobre la represión.

Afirma GREENE que:

“Alrededor de un promedio del 15% en sociedades con un sistema democrático sus actividades elaboradas por la policía le pertenece aquellas diligencia para luchar contra la criminalidad; en su mayoría las actividades que se realizan deben estar relacionar a la atención y orientación al ciudadano, un mapa sobre los hechos delictivos, diseñar patrullajes relacionado a la participación con el ciudadano, accionar preventivo, enfocándose de manera particular direccionado hacia los grupos que son vulnerables”.

(GREENE, 2006)

La política social sobre la prevención de conflicto social, es una forma muy importante sobre conflictos sociales donde se tienen que ver cuáles son las circunstancias sociales y económicas de una colectividad.

Para ello afirma SILVA PALOMO, que:

“Se debe plantear un apropiado mapeo donde se producen los problemas sociales la cual admite que se desarrolle una un trabajo eficiente sobre prevención siendo esta eficaz y con menos costos que los medios reactivos y punibles como resultado al aumento de violencia en los conflictos”.

(SILVA PALOMO, 2007)

Afirma LEA, que:

“El resultado sobre la opinión ciudadana por medio de encuestas en zonas urbanas, siendo un fenómeno inquietante para los ciudadanos, el aumento de grupos de jóvenes que toman posesión de espacios públicos y que posteriormente se crean como pandillas, peleas por territorios. Estos sucesos mayormente tienen que ver por la escasez de oportunidades para acceder a escuelas o centros laborales, así como la falta de espacios donde pueda convivirse de mejor manera por medio del deporte o actividades culturales. Programas sociales como estos, han tenido un éxito, pues se ha logrado recuperar los lugares públicos y de esa manera se ha mejorado la calidad de vida en zonas marginales”. (LEA, 2006)

El trabajo local de las autoridades en este tipo de accionar preventivo no tiene un valor calculable en mejorar la seguridad para dar una calidad de vida a las comunidades. La policía es ahora la imagen más cercana que tiene del Estado ya que por intermedio de ella se puede desarrollar considerables contribuciones y por la misma presencia no centralizada en toda la geografía del territorio mexicano, se puede recibir reportes y poder descubrir la escasez y anomalías en la infraestructura, sobre los servicios y en todo el entorno espacial de las colectividades.

Por consiguiente, se pide que la policía como institución, se encuentre capacitada y especializada de acuerdo a lo prescrito en el Art. 79° de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se establece claramente la especialización y profesionalización de la policía.

4.2. MARCO LEGAL DE LA POLICÍA EN EL SISTEMA MEXICANO

Este tema le corresponde en consideración que el presente trabajo se relaciona a las Potestades Otorgadas a la Policía en la Fase de Investigación en base al Sistema Penal Acusatorio en México, es necesario establecer las Leyes y Códigos que fundamentan dichas facultades.

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El punto de partida de la presente investigación, lo establece nuestra Carta Magna en su Artículo 21.

“Artículo 21°. La investigación de los delitos correspondientes al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función.”

b) Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

En su Artículo 1° esta ley establece lo siguiente:

“En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Art. 21° que regula en materia de Seguridad Pública, tiene como finalidad integrar, organizar y velar por la parte funcional Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como instaurar expandir las competencias, las bases de relación de la Federación en conjunto con los Estados, el Distrito Federal y los municipios en esta materia.”

Los Artículos 40° y 41° establecen las obligaciones que deben cumplir los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

Están son algunas de ellas:

“Artículo 40°.

I...

X...Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias;

XI... Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptadas por las instituciones de seguridad pública;

XII... Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Publica, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a correspondiente...”

En su Artículo 41° menciona:

“I. Registrar en el informe policial Homologado los datos de las actividades o investigaciones que realice;

II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Así mismo, entregar la información que le sea solicitada por otras instituciones de Seguridad Publica, en los términos de las leyes correspondientes...”

c) Ley de la Policía Federal

En su Artículo 1° establece su objetivo:

“La presente Ley es reglamentaria del artículo 21° constitucional, en materia federal en lo relativo a la organización y funcionamiento de la Policía Federal, en el ámbito de competencia que establece esta ley y las disposiciones aplicables. Es de orden público y de la aplicación en todo territorio nacional. ”

Así mismo en su Artículo 2°, establece los objetivos de la policía federal:

“La Policía Federal es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, y sus objetivos serán los siguientes:

I...

IV. Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la federación, en términos de las disposiciones aplicables. ”

El Artículo 8°. Establece las Atribuciones y Obligaciones de la policía federal. Estas son algunas de ellas:

“I...

IX. Realizar bajo la conducción y mando del Ministerio Público las investigaciones de los delitos cometidos, así como las actuaciones que le instruya este o la autoridad jurisdiccional conforme a las normas aplicables;

X... Informar a la persona al momento de su detención sobre los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XI... Poner a disposición sin demora de las autoridades competentes, a personas y bienes en los casos en que por motivo de sus funciones practique alguna detención o lleve a cabo algún aseguramiento de bienes, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos...”

d) Código Federal de Procedimientos Penales

En el Artículo 3° establece las obligaciones de las policías en término del art. 21° Constitucional.

El Artículo 123° Ter. Refiere lo siguiente:

“Cuando las unidades de la policía facultadas para la preservación del lugar de los hechos descubran indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, en el lugar de los hechos, deberán:

I. informar de inmediato por cualquier medio eficaz y sin demora alguna al Ministerio Público e indicarle que se ha iniciado las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, para efectos de la conducción y mando de este respecto de la investigación;

II. identificar los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. En todo caso, los describirán y fijarán minuciosamente;

III. Recolectar, levantar, embalar técnicamente y etiquetar los indicios, huellas o vestigios de los hechos delictuosos, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Deberán describir la forma en que se haya realizado la recolección y levantamiento respectivos, así como las medidas tomadas para asegurar la integridad de los mismos, y

IV. Entregar al Ministerio Público todos los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, sus respectivos contenedores y las actas, parte policiales o documentos donde se haya hecho constancia de su estado original y de lo dispuesto en las fracciones anteriores para efectos de la averiguación y la práctica de las diligencias periciales que este ordene. En dichos documentos deberán constar la firma autógrafa de los servidores públicos que intervinieron en el procedimiento.”

e) Código Procesal Penal del Estado de Nuevo León.

El Artículo 1º refiere el objeto del Proceso:

“El proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, garantizar la justicia en un marco de respeto a los derechos fundamentales: determinar si se ha cometido un delito: proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.”

A sí mismo el Artículo 128º hace referencia sobre los lineamientos de actuación que desempeña los cuerpos de Seguridad Pública, tales como: detenciones en flagrancia, identificar, detener o aprehender por mandato del ministerial o judicial a los imputados, etcétera.

También se hace mención de algunos de los lineamientos a seguir de la Policía Ministerial los cuales se mencionan dentro del artículo 129 son:

“I. Recibir noticias de os hechos presuntamente constitutivos dl delito y recopilar información sobre los mismos. En estos casos la policía deberá informar al Ministerio Publico inmediatamente;

II. cuando la información provenga de una fuente no identificada, el agente de policía que la reciba tendrá la obligación de confirmarla y hacerla constar en un registro a tales fines, en el que se asentaran el día, hora, el medio y los datos del servidor público interviniente;

III. Prestar auxilio que requieran las víctimas y proteger a los testigos;

IV. Cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados. Para este efecto, impedirán el acceso a toda persona ajena a las diligencias de recopilación de información y procederá a su clausura, si se trata de local cerrado, o a su aislamiento si se trata de un lugar abierto; evitara que se alteren o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho o se remuevan los instrumentos usados para llevarlos a cabo, mientras no intervenga personal experto cuando sea necesario;

V. entrevistar a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad y a las personas probablemente involucradas en el hecho, previa lectura de sus derechos y cumplimientos los requisito de las diligencias policiales efectuadas; para tales efectos, la policía, en la medida de lo posible, se cerciorara de la identidad del testigo y recabaran la firma del mismo;

VI. Practicar las diligencias orientados a la identificación física de los autores y partícipes del hecho

VII. Recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado;...”

Con la intención de no ser repetitiva con la información mencionada en este capítulo y capítulos posteriores, la misma fue referida de manera general.

4.3. ETAPA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA ACUSATORIO.

Una vez que ya analizamos el Marco Legal establecido en la Etapa de Investigación dentro del Sistema Acusatorio, basándome en el Protocolo de Cadena de Custodia elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y en la Metodología de la Investigación Criminalística en el Lugar de los Hechos de Juventino Montiel Sosa, desde una panorámica personal , considerado que, el Protocolo de Cadena de Custodia deberá contener las siguientes características

4.3.1. Cadena de Custodia

a) La noticia en el lugar de los hechos

Como lo establece la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (2012):

“Este será entonces el inicio del protocolo de investigación, pero es también el Inicio

Conceptual de la Cadena de custodia, por cuanto se subentiende que existen evidencias e indicios que fundamentan haber alertado a los servicios encargados de administrar justicia, a raíz de algún ilícito, cuyo ilícito se acredita con las mismas evidencia e indicios, que dan origen al llamado de la noticia". (Penal, 2012)

b) Directivas

Los peritos, deberán asegurarse de portar la vestimenta adecuada para no contaminar la escena donde se encuentran estos vestigios, en este sentido, se recomendará entonces usar: guantes, traje, cubre calzado, cubre pelo y cubre boca. Se debe registrar la hora de llegada en el Formato de descripción del lugar de los hechos.

c) Tendencias a la protección del lugar de los hechos

Para MONTIEL SOSA, en todos los casos al dar inicio a una investigación de este índole, debe proteger siempre el escenario antes de la primera intervención del representante del Ministerio Público, en su inspección ministerial, coadyuvado por sus órganos auxiliares, es decir los organismos de Policía de Investigación y los Expertos o Peritos, teniendo presente que el éxito de toda investigación depende de la protección que se brinde al lugar de los hechos, para ello se debe:

- Llegar a la brevedad al lugar donde se reporta el siniestro, así mismo si los hay, desalojar a la gente que podrá ser potencialmente contaminadores de la escena del crimen.
- No mover ni tocar nada, que no haya sido examinando y fijando el lugar.
- Seleccionar las áreas por donde caminará, a fin de no alterar o borrar algún indicio.
- Asegurar y preservar el lugar de los hechos como primera intervención de la policía contribuirá a una mejor investigación y en consecuencias, en mayores posibilidades de aprehender a los responsables. (MONTIEL SOSA, 2008)

4.3.2. Inspecciones en el lugar de los hechos

La observación consiste en mirar con atención y detenimiento el lugar, con el fin de encontrar los indicios evidencias y todo lo relacionado con los hechos del mismo.

Después de observar de manera meticulosa el sitio y sus evidencias físicas y seleccionar las que están muy vinculadas con el hecho, se estará en posibilidad de verificar en forma material la realidad del caso a través de inducciones y deducciones, además, conocer sus circunstancias, para Montiel Sosa se debe:

- a) En lugares cerrados, desde la entrada principal se dirige la vista a manera de abanico hacia el interior , de derecha a izquierda y viceversa, cuantas veces sea necesario; después de recibir la información general del lugar, sea

acerca al indicio y las características del lugar, se acerca al indicio principal del escenario, que puede ser un cadáver, una caja fuerte o una registradora violentada, o la evidencia principal significativa; se continua por las áreas circundantes en forma de espiral, extendiéndose hasta la periferia, lo que incluye muebles, muros, ventanas, puertas, cortinas, escaleras, etc. Para terminar con el techo. La observación puede aplicarse a otras habitaciones o lugares continuos.

- b) En lugares abiertos, protegidos ya en un diámetro mínimo de 50 m, el cual se toma como centro el sitio exacto de los hechos o del hallazgo primordial, se observa, abanicando con la vista de derecha a izquierda y viceversa cuantas veces sea necesario hasta recibir la información general indiciaria que se requiere; enseguida se desplaza al centro mismo del lugar con el debido cuidado de no pisar o alterar las evidencias descubiertas y en forma de espiral se mira hasta llegar a la periferia sin que pase inadvertida ninguna área. La observación se puede extender a otras áreas adjuntas o distantes, según las características del hecho, del lugar y de las evidencias que se descubran, en virtud de que la presencia física de algunas señalan el camino para localizar otras, y constituyen elementos significativos para reconocer desplazamientos, maniobras, conductas realizadas.

c) En lugares abiertos rurales donde se buscan objetos huellas, instrumentos, armas o cadáveres, tales como son las zonas laterales de las carreteras, brechas o caminos, es necesario extender a los lados una línea de hombres observadores de por lo menos 250 metros y que no estén separados uno del otro por más de cinco metros, de acuerdo con los recursos humanos disponibles. Se observa a manera de abanico, de derecha a izquierda y viceversa, desde caminarse con sumo cuidado con la vista hacia el piso, vegetación, rocas, montículos de tierra, arboles, etc., hasta cubrir las áreas necesarias acordadas por el investigador, la operación puede repetirse de regreso hasta estar seguros de haber encontrado o no las evidencias que se buscan.

El objetivo que se busca en la metodología de la observación, es que no se pase nada inadvertido en la observación del lugar y búsqueda de indicios; así mismo que se realice una perfecta fijación del lugar y colección de indicios asociados con el hecho. (MONTIEL SOSA, 2008)

4.3.3. La recolección de las evidencias

Se seleccionara de acuerdo la observación que se debe considerar como indicio y cual no, lo anterior tendrá que determinarse de acuerdo al investigador.

La numeración de la evidencia e indicio estará a cargo de un solo agente investigador, debe mantener, en lo posible, un orden

secuencial dependiendo del tipo de rastreo que utilizaron para la revisión del lugar de los hechos. El tipo de numeración, dependerá el terreno, ubicación de la evidencia e indicio y tipo de evidencia e indicio.

También se levantarán con las técnicas adecuadas, se embalarán en contenedores idóneos y se etiquetará con los datos de procedencia, para enviarlos a laboratorio de criminalística o unidades periciales correspondientes.

Para Montiel Sosa, refiere que el Dr. Rafael Moreno Gonzales menciona que: “el manejo inadecuado de la evidencia física conduce a su contaminación, deterioro, siendo esta última la causa más frecuente que impide su ulterior examen en el laboratorio” (Sosa, 2010). Por esta razón cuando llegue el momento de proceder a su levantamiento se realiza con la debida técnica a fin de evitar tan lamentables consecuencias.

4.3.4. Coronación del lugar de los hechos

Según MONTIEL SOSA (2008) Se entiende por fijación del lugar, la aplicación de técnicas que registran las características generales y particulares de un lugar relacionado con un hecho presuntamente delictuoso” (MONTIEL SOSA, 2008)

Este punto, imprescindible dentro de la investigación, tiene como principal objetivo plasmar en forma permanente el lugar de los hechos y de esta forma ilustrar posteriormente al investigador o

cualquier persona que tenga injerencia dentro de la labor criminalística, inmutable los indicios susceptibles.

Hay que considerar la fijación del lugar, como la aplicación de técnicas que registran las características generales y particulares de un lugar con un hecho presuntamente delictuoso.

4.3.5 La descripción escrita.

El realizar un buen esclarecimiento del lugar de los hechos, es fundamental en todos los casos, en los cuales debe ser trascendental, debe tener una metodología clara, precisa, directa y lógica.

Al realizarlo se debe tener un sentido de meticulosidad, de forma general, iniciando por el lugar de los hechos entre lo que se destaca lo principal de una vivienda; ubicación, contorno, separaciones de cuartos, entradas y salidas de la habitación, esto con el fin de establecer las localizaciones de los indicios, tales como la localización de la víctima o el cadáver, dentro de la cual se deben de incluir sus características como edad, sexo, posiciones así como identificar las lesiones correspondientes, las características con las que se produjeron, y en el caso de fuese una persona no identificada se deberá de proceder con la media afiliación.

Para MONTIEL SOSA, se debe de hacer revisiones minuciosas, baños, cocinas, bolsas, etc., en estos sitios es muy probable que el presunto autor del delito haga de su uso de algunos de estos

instrumentos que se podrían relacionar con el hecho delictuoso para eliminar evidencias relacionadas a este, un claro ejemplo que se podría tomar sería el tratar de eliminar armas punzocortantes, ropa, calzado etc.

La importancia de la descripción escrita radica en tres puntos importantes:

- a)** Al momento de hacer las observaciones al lugar de los hechos o a las víctimas se deben de evitar errores, esto pudiera suceder cuando no se le toma la importancia al observar los indicios encontrados o la relación de objetos hacia este suceso.
- b)** La persona encargada de la recolección de las evidencias debe de tener en cuenta que no se pueden dejar atrás detalles tan importantes, ya que esto puede repercutir en el desarrollo del caso en instancias legislativas.
- c)** Cuando se describe el lugar de los hechos, los mecanismos de las lesiones, están deben tener un formato o redacción de manera directa tanto en su inicio como su desarrollo.
(MONTIEL SOSA, 2008)

La descripción escrita se debe tener en cuenta que los detalles son fundamentales por más insignificantes que estos pudieran parecer, se debe indagar en todo sentido, desde las características las generales a las más específicas, ya que todo esto se puede utilizar como recursos en informes las

cuales tendrán un valor fundamental de acuerdo a las interpretaciones que se le generan a estas.

4.4. LAS FUNCIONES CONFERIDAS A LAS POLICÍAS EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN.

Luego de examinar los capítulos preliminares, discurro sobre lo importante que debe de ser distinguir las facultades que tienen los policías de Seguridad Pública, de suma importancia realizar la distinción de las facultades conferidas a la Policía de Seguridad Pública, en todos sus niveles, y la Policía Ministerial Investigadora.

La policía federal y sus facultades, la institución (local), al igual como las que corresponden a la policía federal o local o ministerial adecuadamente, son las siguientes:

4.4.1. Policía Federal, Estatal y Municipal (Seguridad Pública).

- a) La recepción de la acusación sobre los hechos delictivos que se han constituido, como lo dispone el Art. 3° del Cód. Federal sobre los procedimientos penales y las demás disposiciones que se deben aplicar.
- b) El participar durante la investigación ministerial, cuando se detienen a las personas y se aseguran los bienes que el Min. Público crea conveniente relacionar con los hechos delictivos, asimismo, tener que aplicar las diligencias que sean necesarias para poder esclarecer sobre los delitos y también poder

identificar a los posibles comprometidos, debe ser en base al desempeño de los mandatos del Ministerio Público (Facultad Derivada).

- c) Realizar detenciones de acuerdo a l Art. 16° de la C.P.E.U.M y el Cód. Federal de Procedimientos Penales.
- d) Registrar la detención de manera inmediata en el Registro Administrativo de Detenciones del Centro Nacional de Información, asimismo, expedir sin aplazamiento y por ningún medio la información al Ministerio Público.
- e) Perennizar el lugar de los hechos y los indicios de forma íntegra, como las huellas o rastros del hecho delictivo, herramientas, cosas o productos del delito, comunicando de forma rápida al Ministerio Público. Las unidades cuya facultad en el procedimiento sobre la zona donde sucedieron los hechos se convendrán fijar, levantar, embalar y posteriormente llevar la evidencia física y ponerla a disposición del Ministerio Público, de acuerdo al procedimiento anterior determinado por este y en términos de las disposiciones aplicables (Facultad Derivada).
- f) Avalar que existen precedentes sobre las diligencias realizadas, asimismo, tener una revisión y hacerle seguimiento a todo ello, en el transcurso que se

realice la investigación ministerial se deben obtener los informes sobre su debido progreso, luego rendir cuentas al Min. Público, sin perjudicar aquellos informes sobre lo que este solicite.

- g) Pronunciarse por intermedio de informes, partes policiales y demás documentos cumpliendo con los requisitos de fondo, en consecuencia, se establezcan diversas disposiciones que se puedan aplicar, en efecto servirá de ayuda para aquellos conocimientos que sean necesarios.
- h) Brindar una atención a las personas que han sido víctimas afectadas o aquellos que tienen calidad de testigos en un delito.
- i) Interrogar aquellos individuos que podrían aportar con detalles y elementos importantes que sean útiles para la investigación, en los casos de flagrancia o por mandato del Min. Público, en disposiciones que se puedan aplicar. Se dejará referencia sobre las entrevistas que se apliquen en un registro sobre la investigación, siendo ratificada por la autoridad ministerial o judicial para que pueda tener un valor probatorio correspondiente.
- j) Recaudar toda la información necesaria para el Min. Público que tenga conocimiento sobre el caso, para

poder sustentar sobre el delito y la posible responsabilidad sobre el imputado.

- k) Introducir a la base de datos información criminalística y de personal de la Secretaría y del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, pero, que dicha información logre ser útil para la investigación de los delitos, hacer uso de aquel contenido sobre sus facultades, sin efectuar el derecho de las personas sobre sus datos personales.

4.4.2. Policía Ministerial (Investigación Científica del Delito).

- a) Es la recepción de alguna denuncia sobre aquellos hechos constituidos como delito, en cláusulas en lo dispuesto en el Art. 3° del C.P. de procedimientos penales y las demás disposiciones ajustables.
- b) Ser partícipe en la investigación ministerial, cuando existe una detención de personas y se debe resguardar los bienes del Min. Público que crea conveniente sobre los hechos delictivos, asimismo, llevar las diligencias que le parezca necesaria el cual le permita poder esclarecer los delitos y de esa forma poder identificar a los posibles responsables, cumpliendo en todo momento con los mandatos del Min. Público.

- c) Realizar las detenciones de acuerdo a lo que se dispone en el Art. 16° de la CPEUM y el Cód. Federal de Procedimientos Penales.
- d) Registrar de forma inmediata la detención que se ha ejecutado en el Reg. Adm. Sobre las detenciones el Centro Nacional de Información, asimismo, tener que enviar con premura por cualquier medio informativo la indagación al Min. Público.
- e) Conservar En el lugar de los hechos los indicios y su integridad, asimismo, los que se pueda hallar como son las huellas, huellas o residuos sobre los hechos donde se han cometido el delito, así como todo tipo de objeto, que tenga que estar relacionado con el delito, se debe poner en aviso de forma rápida al Min. Público. Aquellos que se encuentren autorizados para realizar el procesamiento en el lugar de los hechos deben hacer lo siguiente: fijar, levantar, embalar y adjudicar dicha evidencia material al Min. Público, de acuerdo al proceso que se establecido de forma previa y en los dispuesto de cómo aplicar.
- f) Por intermedio del Ministerio Publico se debe solicitar a las autoridades que son competentes la información y todo tipo de documentos para fines de la investigación.

- g) Avalar que deben existir de cada una las actuaciones una constancia de lo realizado, llevando un control y el seguimiento de dichas diligencias, en el transcurso de la investigación ministerial se tendrá que obtener información de cómo se va desarrollando las diligencias, y rendir cuentas al Min. Público, sin perjudicar la información que se solicite.
- h) Pronunciarse por intermedio de informes, partes policiales y otra documentación que se pueda desarrollar, cumpliendo con los requerimientos de fondo y forma que se establecen en las diligencias establecidas, para ello se tendrán que ayudar con los resultados que sean necesarios.
- i) Atender y todas las víctimas agraviadas o testigos del delito.
- j) Cumplir con lo ordenado y otras disposiciones ministeriales y jurisdiccionales que logre tener conocimiento sobre sus funciones.
- k) Recaudar todo tipo de información probatoria que sea de utilidad para el Min. Público que tenga conocimiento sobre el caso, y de esa manera poder acreditar el delito y la responsabilidad por parte del imputado de acuerdo a las instituciones de aquel.
- l) Incluir en la fuente de datos criminalísticas y de personal de la Sec. y del Sistema Nacional de Inf. de

Seguridad Pública, toda información cuya finalidad sea útil para poder investigar los delitos, y dicho contenido pueda ser usado bajo sus atribuciones, de esa manera no afectar el derecho de individuos sobre sus datos personales.

- m) En la reforma Constitucional del año 2008, hubo un importante cambio con relación a los instrucciones y adiestramientos que nuestra policía debe ilustrarse, para que dicha labor que desempeñan pueda ser en base a diligencias con un enfoque más científico y de campo, ya que dicha labor únicamente era efectuada por la policía auxiliar del Ministerio Publico.
- n) Con estas nuevas funciones delegadas a la policía, esta debe ser capaz de poder realizar una labor de peritaje de forma correcta o el auxiliar de este, así como: perennizar el lugar de los hechos, realizar un mapeo del mismo describiéndolo de forma correcta, tomar fotografías, la planimetría, el video, el moldeado y después al dar por concluido el proceso, debe poseer una comprensión exacta sobre el levantamiento de todos los indicios, su embalaje, su rotulado, al culminar con estos pasos, pasará asegurar las evidencias del lugar de los hechos.

- o) Se debe tener en cuenta lo expuesto con anterioridad, es indispensable tener que retomar la interrogante que se establece para el planteamiento del problema del siguiente trabajo, que es: ¿La policía está realmente capacitada o cuenta con los conocimientos para cumplir las facultades de auxilio a la Policía Ministerial en la etapa de investigación en el nuevo Sistema Penal Acusatorio?
- p) Examinando sobre la realidad de nuestro país en relación con la función de investigación que debe desempeñar la policía, a mi criterio me parece que es muy alarmante, por ser una labor sumamente importante el cual se les concede a nuestra policía, porque no se encuentran capacitados de la mejor forma para lograr desempeñarse con éxito sobre una labor importante, teniendo en cuenta que la sociedad en general hacia los policías no es de buen gusto y carecen de respeto, ya que se ha podido apreciar cometen muchos errores y muy graves.
- q) Darle más funciones es un problema, ya que carecen de confianza ante la sociedad, teniendo en cuenta que no poseen una buena práctica en dicha función.
- r) Existe un problema, los agentes se vuelven policías no por vocación sino porque no encuentran otra

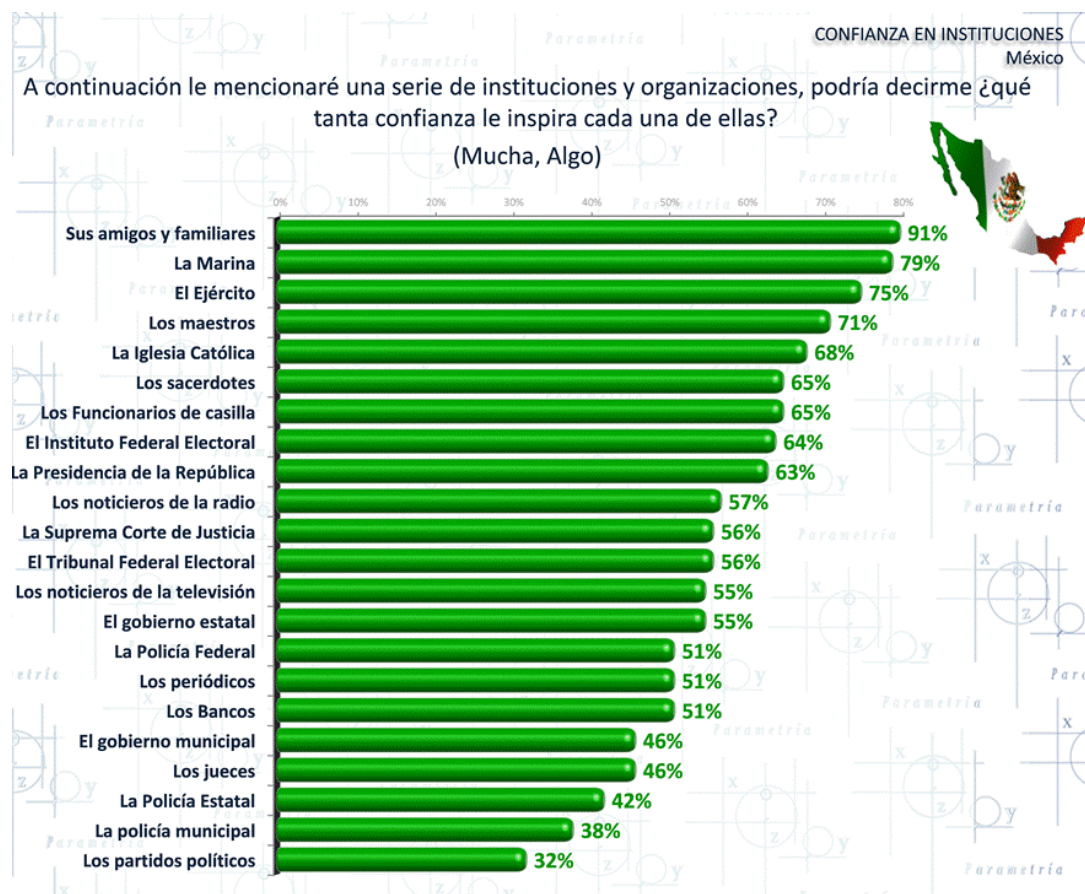
salida rentable de trabajo y así poder percibir un sueldo, teniendo en cuenta que sólo deben cumplir con tener los requisitos que se requiera, siendo ello incorrecto, sin embargo, el otro problema es que no quieren capacitarse u obtener mayor conocimiento, pues la sociedad no requiere de ese tipo de personas como policías, también se adhiere a ello la escasez de recursos materiales para que puedan realizar una correcta y mejor investigación. En consecuencia la sociedad no tiene confianza en los policías que resguardan su ciudad y es la mismo ciudadano no pregunta más bien no quiere participar en estos temas.

PARTE III

ANÁLISIS DE DATOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

III. ANALISIS DE DATOS

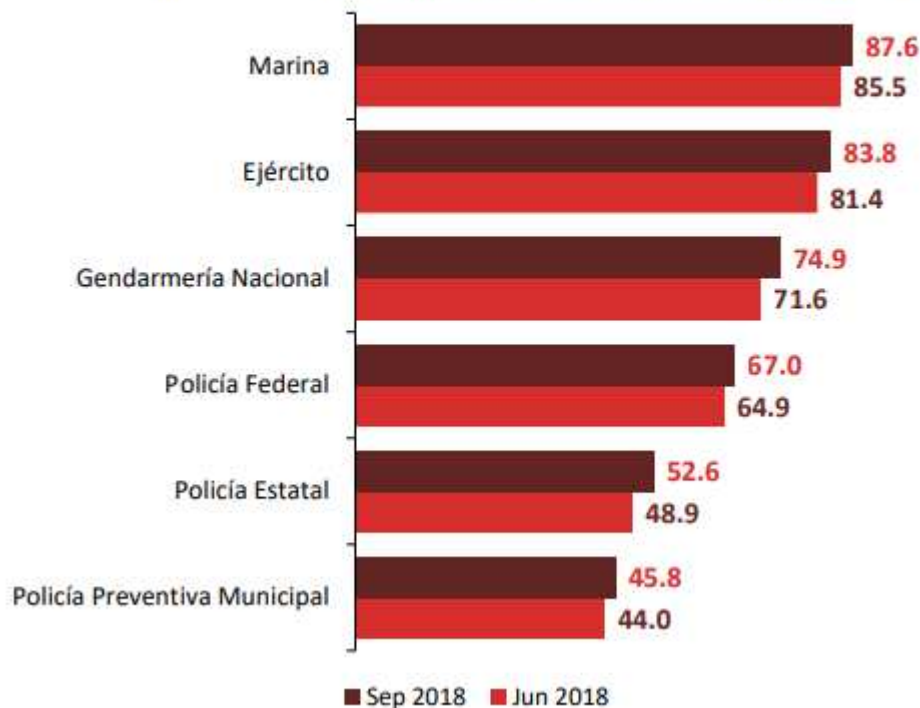
En la presente gráfica donde se refleja la encuesta del año 2012 con una base de 500 casos, emitida por el centro de investigación estratégica análisis de opinión y mercado refleja en base a que instituciones mexicanas muestran un indicador de confianza en la sociedad, asimismo se aprecia que en el año 2012 la ciudadanía tenía más confianza a sus amigos y a sus familiares con un 91%, la marina con un 79% mayor que la policía Federal que sólo alcanza el 51% y en los últimos peldaños de confianza tenemos a la policía Estatal con 42%, a la policía municipal con 48%. En consecuencia ello nos muestra que en el año 2012 el nivel de confianza con las entidades del estado cuyo deber es salvaguardar el orden interno, no reflejaban buenas expectativas hacia la ciudadanía. Fuente: parametría www.parametría.com.mx



La presente encuesta Nacional sobre seguridad pública y urbana (ENSU) en el mes de junio y septiembre de 2018, se tomó como fuente una población con la edad de 18 años, donde refieren que tienen un nivel de confianza sobre las autoridades como la marina con un porcentaje mayor en los meses de junio con 85.5% y en septiembre con 87.6%, mientras que la policía preventiva municipal con el más bajo porcentaje de confianza en los meses de junio con 44.0% y en septiembre con 45.8%. Asimismo, nos demuestra que la población no confía en las entidades policiales cuya función es cuidar el orden interno y que dicha función no se ve reflejada en los niveles de confianza del ciudadano joven, es más prefieren a la Marina y el ejército teniendo en cuenta que su función es la defensa nacional, cuidar las fronteras y no el orden interno.

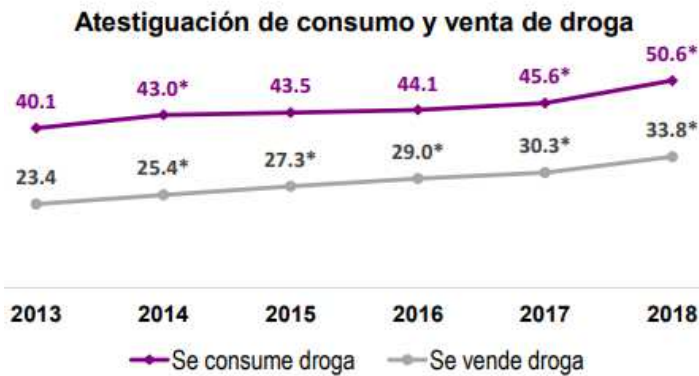
Fuente: ENSU septiembre 2018

**Nivel de percepción sobre la *Confianza*¹
que la sociedad manifiesta respecto de autoridades**



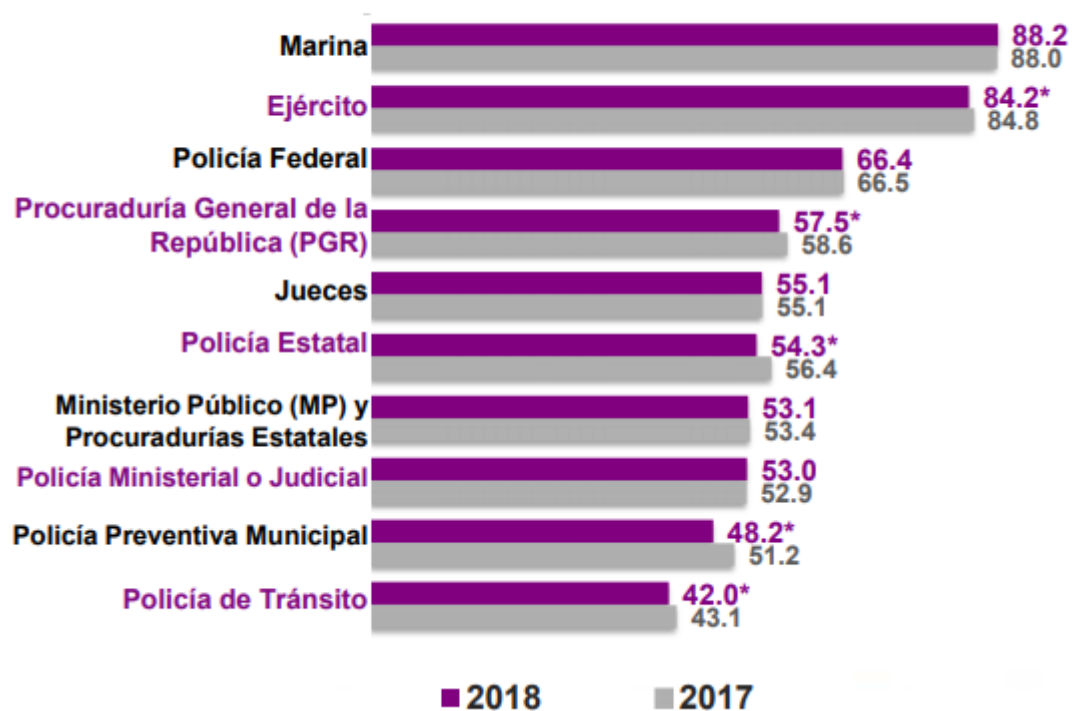
Por intermedio de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2018, sobre la percepción que se tiene sobre la seguridad pública y las conductas delictivas antisociales. Sin embargo, se puede apreciar a nivel nacional, en los periodos de marzo y abril del año 2018, existe un 66.4% dentro de una población encuestada de 18 años donde señalan que en los alrededores de sus viviendas, como una de las primeras conductas es el consumo de alcohol en la calles, asimismo, se ve reflejado en bajo porcentaje que no ha ido en forma descendiente la violencia policíaca contra los ciudadanos, la cual se ve reflejado en el año 2017 con un 14.6% comparado con el año 2018 que aumentó a 16.8%, que en lugar de mejorar esta empeorando. Fuente: ENVIPE 2018

Distribución porcentual sobre el conocimiento de la ocurrencia de conductas delictivas o antisociales

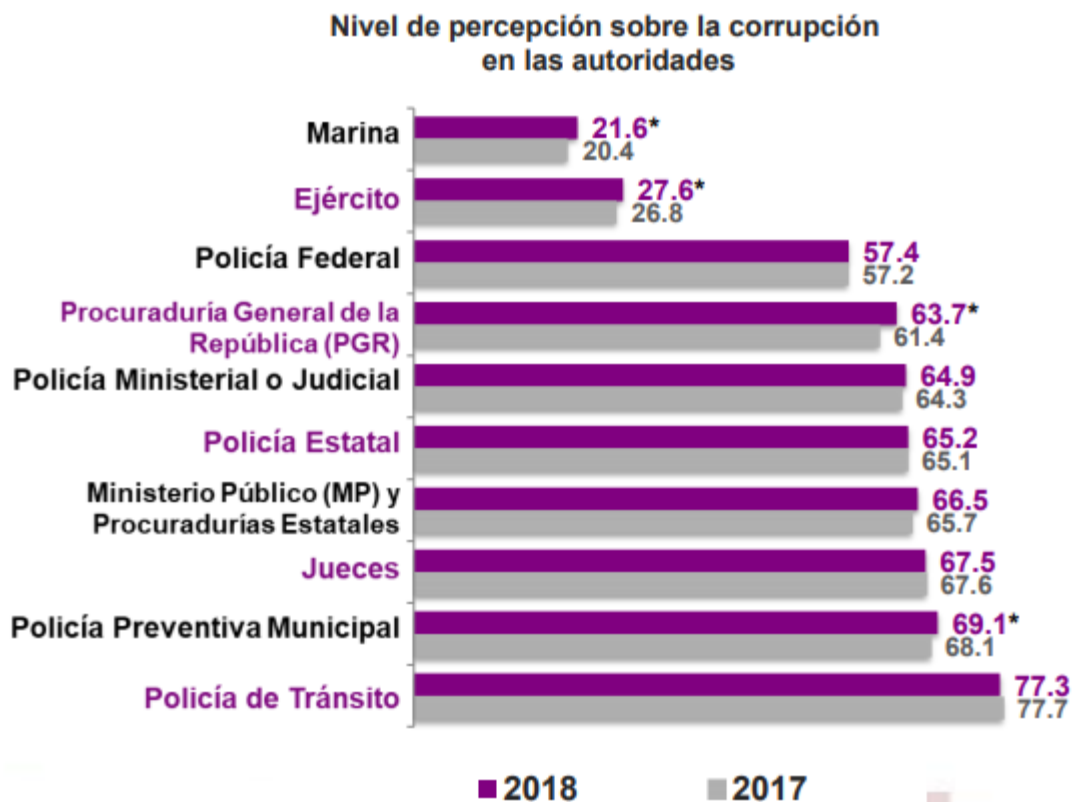


Por intermedio de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2018, sobre la perspectiva de desempeño sobre el nivel de confianza en las autoridades relacionada al seguridad pública, en razón al nivel de confianza sobre las autoridades relacionadas a la seguridad pública, nacional, procuraduría y la administración de justicia. Los jóvenes de 18 años a quienes se les aplicaron la encuesta, ellos consideran 88.0% en el año 2017 y el 88.2% en el año 2018 se siente identificado con la marina, son quienes conciben en los jóvenes esa confianza inspiradora, seguida del ejercito con 84.8% en el año 2017 y con 84.2% en el año 2018. Sin embargo en el más bajo se puede hallar a la policía de tránsito con 43.1% en el año 2017 y con 42.0% en el año 2018, teniendo en cuenta que la Policía Federa tiene en el año 2017 el 66.5% y en el año 2018 el 84.2%, Policía Estatal en el año 2017 tiene el 53.4% y en el año 2018 tiene el 54.3% y la Policía Preventiva Municipal en el año 2017 el 51.2% y en el año 2018 el 48.2%, se puede observar que están por debajo del promedio que se espera, se demuestra que la ciudadanía no sigue teniendo aún confianza en sus autoridades que se deben preocupar por el orden interno, pues tienen esa empatía con las fuerzas armas que brindan un servicio de seguridad fronterizo. Fuente: ENVIPE 2018

Nivel de percepción de confianza de la sociedad en autoridades



Por intermedio de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2018, aplicada en jóvenes de 18 años sobre la perspectiva que tienen de sus autoridades y la corrupción, en la presente indagación se aprecia que la marina en el año 2017 con 20.4% y en el año 2018 con 21.6% la población juvenil cree que son los menos corruptos seguidos del ejército en el año 2017 con 26.8% en el año 2018 con 27.6, sin embargo la Policía Federal tiene en el año 2017 el 57.2% y en el año 2018 el 57.4%, la Policía Estatal en el año 2017 con 65.1% y en el año 2018 con 65.2%, la Policía Preventiva Municipal en el año 2017 con el 68.1% y en el año 2018 con el 69.1% y la policía de tránsito en el año 2017 con el 77.7% y en el año 2018 con el 77.3%, cabe resaltar que existe un alto índice de corrupción en los funcionarios que velan por la seguridad interna del país, corrupción que se ve reflejada en la falta de intereses juvenil por sentir esa empatía por la policía. Fuente: ENVIPE 2018



Por intermedio de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2018, aplicada en jóvenes de 18 años sobre el conocimiento del accionar realizado por el municipio o localidad, tenemos en base al conocimiento sobre la sociedad en relación a las acciones aplicadas para una mejor seguridad pública, teniendo en cuenta sobre el mejor alumbrado en el año 2017 fue el 53.4% y en el año 2018 el 50.4%, teniendo en cuenta como uno de los más porcentajes, sobre el mayor patrullaje y vigilancia policiaca en el año 2017 fue el 44.7% disminuyendo en el año 2018 a un 40.5%, el combatir la corrupción en el año 2017 fue de 13.4% disminuyendo en el año 2018 a un 9.6%, lo cual demuestra que tanto el patrullaje como la corrupción ambos no existe una mejora, y que ello perjudica el bienestar social y el bien común que todo ciudadano espera. Fuente: ENVIPE 2018



CONCLUSIONES

PRIMERO: Concluyo que, los oficiales en el espacio como parte del funcionamiento en el sistema penal, creando y formando acciones de proximidad con los ciudadanos, previniendo e interviniendo en los conflictos presentados en la sociedad, en este camino que crearon cada día a tomado más fuerza a consecuencia de la inseguridad que vivimos hoy en día y la aceptación de la emergencia, teniendo en cuenta, que las opiniones de la ciudadanía y los políticos siempre influyen con la exigencia del control social y la tolerancia a la represión.

Sin embargo, la actuación policial en el ámbito de sus funciones, no se aproximan a lo requerido por las expectativas de la ciudadanía, ya que su desempeño carece de formación profesional adecuada para este nuevo sistema procedimental, teniendo en cuenta que en dicha esfera jurídica se requiere que los efectivos policiales se encuentren capacitados para poder ejercer su función de forma correcta y eficiente.

SEGUNDO: Concluyo que, es algo muy importante y significativo sobre los conflictos relacionado en base a situaciones socioeconómicas de una sociedad. Para ello, es necesario un mapa donde se registren los lugares con más problemas sociales, donde se permita tener una tarea de prevención, teniendo en cuenta, que la policía como primer respondiente en la escena de un hecho delictivo, ya sea para intervenir en un control de identidad o detener a un individuo debe tener conocimientos previos de

cómo actuar para intervenir y de esa manera poder perennizar la escena del crimen, sin contaminar las evidencias, pesquisas y futuras pruebas con el debido respeto a los Derechos Humanos y así poder mejorar su imagen deteriorada en la presente sociedad.

TERCERO: Concluyo que, la labor de las autoridades locales es de suma importancia en las labores de prevención y seguridad ciudadana, y de esa manera mejorar la calidad de vida de los ciudadanos por intermedio del Estado, pudiendo aportar la mayor información posible sobre el tema y de esa manera tener la mayor aceptación en los sectores del país, pudiendo así ellos recibir y detectar cualquier cosa como reportes, insuficiencias, anomalías, servicios, y cosas generales de las comunidades.

Asimismo, se debe tomar en cuenta que el nuevo sistema procesal penal acusatorio donde se delegan funciones a los policías, requiere que los policías intervengan como auxiliares que faciliten la investigación y a la vez cumplan con la exigencia del control social, por lo tanto, se requiere que los efectivos del orden deben tener capacitaciones en la preservación de la prueba y de esa manera poder hacer más sencilla la aplicación a este sistema procesal penal acusatorio.

CUARTO: Por último se concluye que, en toda sociedad democrática la policía es quién representa al Estado en todo conflicto social, es la forma física de hacer cumplir y salvaguardar el Bien común, por ello, el Estado debe encargarse de capacitar a sus efectivos policiales, para desaparecer esas carencias que entorpecen la verdadera finalidad de La Ley, que es salvaguardar a las personas y protegerlas cuando sus derechos se vean vulnerados: En consecuencia, si el Estado ha instaurado un sistema procesal acusatorio, este para que cumpla con su objetivo debe tener en cuenta que los elementos que la hacen efectiva y que todo parte de la prueba, los encargados de ello son los efectivos policiales, es por ello que se reitera que los efectivos policiales deben llevar cursos de: criminología, abordaje a las personas que presuntamente han cometido un delito y como deben hacerlo, promover la buena imagen de la Institución Policial, difundir a la sociedad por intermedio de los medios de comunicación que van a la vanguardia de los cambio sociales y jurídicos, etc. Pero en especial demostrar que los efectivos policiales conocen los parámetros ante la Ley y el respeto a los Derechos Humanos.

BIBLIOGRAFÍA

- ACERO, H. (2005). *Los gobiernos locales y la seguridad ciudadana*. Bogotá: Policía Nacional de Colombia.
- AGUILAR PORTALES, R. E. (2002). *Constitución y democracia*. Lima: Grijley.
- ALCALDE RODRÍGUEZ, E. (2003). *Los principios generales del derecho. Su función de garantía en el derecho público y privado chileno*. Chile: Universidad Católica de Chile.
- ÁLVAREZ LEDEZMA, M. I. (2008). *Conceptos Jurídicos Fundamentales*. Madrid: Trotta.
- AMOEDO SOUTO, C. A. (2000). *Poder policial y derecho administrativo*. Valencia: Servicio de Publicaciones.
- ANGULO ARANA, P. M. (2001). *La investigación del delito, el fiscal y la policía*. Bogotá: Gaceta Penal.
- ÁVILA, H. (2011). *Teoría de los principios*. Barcelona: Traavis.
- BALLBE, M. (1987). *La policía y la Constitución*. Madrid: Alianza.
- BARRÓN CRUZ, M. G. (2004). *Dilemas de la seguridad pública en México*. México: Instituto Nacional de Ciencias Penales.
- BASAVE FERNÁNDEZ DEL VALLE, A. (2001). *Filosofía del derecho*. México : Porrúa.
- BAUMANN, J. (1973). *Derecho Penal Conceptos Fundamentales y Sistema*. Buenos Aires : De Palma.

- BIDART CAMPOS, G. J. (2009). *Responsabilidad del Estado por la sustanciación de los procesos penales*. México: Porrúa .
- BODENHEIMER, E. (2008). *Teoría del Derecho*. México: Fondo de Cultura Económica.
- BUSTOS RAMÍREZ, J. (1984). *Manual de derecho penal español*. Barcelona: Ariel.
- CANOSA USERA, R. (1998). *Interpretación Constitucional y Formula Política*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- CARNELUTTI, F. (1971). *Derecho Civil y Penal II*. Buenos Aires : Ediciones jurídicas Europa .
- CARNELUTTI, F. (2003). *Derecho Procesal Penal* . Mexico: Oxford University.
- CARRARA, F. (1956). *Programa de Derecho Criminal Parte General Volumen II*. Bogota: Temis.
- CASSIN, R. S. (1971). *RESTRICTIONS AND LIMITATIONS ON HUMAN RIGHTS*. New York: Liber.
- CERVANTES MARTÍNEZ, J. D. (2004). *La Oralidad y la Inmediatez en la Práctica Procesal*. México: Porrúa.
- CHOWELL ARENAS, D. F. (2008). *Los Principios del Proceso Penal. Su Regulación en el Estado de Guanajuato*. México: Universidad de Guanajuato.

Consulta, G. d. (2008). *Reforma constitucional de Seguridad y Justicia*. Mexico : Talleres Graficos .

DAMMERT, L. (2008). *Seguridad y reforma policial en las Américas*. Buenos Aires: De Palma.

DAVID, R. (1973). *Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos*. Madrid : Aguilar .

DE OTTO, I. (1987). *Derecho Constitucional*. Barcelona: Ariel .

DEL CUETO, R. (2005). *Teoría del Derecho y dogmática jurídica contemporáneas*. México : Porrúa.

DÍAZ COUSELO, J. M. (1971). *Los Principios generales del derecho*. Buenos Aires: De palma.

DUCE, M., & GONZÁLEZ, F. (3). *Policía y estado de derecho: problemas en torno a su función y organización*. *Latinoamericana de Política Criminal*.

DWORKIN, R. (2002). *Los Derechos en Serio*. Barcelona: Ariel.

Federal, G. (2008). *Reforma Constitucional de Seguridad y justicia* . Mexico : Talleres Graficos de Mexico .

FERRAJOLI, L. (1995). *Derecho y Razon Teoria del Garantismo Penal* . Madrid : Editorial Trotta .

FERRAJOLI, L. (1995). *Derecho y Razon: Teoria del Garantismo Penal* . Madrid : Trotta .

FLORIAN, E. (1933). *Elementos de derecho Procesal Penal* . Barcelona : Bosch Casa .

FROMOW RANGEL, M. d. (2015). *Los procesos penales en México*. . Mexico: Porrúa.

GABALDON, Luis Gerardo y BIRKBECK, Christopher. (1917). *Criterios situacionales de funcionarios policiales sobre el uso de la fuerza física* . Maracaibo.

GARCÍA BELAUNDE, L. (1975). *La Justicia en los orígenes de la Filosofía del Derecho, Sociedad Peruana de Filosofía*. Lima : Trillas.

GARCIA RAMIREZ, S. (2008). *Reflexiones Sobre los Principios Rectores del Proceso Penal*. Barcelona: Civitas.

GOLDSTEIN, H. (1998). La nueva orientación policial: confrontando la complejidad. *Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociale*, 117-128.

GOLDSCHMIDT, JAMES (2010). *Derecho, Derecho Penal y Proceso: Derechos Fundamentales del Derecho*, Madrid, Barcelona, Buenos Aires.

GÓMEZ COLOMER, J. L. (2007). *La Investigación Criminal: Problemas actuales y perspectivas de unificación internacional*". Lima: Jurista Editores.

GONZÁLEZ CANO, M. I. (2009). *La Justicia Restaurativa en el Orden Penal*. Tirant Lo Blanch: Valencia.

GREENE, J. (2006). *La Policia de proximidad en Estados Unidos* . Granada : Jusiticia Penal .

HASSEMER, W., & MUÑOZ CONDE, F. (1989). *Introducción a la Criminología y al Derecho Penal*. Valencia: Tirant lo Blanch.

- HERRERA, A. (2006). *"Reforma Policial y Modernizacion de la Policiade Investigaciones de Chile"*. Santiago: Policia de Investigaciones de Chile .
- HIDALGO MURILLO, J. D. (2009). *Sistema Acusatorio Mexicano y Garantías del Proceso Penal*. México: Porrúa.
- HIDALGO MURILLO, J. D. (2009). *Sistema Acusatorio Mexicano y Garantías del Proceso Penal* . Mexico : Universidad Panamericana .
- HORVITZ LENNON, M. I., & LOPEZ MASLE, J. (2003). *Derecho Procesal Penal Chileno*. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile.
- IBAÑEZ, A. (2006). *Garantismo y Proceso Penal* . Bogota : Temis .
- IBAÑEZ, A. (2007). *Justicia Penal, Derechos y Garantías* . Lima: Temis-Palestra .
- JACQUES, M. (1956). *Los Derechos del Hombre y La Ley Natural: Cristianismo y la Ley Natural* . Buenos Aires : Depelma.
- JURGEN BAUMANN (1979). *Derecho Procesal Penal: Conceptos Fundamentales y Principios Procesales*. Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina.
- KALA, J. C. (2002). *Las políticas de seguridad, en busca de un modelo policial*. México: Porrua.
- LEA, J. (2006). *Delito y Modernidad. Nuevas Argumentaciones en la Criminologia realista de izquierda*. Mexico : Coyoacan .

LEVENE, RICADO 1993. Manual de Derecho Procesal Penal, 2ª Edición, Tomo I, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina.

LOSAGNO, M. (2008). *Gobernabilidad y desarrollo humano: una nueva aproximación al desarrollo*, Instituto internacionalidad de desarrollo. Madrid: Trotta.

MAIER, J. B. (2004). *Derecho Procesal Penal, Fundamentos*. Buenos Aires: Funadamentos.

MAIER, J. B. (2004). *Derecho Procesal Penal* . Buenos Aires : Editores del Puerto .

MEXICANOS, C. P. (1917). *Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos* . Mexico .

Mexico, S. d. (7 de Mayo de 1981). *gob.mx*. Recuperado el 06 de Noviembre de 2018, de gob.mx:
<https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/introduccion.php>

MONTIEL SOSA, J. (2008). *Criminalistica*. Mexico: Limusa.

MORRIS, C. W. (1967). *Western Political Thought*. New York: Basic Books.

Nacional, P. (2011). *Analisis de la edad bajo el marco de la seleccion e incorporacion a la policia nacional de Colombia*. Bogota : Imprenta Nacional .

NARANJO MESA, V. (2003). *Teoría constitucional e Instituciones Políticas*. Bogota: Editorial temis.

- ORTELLS RAMOS, Manuel y ARMENGOT VILAPLANA, Alicia. (2013). *Los Principios del Proceso* . Madrid: Aranzadi.
- Penal, S. T. (2012). *Mecanismo de Proteccion y Preservacion de Evidencia* . Mexico : Segob.
- PEREZ CANCHOLA, J. L. (2008). *La seguridad pública y la profesionalización del personal policial en la administración pública actual*. México: Porrúa.
- PÉREZ LUÑO, A. (2005). *Teoría del Derecho una concepción de la experiencia jurídica*. Madrid: Tecnos.
- QUINTERO OLIVARES, G. (1976). *Represión Penal y Estado de Derecho*. Barcelona: Tecno.
- RICO, J., & HINCHILLA, L. (2006). *Las reformas policiales en América Latina: situaciones, problemas y perspectivas*. Madrid: Civitas .
- RUIZ MANERO, J. (2000). *"Principios Jurídicos"*. Madrid: Trotta.
- SÁNCHEZ ZEPEDA, R., & ESPINO G. , M. (2010). *Fundamentación del Sistema Acusatorio y Perspectiva de su Implementación Desde la Experiencia Latinoamericana*. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- SANTIEZ CARRILES, R. A. (2009). *"Reforma constitucional"*. Mexico : Instituto de Investigaciones Juridicas.
- SHUTE, S. y HURLEY, S. (1998). *De los Derechos Humanos*. Madrid: Trotta.
- SILVA PALOMO, M. (2007). *Origen y Prevencion de la Criminalidad en Nuevo Leon*. Monterrey : UANL.

- TORRES, S. G. (2006). *Principios Generales del Juicio Oral Penal*. Mexico: Flores .
- UNIDAS, A. G. (1996). *Preamblelo del Pacto Internacional de Derechos Economicos y Culturales* . Estambul.
- Unidas, N. (10 de Diciembre de 1948). *Naciones Unidas* . Recuperado el 06 de Noviembre de 2018, de Naciones Unidas :
<http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>
- URIBE BENITEZ, O. (2010). *Principios Constitucionales Rectores del Sistema Penal en Mexico*. Mexico : Centro de Estudios de Derecho e Investigacion Parlamentaria .
- URIBE BENÍTEZ, O. (2010). *Principios Constitucionales Rectores del Sistema Penal en México*. México: Cámara de Diputados—LXI Legislatura.
- VITALE, E. (2010). *Democracia, derechos y uso de la fuerza pública*. México: Memoria del Congreso Internacional.
- VIVAS USSHER, G. (1999). *Manual de Derecho Procesal Penal*. Argentina : Alveroni Ediciones.
- VIVAS USSHER, G. (1999). *Manual de Derecho Procesal Penal*. Argentina: Alveroni Ediciones.
- VIVAS USSHER, G. (1999). *Manuel de Derecho Procesal Penal* . Cordova : Alveroni Ediciones .
- ZAFFARONI, E. R. (2005). *En torno de la cuestión penal*. Buenos Aires: De palma .